# **TEMA: AUTORIDADES ELECTORALES**

[SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. MEDIDAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ELECTORALES (LEGISLACIÓN DE OAXACA)](https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idTesis=11/2014" \t "_blank)

Se concluye que, con el fin de alcanzar acuerdos que solucionen de manera integral las diferencias respecto de las reglas y procedimientos aplicables para la elección de autoridades de pueblos indígenas cuando existan escenarios de conflicto que puedan tener un impacto social o cultural para los integrantes de la comunidad, derivados de elecciones regidas por sistemas normativos indígenas, previamente a la emisión de una resolución por parte de las autoridades administrativas o jurisdiccionales, se deben privilegiar medidas específicas y alternativas de solución de conflictos al interior de las comunidades

**DERECHO: DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**

## **JURISPRUDENCIA 11/2014**

|  |
| --- |
| **Roberto Garay Osorio y otros** **vs.** **Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca**  **Jurisprudencia 11/2014** |

**SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. MEDIDAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ELECTORALES (LEGISLACIÓN DE OAXACA).-**De lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [6 y 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo](https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idTesis=11/2014); [3, 4 y 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas](https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idTesis=11/2014); 16 y 25, apartado A, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 255, párrafos 2 y 6, 264, párrafo 2, 265 y 266 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, así como 76 y 79 de la Ley Orgánica Municipal de ese Estado, se concluye que, con el fin de alcanzar acuerdos que solucionen de manera integral las diferencias respecto de las reglas y procedimientos aplicables para la elección de autoridades de pueblos indígenas cuando existan escenarios de conflicto que puedan tener un impacto social o cultural para los integrantes de la comunidad, derivados de elecciones regidas por sistemas normativos indígenas, previamente a la emisión de una resolución por parte de las autoridades administrativas o jurisdiccionales, se deben privilegiar medidas específicas y alternativas de solución de conflictos al interior de las comunidades, de ser el caso, las previstas en la propia legislación estatal, mediante los procedimientos e instituciones que se consideren adecuados y válidos comunitariamente; lo anterior contribuye a garantizar el pleno respeto a su autonomía, así como el derecho que tienen a elegir a sus propias autoridades en el ejercicio de su libre determinación, al propiciar la participación de los miembros de la comunidad y de las autoridades en la solución de la controversia, de una manera alternativa a la concepción tradicional de la jurisdicción, sin que estas formas alternativas puedan contravenir preceptos y principios constitucionales y convencionales.

**Quinta Época:**

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.*[*SUP-JDC-1011/2013*](http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01011-2013.htm)*y acumulado.—Actores: Roberto Garay Osorio y otros.—Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca.—12 de septiembre de 2013.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Arturo Espinosa Silis y Mauricio I. del Toro Huerta.*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.*[*SUP-JDC-1097/2013*](http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01097-2013.htm)*.—Actores: Gudelia Aragón Hernández y otros.—Autoridad responsable: Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.—12 de diciembre de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Javier Miguel Ortiz Flores y Jorge Medellín Pino.*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.*[*SUP-JDC-1181/2013*](http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01181-2013.htm)*.—Actores: José Aragón Jiménez y otros.—Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca.—24 de diciembre de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.*

**La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiocho de mayo de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.**

**Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 28, 29 y 30.**

### **SENTENCIA** [**SUP-JDC-1011/2013**](http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01011-2013.htm)

**JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO**

**EXPEDIENTES:** SUP-JDC-1011/2013 Y SUP-JDC-1012/2013 ACUMULADOS

**ACTORES:** ROBERTO GARAY OSORIO, CONSTANTINA BALDES COVARRUBIAS Y OTROS

**AUTORIDAD RESPONSABLE:** TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE OAXACA

**MAGISTRADO PONENTE:** SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

**SECRETARIOS:** ARTURO ESPINOSA SILIS Y MAURICIO I. DEL TORO HUERTA

México, Distrito Federal, a doce de septiembre de dos mil trece.

**VISTOS**, para resolver, los autos de los juicios para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano, promovidos por Roberto Garay Osorio, en su calidad de agente de policía de la comunidad de la colonia Costa Rica, en el municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca, así como de Constantina Baldes Covarrubias y otros ciento dieciséis ciudadanos más, en su calidad de integrantes de dicha comunidad, a fin de controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, dictada en los autos del expediente JDCI/09/2013, con base en los siguientes

**A N T E C E D E N T E S**

De lo expuesto en la demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1. **Convocatoria y Asamblea.** El nueve de diciembre de dos mil doce, Mario Canseco Silva, en su carácter de agente de policía de la colonia Costa Rica, en el municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca, convocó a la comunidad a elegir, entre otros cargos, el de agente de policía para el periodo dos mil trece. De esta forma, el veintitrés de diciembre siguiente, se llevó a cabo la asamblea general comunitaria, en la que se eligieron, entre otros, al propio Mario Canseco Silva como agente de policía.
2. **Solicitud de nombramiento y toma de protesta.** Derivado del resultado de la asamblea comunitaria, Mario Canseco Silva en reiteradas ocasiones solicitó al Presidente Municipal de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, que le otorgara el nombramiento y le tomara protesta como agente de policía de la colonia Costa Rica, para el periodo dos mil trece.
3. **Solicitud de acreditación.** El veintidós de enero de dos mil trece, Mario Canseco Silva, solicitó a la Jefa del Departamento de Acreditación y Registro de Autoridades Municipales de la Secretaría General de Gobierno, la acreditación como agente de policía de la colonia Costa Rica, del municipio de San Mateo del Mar. El quince de febrero siguiente, se emitió la respuesta en el sentido de negar su solicitud por no haber presentado la documentación necesaria.
4. **Nueva asamblea comunitaria.** El veintisiete de enero de dos mil trece, se llevó a cabo una nueva asamblea comunitaria para elegir, entre otros cargos, el de agente de policía para el periodo dos mil trece. En esta ocasión, resultó electo Roberto Garay Osorio como agente de policía de la colonia Costa Rica.
5. **Toma de protesta y acreditación.** Al día siguiente, el Presidente Municipal de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, expidió el nombramiento de Roberto Garay Osorio como agente de policía de la colonia Costa Rica, tomándole la protesta del cargo. Asimismo, el veintiséis de febrero siguiente, se solicitó a la Jefa del Departamento de Acreditación y Registro de Autoridades Municipales de la Secretaría General de Gobierno, la acreditación como agente de policía, misma que fue emitida en ese mismo momento.
6. **Nueva solicitud de acreditación.** El primero de marzo de dos mil trece, Mario Canseco Silva solicitó nuevamente a la Jefa del Departamento de Acreditación y Registro de Autoridades Municipales de la Secretaría General de Gobierno, la acreditación como agente de policía, sin que al momento en que se inició la cadena impugnativa origen del presente juicio se hubiere dado respuesta.
7. **Juicio local para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía dentro del régimen de los sistemas normativos internos.** El veintisiete de abril del año en curso, Mario Canseco Silva presentó demanda de juicio ciudadano en contra del Presidente Municipal de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca y la Jefa del Departamento de Acreditación y Registro de Autoridades Municipales de la Secretaría General de Gobierno, por la omisión de expedir el nombramiento como agente de policía de la colonia Costa Rica, tomarle protesta del cargo y expedir la acreditación correspondiente.
8. **Sentencia del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca.** El catorce de junio de dos mil trece, se resolvió el JDCI/09/2013, en los siguientes términos:

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la ciudadana dentro del Régimen de Sistemas Normativos Internos, promovido por **Mario Canseco Silva**, en términos del CONSIDERANDO PRIMERO de este fallo.

**SEGUNDO.** Se **confirma el acta de asamblea de veintitrés de diciembre de dos mil doce**, celebrada con motivo del nombramiento de las autoridades de la agencia municipal de Colonia Costa Rica, municipio de San Mateo del Mar, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, en términos del CONSIDERANDO QUINTO de esta sentencia.

**TERCERO.-** Se **ordena** al Presidente Municipal de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, dentro del plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, expida el nombramiento y toma de protesta a favor de Mario Canseco Silva, como Agente de Policía Municipal de la Colonia Costa Rica del Municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, en términos del considerando QUINTO de esta sentencia.

**CUARTO.-** Se **ordena** a la Jefa del Departamento de Acreditación y Registro de Autoridades Municipales adscrita a la Secretaría General de Gobierno, *dentro del* ***plazo de tres días****, expida la acreditación al ciudadano Mario Canseco Silva, como agente de policía municipal de la Colonia Costa Rica, del Municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, en términos del considerando QUINTO de esta sentencia.*

**QUINTO.** Se deja **sin efecto el acta** de sesión de cabildo emitida por el Ayuntamiento Constitucional de San Mateo del Mar, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, de **veintisiete de enero de dos mil trece**, en términos del CONSIDERANDO QUINTO de esta sentencia.

**SEXTO.** Se deja **sin efectos el nombramiento y toma de protesta** expedidos por el Ayuntamiento aludido, al ciudadano que fue elegido en la asamblea comunitaria de veintisiete de enero de dos mil trece, por las razones dadas en el CONSIDERANDO QUINTO de esta ejecutoria.

**SÉPTIMO.** Se deja **sin efecto la acreditación** de la Jefa del Departamento de Acreditación y Registro de Autoridades Municipales adscrita a la Secretaría General de Gobierno, *expedida a favor de Roberto Garay Osorio, por las razones expuestas en el considerando QUINTO de esta sentencia.*

**OCTAVO.** El presidente municipal, el Ayuntamiento Constitucional de San Mateo del Mar, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca y la Jefe del Departamento de Acreditación y registro de autoridades municipales de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, informarán a este Tribunal Electoral sobre el cabal cumplimiento de lo ordenado en la presente ejecutoria, dentro de las **veinticuatro horas** siguientes a que esto ocurra, **apercibido** en términos del CONSIDERANDO SEXTO de esta sentencia.

**NOVENO.** Notifíquese a las partes en términos del CONSIDERANDO SÉPTIMO de esta sentencia.

1. **Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.** En contra de la sentencia emitida por el tribunal local, el nueve de julio siguiente, se presentaron las demandas de los juicios ciudadanos que se resuelven.
2. **Turno.** En su oportunidad, los expedientes formados con motivo de las demandas presentadas por Roberto Garay Osorio, Constantina Baldes Covarrubias y otros, fueron turnadas a la ponencia del Magistrado Salvador O. Nava Gomar.
3. **Facultad de atracción y acumulación.** Mediante acuerdo de Sala de once de septiembre de dos mil trece se ejerció facultad de atracción a efecto de conocer y resolver los medios de impugnación al rubro citados, y se ordenó la acumulación de los mismos.
4. **Admisión y cierre de instrucción.** En su oportunidad, el Magistrado instructor radicó, admitió y declaró cerrada instrucción de los juicios a resolver.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. *Competencia***

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro identificado, en términos del acuerdo de once de septiembre de dos mil trece, en que se ejerció facultad de atracción, en virtud de la importancia y trascendencia de la materia de la controversia y al tratarse de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por varios ciudadanos integrantes de la comunidad indígena de la colonia Costa Rica, en el municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), 189, fracción I, inciso e), y 189 bis fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso g), y 83, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

**SEGUNDO. *Procedencia***

Los escritos de demanda cumplen con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7; 8; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b; 79, párrafo 1, y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se demuestra enseguida:

**Forma.** Las demandas de los juicios ciudadanos se presentaron por escrito ante el Tribunal responsable haciéndose constar el nombre y firma autógrafa de los promoventes, el domicilio para oír y recibir notificaciones; el acto impugnado y la autoridad responsable, así como los hechos en los que se funda la impugnación y lo agravios que se estiman causa la misma.

**Oportunidad.** La demanda de juicio ciudadano fue promovida de manera oportuna, pues si bien la sentencia que se impugna fue emitida el catorce de junio de dos mil trece, lo cierto es que los actores aducen que tuvieron conocimiento del acto impugnado el cinco de julio de dos mil trece, al acudir ante el Presidente Municipal de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, y el escrito de demanda se presentó el nueve siguiente, sin que ello fuera motivo de pronunciamiento por parte del Tribunal responsable en el informe circunstanciado.

En el caso, toda vez que los actores pertenecen a una comunidad indígena, y en atención a lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro **COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE,[[1]](#footnote-1)** se deben interpretar las normas procesales, entre ellas el plazo para presentar impugnaciones, de la manera que resulte más favorable para los actores, a fin de garantizar un acceso efectivo a la tutela judicial y no se les deje en estado de indefensión.

Adicionalmente, del contenido del fallo que se controvierte no se advierte que se hubieran adoptado las medidas suficientes para garantizar que los ahora actores tuvieran pleno conocimiento del contenido de la sentencia que se impugna, pues únicamente se ordenó notificar al actor en esa instancia y a las autoridades responsables, en los siguientes términos.

[…]

**SEXTO.** Que debe remitirse copia certificada de esta ejecutoria a las autoridades siguientes: - Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca. – Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. – Auditoría Superior de Estado de Oaxaca. – presidente e integrantes del Ayuntamiento Constitucional de San Mateo de Mar, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca. Lo anterior, para los efectos que en derecho procedan.

Finalmente, el presidente municipal, el Ayuntamiento Constitucional de San Mateo del Mar, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca y la Jefa del Departamento de Acreditación y registro de autoridades municipales de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, informarán a este Tribunal Electoral sobre el cabal cumplimiento de lo ordenado en la presente ejecutoria, dentro de las **veinticuatro horas** siguientes a que esto ocurra.

**Con apercibimiento** a las autoridades municipales responsables, que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se dará **vista** al **Congreso del Estado**, para que proceda conforme a lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado.

**SEPTIMO. Notifíquese** personalmente al actor en el domicilio que para tal efecto señaló en su escrito de demanda; mediante oficio acompañado de copia de la presente resolución, a las autoridades señaladas como responsables, conforme a lo previsto en los artículos 26, 27, 29, apartado 1, de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca. **Cúmplase.**

De esta forma, toda vez que el Tribunal responsable no hizo del conocimiento de todos los integrantes de la comunidad involucrada, el contenido y las implicaciones jurídicas de la sentencia emitida, no obstante que la controversia principal del caso versa sobre el derecho de acceso y desempeño del cargo como agente de policía de la colonia Costa Rica en el municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, el cual se rige por sus propias normas de derecho indígena, esta Sala Superior considera por satisfecho el requisito que se analiza a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia de aquellos integrantes de la comunidad que consideran verse afectados por la sentencia y no tuvieron conocimiento a través de alguna vía idónea.

Lo anterior, en atención a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[[2]](#footnote-2) y 4 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,[[3]](#footnote-3) que imponen a las autoridades el deber de tomar las medidas necesarias respecto de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas a fin de salvaguardar el ejercicio efectivo de sus derechos, específicamente cuando se trata de asegurar el pleno acceso a la jurisdicción del Estado a fin de salvaguardar el respeto a su propia cultura y a las formas de vida de su comunidad indígena, entre ellos el derecho a la autodeterminación y a la designación de sus propias autoridades.

Al respecto, es aplicable, en lo pertinente, la jurisprudencia con rubro: **COMUNIDADES INDÍGENAS. NOTIFICACIÓN DE ACTOS O RESOLUCIONES DE AUTORIDAD ELECTORAL POR PERIÓDICO OFICIAL, EL JUZGADOR DEBE PONDERAR LAS SITUACIONES PARTICULARES PARA TENERLA POR EFICAZMENTE REALIZADA.[[4]](#footnote-4)**

Por tanto, al no haberse garantizado una notificación efectiva por parte del Tribunal responsable a los actores de la sentencia que se controvierte, esta Sala Superior considera que los medios de impugnación se promovieron en tiempo, pues esto fue cuatro días después de la fecha en que señalan tuvieron conocimiento del mismo.

**Legitimación.** Se tiene por acreditada la legitimación, pues el presente juicio es promovido por ciudadanos que se identifican como integrantes de la comunidad de la colonia de Costa Rica, en el municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, por sí mismos y en forma individual, con el propósito de controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, en el expediente JDCI-09/2013, la cual aducen les causa perjuicio.

También se tiene por acreditada la calidad de indígenas de los actores, pues de esta forma se ostentan en los escritos de demanda.

En ese sentido, sirve de sustento el criterio jurisprudencia de rubro **COMUNIDADES INDÍGENAS. LA CONCIENCIA DE IDENTIDAD ES SUFICIENTE PARA LEGITIMAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.[[5]](#footnote-5)**

**Interés jurídico.** Los promoventes, en su calidad de miembros de la comunidad de la colonia Costa Rica, en el municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca, tienen interés jurídico para controvertir la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, dictada en el expediente JDCI/09/2013, pues aducen que la resolución controvertida se traduce en una afectación directa a su derecho de votar, así como al de libre auto-determinación, concretamente, de elegir autoridades comunitarias conforme a los principios que regulan la vida interna de la comunidad indígena en comento.

En ese contexto, se advierte que los actores cuentan con interés jurídico para promover el presente juicio ciudadano, al hacer valer una afectación sustancial a su derecho a votar, así como al derecho a la libre auto-determinación de su comunidad, y a su vez, solicitan la intervención de este órgano jurisdiccional para la reparación, en su caso, de dicha vulneración, cuestión última que corresponde al estudio del fondo del asunto.

Lo anterior es acorde con el criterio reiterado por este órgano jurisdiccional electoral en la jurisprudencia intitulada **INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.[[6]](#footnote-6)**

En ese contexto, esta Sala Superior[[7]](#footnote-7) se ha pronunciado en el sentido de que se debe garantizar un efectivo acceso de las comunidades indígenas a la jurisdicción del Estado; traduciéndose en una justicia en la que se puedan defender sin que se interpongan impedimentos procesales por los que indebidamente se prescinda de sus particulares circunstancias, ya que la efectividad de la administración de justicia electoral debe traducirse en un actuar que sustraiga al ciudadano de esas comunidades de una resolución o sentencia alejada de formalismos exagerados e innecesarios, para que, en forma completa y real, el órgano jurisdiccional decida materialmente o en el fondo el problema planteado.

Por lo expuesto, se estima colmado el requisito procesal bajo análisis, al advertir que la resolución controvertida pudiera traducirse en una afectación directa al derecho a votar de los integrantes de la comunidad de la colonia Costa Rica, en el municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca, así como del derecho a la libre auto-determinación de su comunidad.

**Definitividad.** El acto impugnado es definitivo y firme, toda vez que en contra de la sentencia que se reclama, no existe en la legislación electoral del Estado de Oaxaca medio de impugnación que deba ser desahogado antes de acudir a esta instancia jurisdiccional.

En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de procedencia del presente juicio, y no advertirse ninguna causa de improcedencia, se procede a estudiar el fondo de la controversia planteada.

**TERCERO. *Estudio de fondo***

**1. Suplencia de la queja**

Esta Sala Superior tomando en cuenta que el estudio de fondo en el presente asunto implica aspectos estrechamente relacionados con el derecho de los miembros de una comunidad indígena a definir sus propias normas y procedimientos internos con base en su derecho la autodeterminación considera procedente, a fin de salvaguardar plenamente el derecho de acceso a la justicia, suplir la deficiencia de los agravios, incluso ante la ausencia total de los mismos, en lo que resulte aplicable, de acuerdo con la jurisprudencia de rubro **COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES,[[8]](#footnote-8)** en el sentido de que, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por integrantes de comunidades o pueblos indígenas, en el que se plantee el menoscabo de su autonomía política o de los derechos de sus integrantes para elegir sus autoridades o representantes, conforme a sus propias normas, procedimientos y prácticas tradicionales, la autoridad jurisdiccional electoral debe no sólo suplir la deficiencia de los motivos de agravio, sino también su ausencia total y precisar el acto que realmente les afecta, sin más limitaciones que las derivadas de los principios de congruencia y contradicción, inherentes a todo proceso jurisdiccional, porque tal suplencia es consecuente con los postulados constitucionales que reconocen los derechos de estos pueblos o comunidades y sus integrantes.

**2. Planteamiento general de la controversia**

La cadena impugnativa de los juicios que se resuelven se genera a partir del juicio promovido por Mario Canseco Silva en contra de la omisión del Presidente Municipal de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, de expedirle el nombramiento y la toma de protesta como agente de policía municipal de la comunidad de la colonia de Costa Rica, así como la negativa ficta de darle contestación al escrito de primero de marzo de dos mil trece, en el que solicitó a la Jefa del Departamento de Acreditación y Registro de Autoridades Municipales de la Secretaría General de Gobierno del estado, la expedición de la credencial que lo acredita como agente de policía de la mencionada comunidad.

Su pretensión ante la instancia local consistió en que se le reconociera como agente de policía electo de la comunidad de la colonia Costa Rica, en el municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, en virtud de los resultados de la asamblea comunitaria celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil doce, para la cual señaló que la asamblea de veintisiete de enero de dos mil trece, en la que se eligió a Roberto Garay Osorio como agente de policía municipal era contraria a las normas, procedimientos y prácticas tradicionales de la comunidad.

A partir de la valoración de documentales públicas emitidas por autoridades municipales y estatales, así como por lo manifestado por el actor en dicha instancia, el Tribunal local estimó que era válida la asamblea de veintitrés de diciembre de dos mil doce, pues se desarrolló conforme al sistema normativo de la comunidad, por tanto, concluyó que Mario Canseco Silva tiene derecho a ocupar el cargo de agente de policía de la comunidad de la colonia Costa Rica durante dos mil trece.

Ante lo resuelto por el Tribunal Electoral local, Roberto Garay Osorio promovió el presente juicio ciudadano, manifestando tener un derecho opuesto al de Mario Canseco Silva, ya que la asamblea de veintisiete de enero de dos mil trece en la que resultó electo como agente de policía debe considerarse como válida, al haberse llevado a cabo conforme a las normas, procedimiento y prácticas tradicionales de la comunidad, sin que la asamblea de veintitrés de diciembre de dos mil doce cumpliera con ellos, aunado a que no fue llamado a juicio en la instancia local, por lo que se vulneró su derecho de audiencia. En el mismo sentido, promovieron juicio ciudadano ciento diecisiete integrantes de la comunidad.

La **pretensión** de los ciudadanos actores en ambos juicios consiste en que se restituya a Roberto Garay Osorio como agente de policía de la colonia Costa Rica, en el municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, al haber sido electo con apego a las normas y procedimientos de la comunidad y, por tanto que se desconozca la validez de la asamblea comunitaria celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil doce.

La causa de pedir la hacen consistir en que la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues no realizó una correcta valoración de los medios de prueba que obran en el expediente, atribuyendo normas de derecho interno a la comunidad que no corresponden con sus sistemas normativos, aunado a que señalan que la autoridad responsable vulneró su derecho de defensa, al no haberlos llamado a juicio a fin de tener oportunidad de exponer sus planteamientos como personas pertenecientes a la comunidad, considerando que con ello no sólo se afectó el derecho a acceder al cargo de Roberto Garay Osorio sino también de quienes participaron en la asamblea en la que fue electo como agente de policía de la comunidad, considerando que en la asamblea de veintisiete de enero del año en curso habrían asistido ochenta y cinco personas y que la designación incide en el ejercicio del derecho a la autodeterminación del conjunto de integrantes de la comunidad y no sólo de quienes resultaron electos, en dicha asamblea y en la celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil doce en la cual participaron ochenta y siete integrantes de la comunidad.

**3. Consideraciones de la sentencia impugnada**

El Tribunal responsable determinó que la asamblea válida era la de veintitrés de noviembre de dos mil doce, en la que se eligió a Mario Canseco Silva como agente de policía de la colonia Costa Rica, en el municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, al considerar que la misma cumplió con las normas de derecho interno de la comunidad, situación que no ocurrió en la asamblea comunitaria de veintisiete de enero de dos mil trece.

Para llegar a tal determinación, el Tribunal local consideró lo siguiente:

* De conformidad con los artículos 76, 77, 78 y 79 de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, los agentes de policía municipales se eligen mediante convocatoria que deberá emitir el ayuntamiento dentro de los cuarenta días siguientes en que tome posesión, y tiene fecha límite hasta el quince de marzo, para llevar a cabo la elección, debiendo respetar los usos y costumbres que en la comunidad se observen para elegir a la autoridad.
* De conformidad con lo manifestado por el Presidente Municipal de San Mateo del Mar, Tehuantepec, la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, y **Mario Canseco Silva, actor en el juicio local**, en la agencia municipal de la colonia Costa Rica las autoridades auxiliares se eligen mediante una asamblea general comunitaria, previa convocatoria que emita el agente municipal en funciones, colocada en lugares públicos, y que se refuerza con anuncios emitidos a través de aparatos de sonido, de manera que se cita a todos los ciudadanos mayores de dieciocho años o, en su caso, a los que estén casados y les sea reconocida su personalidad.
* La asamblea se celebra en la explanada de la agencia municipal, se nombra a los integrantes de la mesa de debates, de acuerdo a sus usos y costumbres, interviene la autoridad municipal de la agencia de colonia Costa Rica. La votación se lleva a cabo a mano alzada, previo debate y acuerdo para nombrar a la autoridad respectiva, y posteriormente, el nombramiento es expedido por el Presidente municipal, quien también toma la protesta al funcionario electo.
* El Presidente municipal reconoce que es válida la reelección o ratificación de los nombramientos de agente de policía.
* A partir del procedimiento descrito, se consideró que la asamblea del veintitrés de diciembre de dos mil trece fue celebrada conforme al sistema normativo interno de la comunidad, lo cual no ocurrió con la asamblea de veintisiete de enero de dos mil trece.
* De la revisión del acta de asamblea de veintitrés de diciembre de dos mil doce se advierte que la misma fue convocada por el agente de policía municipal saliente a través de anuncios realizados mediante el equipo de sonido. La asamblea se desarrolló conforme al orden del día, pasando lista y declarando la existencia del quórum legal y se eligió la mesa de debates. La elección de las autoridades con cargos superiores se realizó por terna, y fue ratificado en el cargo de agente de policía de la colonia Costa Rica para el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, Mario Canseco Silva.
* Por su parte, del acta de asamblea de veintisiete de enero de dos mil trece, se advierte que la misma no cumplió con las reglas del sistema normativo interno de la comunidad, pues la convocatoria la realizó el Juez Auxiliar propietario de la comunidad y no el Agente Municipal. La asamblea se declaró instalada por dicho funcionario municipal, únicamente con la asistencia de ochenta y cinco integrantes de la comunidad, se designó la mesa de debates y se eligió como agente de policía municipal a Roberto Garay Osorio, a quien el Presidente Municipal le tomó protesta y le expidió el nombramiento para ocupar el cargo.
* La segunda de las asambleas supuestamente se llevó a cabo en atención al acta de inconformidad de los ciudadanos levantada el primero de enero de dos mil trece, en la que se hicieron constar las manifestaciones de los ciudadanos que no estuvieron de acuerdo con la reelección de Mario Canseco Silva, sin que el Presidente Municipal de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca hubiere remitido la mencionada acta, a pesar de que se le requirió en dos ocasiones.
* De esta manera, se consideró que en autos obran elementos suficientes para confirmar lo manifestado por Mario Canseco Silva respecto de la celebración de la asamblea de veintitrés de diciembre de dos mil doce, en la que se le ratificó como agente de policía municipal, por lo que a partir de ello, se estimó que dicha asamblea resultaba válida.

**4. Agravios de los actores**

Por el contrario, **los actores sostienen que la asamblea válida es la celebrada el veintisiete de enero de dos mil trece**, en virtud de que la misma cumple con las normas de derecho interno de la comunidad de la colonia de Costa Rica, situación que no aconteció en la asamblea comunitaria de veintitrés de diciembre de dos mil doce, pues la misma fue convocada por Mario Canseco Silva quien se desempeñaba como agente de policía en ese momento, aunado a que fue reelecto, lo cual es contrario a las normas de derecho interno de la comunidad, así como lo dispuesto en la Constitución federal.

En específico, los actores hacen valer los siguientes argumentos para desestimar la asamblea de veintitrés de diciembre de dos mil doce, y para que se reconozca la validez de la asamblea de veintisiete de enero de dos mil trece:

* La convocatoria a la asamblea comunitaria se realizó de manera indebida, ya que la misma no se colocó en los lugares públicos –oficina de la agencia de policía, mercado, escuela– aunado a que no se hizo casa por casa a través de los topiles, como es la costumbre en la comunidad.
* Señalan que la reelección de Mario Canseco Silva como agente de policía municipal es contraria a las normas de derecho interno de la comunidad de la colonia de Costa Rica. Aunado a que nunca se había dado el caso de que se ratificara al agente de policía saliente.
* El acta de la asamblea de veintitrés de diciembre de dos mil doce fue elaborada unilateralmente por Mario Canseco Silva, sin que en ella se asentara el número de asistentes a la misma, siendo que el tribunal local únicamente señala que se reunió el quórum legal, sin precisar cuál es éste, aunado al hecho de que el tribunal no valoró que la mesa de debates haya estado integrada por los mismos ciudadanos que en el caso de la asamblea de veintisiete de enero de dos mil trece, lo que, en su concepto, convalidaría la validez de ésta última.
* A pesar de no haber participado en la asamblea de veintitrés de diciembre de dos mil doce, Roberto Garay Osorio resultó electo como agente de policía suplente.
* Señalan que de acuerdo con la ley orgánica municipal, la elección de los agentes municipales se debe llevar a cabo por el presidente municipal, siendo que en el caso la asamblea de veintitrés de diciembre de dos mil doce fue organizada por el propio agente de policía en funciones, lo cual vulnera el principio de imparcialidad.

Asimismo, sostienen que el Tribunal local no garantizó su derecho de defensa debida, y que la sentencia impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada, aunado a que la remoción de Roberto Garay Osorio como agente de policía municipal ordenada en el fallo controvertido es ilegal, pues el ahora también enjuiciante cuenta con derechos adquiridos derivados de que fue electo mediante asamblea comunitaria de veintisiete de enero de dos mil trece, y al momento en que se presentó la impugnación ya se encontraba desempeñando el cargo.

Finalmente, señalan que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca al emitir la sentencia impugnada impuso usos y costumbres que no son propios de la comunidad de la colonia de Costa Rica.

**5. Contexto de la controversia**

Atendiendo a la naturaleza del presente asunto esta Sala Superior estima necesario analizar los planteamientos de las partes y la determinación del tribunal responsable considerando el contexto en que se inscribe la controversia primigenia.

A partir del contenido de la sentencia impugnada, así como de lo sostenido por los actores en sus escritos de demanda y del informe rendido por Secretario de Asuntos Indígenas ante el tribunal responsable, este órgano jurisdiccional advierte que **el presente caso se inscribe en un contexto de tensión y conflicto intracomunitario marcado por diferencias graves, entre otros aspectos, respecto de las normas y procedimientos de derecho interno que deben observarse para la elección del agente de policía municipal de la mencionada comunidad**, de manera que la controversia no se limita exclusivamente a determinar la persona que debe desempeñar dicho cargo, sobre la base de los planteamientos de una de las partes, sino que la actuación de las autoridades estatales debe encaminarse a resolver de manera integral y pacífica la controversia en esta materia, considerando que la determinación de las normas y procedimientos que rigen la elección de autoridades comunitarias, entre ellas, los agentes de policía, forma parte integrante del derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y, en específico, del derecho a sus propios sistemas normativos a fin de designar a sus autoridades, lo que supone reconocer no sólo las reglas y principios aplicables, sino también el conjunto de valores que forman parte intrínseca del sentido de pertenencia a la comunidad de que se trate (como la búsqueda de consensos y la armonía social).

Al respecto, por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, del que México es Estado Parte, establece, en su artículo 5, que en la aplicación de dicho instrumento internacional “deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y **deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente**”; asimismo, “**deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos**” y “adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, **medidas encaminadas a allanar las dificultades** que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.” Adicionalmente, el Convenio 169 dispone, en su artículo 8 que “al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán **tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario**”, y entre ellas “**el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias**, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. **Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio**” (énfasis añadido).

Desde esta perspectiva, esta Sala Superior considera que, ante la existencia de un escenario de conflicto intracomunitario caracterizado, entre otras cosas, por la falta de definición clara respecto de las reglas y procedimientos vigentes para la elección de autoridades comunitarias o ante la diferencia grave entre las posiciones de los integrantes y representantes de la comunidad, respecto a las mismas, las autoridades estatales, tanto federales como locales, deben procurar la adopción de aquellas medidas necesarias que propicien el diálogo intracomunitario y la solución pacíficas de las controversias internas como parte del reconocimiento pleno del derecho de acceso a la justicia, garantizando no sólo el derecho de audiencia y defensa de las partes implicadas, sino también propiciando la construcción de consensos y acuerdos que sean necesarios, evitando la imposición o la valoración unilateral de determinados hechos, máxime cuando no se ha tomado en consideración al conjunto de los actores relevantes de la propia comunidad.

El análisis contextual en estos casos permite garantizar de mejor manera la dimensión interna del derecho a la participación política de los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas como expresión de su derecho a la libre determinación reconocido tanto en la Constitución general, como en la local, así como por el Derecho internacional, evitando imponer determinaciones que resulten ajenas a la comunidad o que no consideren al conjunto de autoridades tradicionales o miembros relevantes de la comunidad para efecto de la toma de decisiones, pues ello en lugar de contribuir a resolver la controversia pudiera resultar en un factor agravante o desencadenante de otros escenarios de conflicto dentro de la propia comunidad, favoreciendo con ello el restablecimiento, en su caso, de las relaciones que conforman el tejido social comunitario, desde una perspectiva intercultural integral en que los miembros de la comunidad y las autoridades propician y participan en la solución de la controversia, distinta a la concepción tradicional de la jurisdicción como una relación entre “ganadores” y “perdedores” sobre la determinación de un tercero imparcial.

En el caso, la situación de conflicto o tensión intracomunitaria se corrobora no sólo a partir de los argumentos de las partes respecto a sus diferentes perspectivas de las normas y procedimientos válidos en la comunidad, sino también a partir de lo señalado en el informe rendido por Secretario de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca sobre la “situación que impera en el contexto político social de la Colonia Costa Rica de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca” en el que reconoce que desde el mes de enero de dos mil doce, el municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, “vive un conflicto social y de ingobernabilidad que persiste”, en el cual, “integrantes del municipio desconocieron a las autoridades municipales”, sustituyéndolas.

Al respecto, en el informe se destaca, en lo sustancial, lo siguiente:

Por lo que respecta a su sistema político electoral, es de resaltar que en el proceso electoral del año 2010, tuvo lugar un **cambio sustancial de su Sistema Normativo** dando lugar a la participación de todas las Agencias Municipales en la elección del Ayuntamiento municipal.

En efecto, durante el proceso de elección de Concejales para el trienio 2011-2013, a través de varias asambleas generales comunitarias, los ciudadanos y ciudadanas de las Agencias Municipales y de Policías, entre ellas la población de Costa Rica, la Reforma, el Pacífico y de Laguna Santa Cruz, exigieron su derecho de votar y ser votados para integrar el H. Ayuntamiento Constitucional. Después de un amplio proceso de diálogo y decisión en Asamblea General de ciudadanos, en el mes de noviembre de 2010, **por primera vez en la historia de este municipio, se acordó la participación de los ciudadanos de las Agencias Municipales, de Políticas y demás comunidades**; la participación y representación de la mujer en la asamblea general comunitaria y en la integración del H. Ayuntamiento; asimismo, se otorgó la facultad de cada Agencia municipal, de policía y comunidad para elegir y vigilar a un regidor o suplente de regidor del Ayuntamiento incluyendo la facultad de destituirlo en caso necesario.

**Por tal razón, el actual Cabildo municipal, lo conforman ciudadanos de la cabecera y de las Agencias Municipales, de Policías y comunidades y por primera vez, fue electa una mujer como regidora de mercados.**

No obstante lo anterior, **desde el mes de enero de 2012 el municipio vive un conflicto social y de ingobernabilidad que persiste hasta nuestros días.** Se tiene conocimiento que el conflicto surgió por inconformidad ante el informe anual del Presidente municipal, la suspensión del pago mensual del subsidio para algunas Agencias y colonias, la falta de integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal, conflictos al interior del Ayuntamiento por presuntos desvíos de recursos municipales. Bajo estas condiciones, la asamblea general comunitaria celebrada el 15 de enero de 2012 destituyó de sus cargos al Presidente municipal, Regidor de obras, Regidor de hacienda y el Tesorero municipal, quienes después de tomar acuerdos con las autoridades de las Agencias Municipales, volvieron a desempeñar sus cargos hasta el 08 de abril de 2012 en que nuevamente la asamblea general acordó desconocer a todos los integrantes del H. Ayuntamiento (propietarios y suplentes), nombrándose en la misma asamblea a nuevos integrantes.

Conforme a la documentación con que cuenta esta Secretaría y que se adjunta en copia simple, **el conflicto persiste hasta nuestros días** en el que se pueden identificar dos grupos en pugna, una encabezada por el Presidente Municipal Constitucional y otra encabezada por las Agencias Municipales, de Policía y Comunidades del referido municipio.

**Elección de autoridades municipales y comunitarias**

La elección de las autoridades en las Agencias Municipales, de Policías y comunitarias se lleva a cabo en los meses de noviembre, diciembre o a inicios de cada año a través de asambleas generales de ciudadanos, **mismas que son convocadas por las autoridades en funciones.** El sistema de cargos y servicios comunitarios es vigente conforme a un escalafón de cargos con reglas específicas para su desempeño; asimismo, cuentan con normas específicas para cumplir con los servicios comunitarios vigentes en cada comunidad, de tal forma que todos conocen sus responsabilidades y obligaciones.

Las autoridades de cada Agencia o comunidad, cuenta con un cabildo comunitario constituido por un cuerpo colegiado que lo gobierna; así, por ejemplo, tienen a su Agente municipal, de Policías o Representante, según sea el caso, un suplente del Agente, cuerpo de Policías, Mayor de Vara o Comandante de la Policía, regidores, Alcalde Único Constitucional, entre otros cargos.

Al respecto, es oportuno precisar que, **el Ayuntamiento municipal no influye ni interfiere en la elección de las autoridades de las Agencias Municipales, de Policías o comunidades**. En otros términos, se puede señalar que existe un equilibrio de gobierno interno, mediante el cual, todas las comunidades que integran el municipio se respetan plenamente, de tal forma que los Agentes municipales gobiernan su propias localidades y el Ayuntamiento respeta las decisiones tomadas por las comunidades.

No obstante lo anterior, **se advierte que el conflicto que vive todo el municipio se ha traspolado a algunas Agencias Municipales, de Policías y comunidades, en especial aquellas que participaron en la destitución de las actuales autoridades**. Es decir, la división del municipio, ha originado división al interior de las Agencias en la que ya se puede identificar dos grupos en pugna: una encabezada por el Agente municipal electo por la Asamblea convocada por la autoridad que estaba en funciones y otra encabezada por la autoridad electa en una reunión auspiciada o convocada por el Presidente municipal. Este es el caso de la Agencia de Policía de la Colonia Costa Rica, donde la Autoridad electa en asamblea del pueblo convocada por el Agente municipal que fungió en el año 2012 despacha desde el Palacio de la Agencia Municipal, mientras que existe otra persona que mantiene relación con el Presidente municipal y el Ayuntamiento.

**Contexto específico**

La comunidad indígena conocida como Colonia Costa Rica, del Municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, se rige por el régimen de Sistemas Normativos Internos, y su sistema de cargos y servicios comunitarios es vigente.

Conforme a los documentos con que dispone esta Secretaría, se advierte que en la Agencia de Policía de la colonia Costa Rica, el año 2011, aún existía un equilibrio de gobierno interno, respetada plenamente por el H. Ayuntamiento, misma que prevaleció hasta finales del año 2011 y a principios del 2012 derivado del conflicto intermunicipal expuesto en el apartado anterior. A decir de algunos habitantes de esta localidad, **por los conflictos al interior del Ayuntamiento**, la falta de integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal 2012, la suspensión del pago del subsidio mensual y la falta de priorización de obras para la comunidad indígena o Agencia de Policía de la Colonia Costa Rica, llevó a que en la asamblea comunitaria celebrada el 30 de diciembre del año 2011, encabezada por el entonces Agente de Policía, el Ciudadano Jorge Garay Osorio y ante la presencia de actual presidente Ciudadano Francisco Valle Piamonte como consta en acta de asamblea que se adjunta, se desconoció al actual Regidor de Deportes del H. Ayuntamiento, quien es originario de dicha comunidad, nombrando a un nuevo Regidor Municipal.

La destitución y nombramiento de un nuevo Regidor se daba con base en las nuevas normas acordadas en el año 2010, no obstante, al informarse estas decisiones a la asamblea general el 15 de enero de 2012, tuvo lugar la destitución de otros concejales como se describe en el apartado de contexto general. La destitución de referencia quedó sin efecto, pues como se ha señalado, todos los concejales desconocidos el 15 de enero, regresaron a sus puestos el 29 de enero del mismo año. La situación de asignación de recursos hacia esta localidad tampoco se regularizó.

Para el 08 de abril de 2012, que se desconoció a los integrantes del H. Ayuntamiento nombrándose a nuevos integrantes. En esta asamblea participó la comunidad de Costa Rica ratificando la destitución del Regidor de Deportes y demás miembros del Ayuntamiento, **situación que le generó animadversión del Ayuntamiento destituido por la ciudadanía pero reconocido en las instancias Estatales por lo que la discordia y la falta de asignación de recursos se acentuó y ha prevalecido hasta el día de hoy.**

Frente a este escenario, el 23 de diciembre de 2012, la Asamblea General de ciudadanos, determinó que el ciudadano Mario Canseco Silva, continuara desempeñándose como Autoridad por un año más, al frente de la comunidad como Agente de Policía de la Colonia Costa Rica, encomendándose gestionar la asignación de los recursos y obras del ejercicio fiscal 2012, además de lo correspondiente a este año 2013. Es importante señalar que el resto del cabildo local fueron nuevos integrantes electos por la Asamblea.

Al tiempo que esto sucedía, el Presidente municipal, auspició el nombramiento del ciudadano Roberto Garay Osorio como Agente municipal de esta localidad, quien despacha en un domicilio particular. Aquí también es importante puntualizar que esta persona, inicialmente fue nombrado como suplente del Agente de Policía en la asamblea del 23 de diciembre de 2012, sin embargo, en virtud de que solicitó ser nombrado como Agente de Policía propietario, se separó del resto del cabildo y solicitó el respaldo del Presidente municipal, quien lo respalda como su Agente a pesar de que no es reconocido como tal por la ciudadanía.

Finalmente, se considera oportuno señalar que **en el municipio de San Mateo del Mar, aún prevalece la concepción propia de autoridad consistente en que el cargo no es otorgado para mandar o ejercer el poder sobre otras personas, sino es un servicio para la propia comunidad; así, quien es propuesto para desempeñar un cargo, debe haber cumplido previamente cargos de menor responsabilidad conforme al escalafón de cargos al interior de la comunidad. Estos son los que tienen el derecho a ser votados, es decir, haber cumplido algún cargo u obligaciones de las que deriva el derecho a ser elegido para otro cargo mayor.**

**La situación como la que se ha descrito de la Agencia Colonia Costa Rica, requiere de generar condiciones para que la comunidad restablezca su principal institución como lo es la Asamblea General Comunitaria, en donde, la autoridad Municipal del Ayuntamiento debe propiciar la unidad y el consenso para no profundizar aún más la polarización social, es decir, en el caso que nos ocupa, se debió y se debe propiciar el funcionamiento de una sola asamblea y una sola autoridad legítima para la comunidad**. (Énfasis añadido).

Ante el escenario de conflicto descrito, no resulta procedente sostener una perspectiva reduccionista de la controversia limitándola al cumplimiento de ciertos requisitos formales, sino a la necesidad de contribuir a la solución de un conflicto intracomunitario que incide en la definición de las reglas y procedimientos que resultan válidos para la elección de autoridades comunitarias regidas por sistemas internos propios de la comunidad.

De esta forma, esta Sala Superior considera que, cuando de los planteamientos de las partes se advierta la existencia de un conflicto social o político grave, o que incida seriamente en la armonía social o gobernabilidad de una comunidad indígena y en consecuencia trascienda los planteamientos de las partes, las autoridades jurisdiccionales deben salvaguardar no sólo las garantías propias del debido proceso de las partes y, en su caso, de aquellos integrantes de la comunidad que pudieran verse afectados por la decisión que se emita, sino también, tomar las medidas necesarias a fin de propiciar condiciones razonables para encontrar una solución pacífica, a efecto de que sean los propios integrantes de la comunidad quienes, a través inclusive de medios alternos de solución de controversias (como son la conciliación, la mediación y la consulta) lleguen a un acuerdo que resuelva el conflicto, y sólo ante la imposibilidad real de que ello suceda, sea la autoridad estatal quien determine las reglas y procedimientos sobre la base de los planteamientos y elementos probatorios que obren en el expediente o que recabe la autoridad competente, entre ellas, de ser necesario el peritaje antropológico o cultural, procurando analizar los planteamientos de las partes desde una perspectiva intercultural atendiendo los principios y valores de la comunidad, así como a los principios y derechos constitucionales y convencionales que resulten aplicables.

En similar sentido, se ha pronunciado el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, al destacar la importancia del pluralismo jurídico como una forma constructiva de abordar los distintos sistemas jurídicos con arreglo valores culturales diferentes. Al respecto, en el *Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas* del año 2004 se destaca lo siguiente:

67. **El derecho consuetudinario indígena**, que no suele ser reconocido por el sistema jurídico oficial, **tiene sus raíces en las tradiciones y costumbres locales y corresponde a necesidades de las comunidades indígenas en materia de mantenimiento del orden y la armonía sociales, la solución de conflictos de distintos tipos** y la forma de sancionar a los transgresores. Los países que han podido incorporar el respeto del derecho indígena consuetudinario a sus sistemas jurídicos oficiales han observado que la justicia se administra con mayor eficacia, particularmente cuando se trata de casos de derecho civil y familiar, pero también en algunas esferas del derecho penal, por lo cual parece ser que un **cierto pluralismo legal parece ser una forma constructiva de abordar los distintos sistemas jurídicos con arreglo valores culturales diferentes**.

68. Sin embargo, según algunos, el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas no ofrece suficientes garantías para la protección de los derechos humanos individuales universales. Pero aun si eso fuera una afirmación cierta basada en pruebas suficientes, no debería esgrimirse para negar por completo el valor del derecho consuetudinario indígena sino como un reto para aproximar ambos enfoques haciéndolos más eficaces para la protección de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. **El pluralismo jurídico en los Estados es una oportunidad para permitir a los sistemas jurídicos indígenas funcionar eficazmente ya sea como parte de los sistemas jurídicos nacionales o paralelamente a éstos.[[9]](#footnote-9)**

**6. Análisis de la cuestión a resolver**

Sobre la base de lo anterior, esta Sala Superior considera que la **litis** de los presentes juicios consiste en determinar si la resolución impugnada se apegó a los principios y valores de los artículos 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otras normas y principios de derecho internacional aplicables, considerando en específico si se garantizaron los derechos de las partes a un debido proceso con las debidas garantías, así como el derecho de la propia comunidad a elegir a sus autoridades y definir sus normas y procedimientos para ello.

Considerando lo anterior, en concepto de esta Sala Superior los agravios son **sustancialmente fundados**.

Por un lado, los actores no tuvieron ante la instancia local la posibilidad de ejercer su derecho de defensa efectiva, dado el contexto de la controversia, en su calidad de integrantes de la comunidad de la colonia de Costa Rica en el municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca; en específico, a Roberto Garay Osorio, no obstante reconocer que había sido electo en su calidad de agente de policía de la comunidad de la colonia Costa Rica, en el municipio de San Mateo del Mar, por una de las asambleas cuya validez era materia de la litis ante el propio tribunal responsable y se encontraba en ejercicio del cargo, de acuerdo a los elementos que constan en el expediente.

Tal circunstancia trascendió no sólo al derecho específico de Roberto Garay Osorio, y de los demás integrantes de la comunidad que habrían participado en su designación, sino también a la comunidad en su conjunto dado que la materia de la controversia está relacionada estrechamente con el derecho de la comunidad de la colonia Costa Rica a elegir a sus autoridades a través de sus propias normas y procedimientos, concretamente al agente de policía municipal para dos mil trece, pues al existir un escenario de conflicto intracomunitario que involucra no sólo la titularidad de la agencia de policía de la comunidad sino también a las normas y procedimientos válidos para ello, el tribunal, ante la situación extraordinaria derivada del conflicto que vive la comunidad, debió haber garantizado de la manera más efectiva el derecho de defensa de quienes pudieran versa perjudicados o afectados con su determinación a fin de salvaguardar el derecho a la autodeterminación y no limitarse la presentación del medio de impugnación en los términos y plazos ordinarios.

En el caso se considera que el derecho de defensa efectiva y acceso a la justicia de los actores se vio afectado, no sólo por no haber tenido oportunidad real y efectiva de comparecer a juicio, sino también ante el hecho de que, con ello, se impidió resolver la controversia conociendo la postura de los posibles afectados, a partir de los cual se debieron priorizar mecanismos alternos de manejo y resolución de conflictos, como la mediación comunitaria o conciliación, a partir de la instrumentación de medidas efectivas para garantizar la eficacia de tales procedimientos, a través, de ser necesaria, de la consulta directa y la posibilidad de generar consensos en la propia comunidad, como una medida de promoción, respecto y garantía de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas a decidir sobre sus normas, principios, procedimientos y prácticas tradicionales que los rigen como parte de la solución de los conflictos intracomunitarios de conocimiento de los órganos del Estado. Se concluye lo anterior por las razones siguientes:

**A) Acceso a la justicia, derecho de defensa efectiva y garantía de audiencia**

En el caso, ante la impugnación de Mario Canseco Silva presentada ante el Tribunal Electoral local por diversas omisiones relacionadas con la expedición de su nombramiento y toma de protesta como agente de policía municipal de la comunidad de la colonia de Costa Rica, con motivo de su elección en la asamblea comunitaria celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil doce, dicho tribunal si bien adoptó medidas tendentes a garantizar el derecho de audiencia de Roberto Garay Osorio, así como el derecho de los demás integrantes de dicha comunidad que participaron en dicha asamblea o que pudieran considerarse afectados por la determinación que pudiera emitirse en el juicio presentado por Mario Canseco Silva, como fue la publicación en los estrados tanto de la Secretaría de Gobierno del Estado, como del Municipio de San Mateo del Mar, de la presentación de la impugnación, así como el emplazamiento efectuado en la agencia de policía de la comunidad de la colonia Costa Rica, lo cierto es que, no obstante ello, dadas las circunstancias y el contexto que se vive en el municipio, esta Sala Superior considera que si bien el Tribunal responsable actuó en los términos y plazos previstos en la legislación aplicable para situaciones ordinarias, las medidas adoptadas resultaron ineficaces frente a la problemática de la comunidad, lo que generó a la postre una situación de desigualdad procesal en la medida en que las notificaciones ordenadas no fueron efectivas y no se adoptó ninguna medida adicional.

Al respecto, los actores aducen que se vulneró su derecho de audiencia pues nunca tuvieron conocimiento del medio de impugnación que se presentó, ni de la sentencia que al efecto emitió el Tribunal responsable, pues señalan que derivado del conflicto que prevalece en la comunidad, las oficinas de la agencia de policía de la comunidad no eran accesibles pues se “encontraban tomadas”, aunado a que la comunidad misma “se encuentra alejada y los medios electrónicos y de comunicación son escasos”, por lo que fue hasta que se acudió al Palacio Municipal, a realizar unos trámites que el Presidente Municipal le informó sobre el contenido y los efectos del fallo que ahora impugnan.

En el caso, en autos se encuentran las cédulas de notificación por estrados que realizó la autoridad responsable de la presentación y admisión del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía del sistema normativo interno promovido por Mario Canseco Silva,[[10]](#footnote-10) así como las constancias derivadas del requerimiento formulado por el Magistrado Instructor en dos ocasiones a las autoridades responsables que constatan que la cédula en la que se informa sobre la presentación del medio de impugnación promovido por Mario Canseco Silva se publicó el treinta de abril de dos mil trece, durante setenta y dos horas, en los estrados de la Secretaría de Gobierno del Estado, en la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Asimismo, se advierte de tales constancias que se le dio publicidad a la presentación de la demanda mencionada, durante un plazo de setenta y dos horas mediante cédula de notificación de cinco de mayo del presente año, fijada en los estrados del Municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, igualmente obra acta de emplazamiento efectuado a Roberto Garay Osorio en la agencia de policía de la comunidad de la colonia Costa Rica el dieciséis de mayor de dos mil trece, sin que se hubiere presentado escrito de comparecencia alguno.

Si bien en términos de los artículos 17 y 18 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana ello es suficiente a efecto de garantizar el derecho de audiencia en situaciones ordinarias, no fueron efectivas tales medidas en atención a las circunstancias particulares del caso, en el que en autos se advierte que desde el mes de enero de dos mil doce, el municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, “vive un conflicto social y de ingobernabilidad que persiste”, en el cual, “integrantes del municipio desconocieron a las autoridades municipales”, sustituyéndolas, por lo que ante dicha situación extraordinaria, las medidas ordinarias adoptadas por la autoridad responsable resultan insuficientes a efecto de garantizar el derecho de audiencia y acceso a la justicia de los actores.

Dadas las circunstancias complejas que prevalecen en la comunidad, esta Sala Superior considera que en el caso se afectó sustancialmente los derechos de debida de defensa, audiencia y acceso a la justicia previsto en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establecen las garantías esenciales del procedimiento y el derecho a la administración de justicia pronta, completa e imparcial, en relación con los artículos 1 y 2 del propio texto constitucional que disponen, el primero, la obligación para las autoridades del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de manera que se interpreten las normas que conforman el marco jurídico con un criterio extensivo, aplicando los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, y progresividad y, el segundo, el reconocimiento del derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, entre otras cuestiones, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.

Sirven de sustento, *mutatis mutandi,* las jurisprudencias de rubro **COMUNIDADES INDÍGENAS. NOTIFICACIÓN DE ACTOS O RESOLUCIONES DE AUTORIDAD ELECTORAL POR PERIÓDICO OFICIAL, EL JUZGADOR DEBE PONDERAR LAS SITUACIONES PARTICULARES PARA TENERLA POR EFICAZMENTE REALIZADA.[[11]](#footnote-11)**

Lo anterior permite afirmar que en casos en que esté implicada la determinación de normas y procedimientos sobre la base del principio de libre determinación de las comunidades y pueblos indígenas en la elección de sus autoridades, ante situaciones extraordinarias, caracterizadas por escenarios de conflicto intracomunitario, lo procedente es que las instancias jurisdiccionales adopten medidas específicas para garantizar la efectividad los derechos de acceso a la justicia, defensa y audiencia durante el procedimiento y no sólo en la etapa inicial del mismo, a través de ordenar las notificaciones, requerimientos, vistas y demás medidas que se estimen idóneas para tales circunstancias, de ser necesario, con la colaboración o apoyo de otras instancias comunitarias, municipales, estatales o federales.

En el caso se considera que el Tribunal responsable debió considerar las circunstancias particulares y extraordinarias de la comunidad indígena, en cuanto a sus condiciones sociales y el conflicto intracomunitario que se vive, a efecto de también tomar medidas adicionales a fin de dar mayor certeza de que se asegurara el derecho de audiencia y acceso a la justicia de los posibles afectados, a fin de que comparecieran a juicio a efecto de que manifestaran lo que a su derecho corresponda.

Lo anterior es también congruente con lo señalado en la jurisprudencia de rubro **COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE,[[12]](#footnote-12)** en el sentido de que las autoridades jurisdiccionales tienen el deber de adoptar las medidas especiales que sean necesarias a favor de dichas comunidades y de los sujetos que las integran, a efecto de brindar la más amplia protección que corresponde a los derechos humanos de los que son titulares, garantizando el pleno acceso a la justicia y el total reconocimiento de sus sistemas normativos internos, de manera que se les juzgue con los más amplios estándares de protección, de manera que se apliquen normas jurídicas distintas, las propias de la comunidad, que son igualmente válidas para el Estado, esto es, bajo un sistema de pluralismo jurídico.

**B) Violación al derecho a elegir a las propias autoridades**

Esta Sala Superior advierte que, en el presente caso, la circunstancia generada por el hecho de que las medidas adoptadas para efecto de notificar la presentación del medio de impugnación local no hayan sido efectivas y ante la falta de otras actuaciones o requerimientos específicos, atendiendo a las circunstancias especiales, trascendió también a la afectación del derecho sustantivo de los miembros de la comunidad de definir sus propias normas y procedimientos para elegir a sus autoridades; por lo que, si bien la vulneración procesal a los derechos de defensa y audiencia señalada ordinariamente es, por si misma, suficiente para revocar la resolución impugnada y ordenar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca a emitir una nueva en la que se garantice el derecho de los integrantes de la comunidad de la colonia Costa Rica, en virtud de que el fondo de la controversia versa sobre el derecho a votar y ser votado respecto de la elección de agente de policía municipal durante dos mil trece, y que los sujetos que cuyo derecho de audiencia fue vulnerado han ejercicio su derecho de acceso a la justicia a través del presente medio de impugnación y formulado agravios y consideraciones vinculadas con la litis, lo procedente es que este órgano jurisdiccional resuelva el fondo de la controversia.

Para ello, como se señaló, este órgano jurisdiccional toma en consideración que existen elementos suficientes para advertir la existencia de un conflicto intracomunitario respecto de las normas de derecho interno que deben seguirse para la elección del agente de policía municipal de la mencionada comunidad, y en consecuencia sobre la validez de la asamblea comunitaria y el derecho a ocupar el cargo de agente de policía municipal durante dos mil trece, pues existe una grave discrepancia entre miembros de la comunidad respecto de la elección de agente de policía municipal, como se advierte a continuación:

**a) Elementos expresados para confirmar la validez de la primera asamblea**

Derivado del informe emitido por la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como del informe rendido por el Presidente Municipal de San Mateo del Mar, Tehuantepec, y lo manifestado por el actor en su demanda del juicio ciudadano local, el Tribunal responsable arribó a la convicción de que las normas, procedimientos y prácticas tradicionales que se siguen para la celebración de las asambleas comunitarias en las que se eligen a los agentes de policía, se realizan de conformidad con lo siguiente:

|  |
| --- |
| **Organización para nombrar autoridades** |
| 1. El Agente de Policía Municipal se renueva cada año, con posibilidad de ser reelecto por la Asamblea General Comunitaria. |
| 2. El Agente de Policía saliente emite la convocatoria, misma que pega en los lugares públicos y anuncia por aparatos de sonido. |
| 3. Desde la emisión de la convocatoria hasta un día antes de la celebración de la Asamblea se anuncia por aparatos de sonido. |
| 4. Se cita a los ciudadanos mayores de 18 años o menores de 18 siempre y cuando estén casados. |
| 5. Se desarrolla en la explanada de la Agencia de Policía de la Colonia Costa Rica, en el mes de noviembre y diciembre de cada año. |
| 6. Se nombra a la mesa de debates (presidente, secretario y vocales) |
| 7. La forma de votar es a mano alzada, previo debate y acuerdo para nombrar a las autoridades así como a sus topiles. |
| 8. La autoridad municipal despacha desde el inmueble de la Agencia Municipal. |

**b) Planteamientos de los actores**

Contrariamente a lo señalado por la responsable, los ciudadanos actores, integrantes de la comunidad de la colonia Costa Rica, cuestionan dichas normas, al señalar que la convocatoria se realiza de manera distinta, pues son los topiles quienes acuden casa por casa a informar sobre la celebración de la asamblea, igualmente sostienen que el quórum para declarar legalmente instalada la asamblea no fue especificado, y por tanto, la asamblea celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil doce no cumple con dicho requisito.

Adicionalmente, aducen que la reelección no es permitida, siendo que el Tribunal responsable, a partir de lo manifestado por el Presidente Municipal de San Mateo del Mar, Tehuantepec, consideró que sí es válida, sin embargo, ello nunca había ocurrido.

Lo anterior evidencia la existencia de una diferencia sustantiva que genera falta de certeza sobre las reglas que conforme al sistema normativo interno rigen en la comunidad de la colonia de Costa Rica, del municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, lo que ha generado un conflicto intracomunitario respecto de las normas que deben observarse para la celebración de la asamblea comunitaria en la que se elige al agente de policía municipal, y por tanto, sobre cuál de las dos asambleas llevadas a cabo es la válida y quién debe ocupar el cargo de agente de policía en la comunidad de la colonia Costa Rica, del municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec.

En ese sentido, resulta necesario considerar y maximizar en la mayor medida posible el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y, en consecuencia a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación de los conflictos internos, previsto en los ya aludidos artículos 2 de la Constitución General; 5 y 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como en los artículos 3, 4 y 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.[[13]](#footnote-13)

En conjunto se reconoce que el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas implica que gozan de autonomía para:

* Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
* Aplicar sus propios sistemas normativos internos en la regulación y solución de conflictos internos.
* Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.

Por su parte, la legislación del Estado de Oaxaca, en los artículos 25, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 255, párrafos 2 y 6, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, al decidir sus formas internas de convivencia y organización política, y señala al Instituto Electoral del Estado como garante de dicho derecho.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento que expresa un amplio consenso de la comunidad internacional y sirve de parámetro orientador para definir los derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos tanto en el derecho constitucional como internacional,[[14]](#footnote-14) contempla en su artículo 4 el derecho al autogobierno de los pueblos indígenas, y en el 5 expresamente establece el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

De esta forma, las autoridades electorales se encuentran obligadas a garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir a sus propias autoridades bajo sus propias normas, procedimientos y prácticas, de manera previo a cualquier determinación que adopte la autoridad electoral respecto de la elección de autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, es necesario asegurarse de haber agotado los medios que garanticen el derecho al autogobierno.

A fin de garantizar el pleno respeto a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, así como al derecho que tienen sus integrantes a elegir a sus propias autoridades, y por ende a autogobernarse, esta Sala Superior considera que cuando existan escenarios de conflicto intracomunitario, previo a la emisión de una resolución por parte de la autoridad administrativa o jurisdiccional, se deben privilegiar medidas pacíficas de solución de conflictos al interior de la comunidad mediante los procedimientos e instituciones que se consideren adecuados y válidos comunitariamente.

Ello, toda vez que los medios alternativos de solución de controversias son medidas de protección que el Estado debe adoptar y privilegiar a efecto de preservar la identidad e integridad étnica, cultural, social, política y económica de las comunidades y pueblos indígenas, como lo prevé la propia legislación estatal.

En efecto, entre las medidas alternas de solución de conflictos en materia indígena que se encuentran previstos en la legislación aplicable, así como en los instrumentos internacionales, se encuentran la mediación y la consulta.

La mediación comunitaria indígena se entiende como una herramienta de contribución para la comunicación, y de esta manera lograr un acuerdo intracomunitario que resuelva el conflicto.

El Código Electoral del Estado de Oaxaca contempla la mediación como un mecanismo de resolución de conflictos electorales respecto de las normas o los procesos de elección en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos.

Si bien dicha facultad de la autoridad administrativa electoral puede entenderse relacionada exclusivamente con las elecciones de integrantes del ayuntamiento, sin embargo, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 16 y 25 apartado A, fracción II de la Constitución del Estado de Oaxaca, en los que por un lado se reconoce el derecho a la libre autoderminación de los pueblos y comunidades indígenas, y por otro, se protegen las prácticas democráticas de las comunidades indígenas para la elección de sus ayuntamientos, así como los numerales 26, fracción XLIV, que faculta al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a coadyuvar con la asamblea comunitaria en los procesos de elecciones municipales, 255, párrafo 2, que reconoce y garantiza el derecho de las comunidades indígenas a decidir sus formas internas de convivencia y organización política, así como a elegir a sus autoridades, y 264, párrafo 2, que faculta a la autoridad administrativa electoral local a conocer de los casos de controversias que surjan respecto de la renovación e integración de órganos de gobierno locales bajo los sistemas normativos internos, todos ellos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, en conjunto con los preceptos 76 y 79 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca que señalan que los agentes de policía son autoridades auxiliares del ayuntamiento y establecen las reglas de sus procedimientos de elección, esta Sala Superior, atendiendo además a lo previsto en los artículos 1 y 2 de la Constitución General, concluye que, al ser las agencias de policía órganos auxiliares de la autoridad municipal, en caso de que surja alguna inconformidad con las reglas del sistema normativo interno, derivadas de un proceso electoral dentro de un pueblo o comunidad indígena, distinto del de integrantes del ayuntamiento, también les serán aplicables los métodos de resolución alternativa de conflictos electorales previstos en el Código electoral local; por lo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana está facultado para actuar conforme a lo previsto en el capítulo quinto, del título segundo, del libro sexto del referido código comicial, relativo a los procedimientos de resolución de conflictos electorales en municipios que se rigen por sistemas normativos internos, para lo cual, deberá tomar las medidas pertinentes a efecto de adecuar el proceso de resolución de conflictos a cada tipo de elección, considerando las características de cada comunidad en cuestión, para lo cual podrá solicitar el apoyo de otras autoridades en el ámbito municipal, local o federal.

Al respecto, el artículo 266 del código electoral del Estado de Oaxaca, la mediación es un método de resolución alternativa de conflictos electorales, basado en la democracia, la pacificación social, la tolerancia, el diálogo, el respeto y el consenso, implementado por el Instituto con el objeto de construir acuerdos justos, aceptables y pacíficos, en los procesos electorales en municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos.

La legislación citada, contempla, en su artículo 264, que en caso de presentarse controversias, **respecto a las normas o procesos de elección en los municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos, se deberán agotar los mecanismos internos de resolución de conflictos, previo a acudir a cualquier instancia estatal, para ello, se iniciará un proceso de mediación, cuya metodología y principios generales serán regulados por los lineamientos que en su caso apruebe el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad**.

En ese sentido, la figura del mediador puede ser asumida por un miembro de la comunidad o por una de las autoridades tradicionales u otra distinta, buscando actuar siempre en concordancia con estas y legitimando su autoridad. De acuerdo con lo establecido en los artículo 26, fracción XLIV, 264, párrafos 2 y 3, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de la entidad, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, podrá fungir como mediador, coadyuvando para lograr una solución que ponga fin al conflicto,

Lo anterior es congruente, en lo sustancial, con el criterio de esta Sala Superior sostenido en la jurisprudencia de rubro **COMUNIDADES INDÍGENAS. LA AUTORIDAD ELECTORAL DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ELECCIONES POR USOS Y COSTUMBRES (LEGISLACIÓN DE OAXACA)**.[[15]](#footnote-15)

El objetivo de buscar un acuerdo intracomunitario para resolver el conflicto, con la intervención de un mediador, además de privilegiar y garantizar los derechos de la propia comunidad y sus integrantes, es comprender la realidad social particular, incorporando y compatibilizando la visión de ambas partes.

La búsqueda de soluciones intracomunitarias a través de mecanismos alternativos pacíficos, de resolución de conflictos como la mediación, en contextos comunitarios indígenas, responde a la idea de abordar nuevas formas de solución de conflictos que sean compatibles tanto con su propia cultura como con las normas legales del Estado, pues resulta trascendental mantener el delicado balance entre la innovación y la preservación de la cultura.

En concordancia con lo anterior, resulta ilustrativo lo señalado en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que garantizar la vigencia de derechos de los pueblos indígenas implica para los juzgadores, *modificar de manera importante ciertas concepciones del Derecho y ampliar la mirada sobre las instituciones de justicia y su papel en la sociedad*.

En el caso, la falta de garantía del derecho de defensa ya analizada, impidió también conocer oportunamente la inconformidad de los ahora actores con las reglas del sistema normativo interno, y por tanto la posibilidad de iniciar previamente un proceso de mediación, en términos del artículo 264 del código electoral local, en lo que resulte aplicable.

Por otra parte, la consulta es otra medida que deben adoptar las autoridades electorales cuando existen situaciones que afecten el derecho de los pueblos, entre otros, a definir sus instituciones y autoridades.

Al respecto, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6 y 8 del Convenio 169, se advierte la obligación del Estado mexicano de adoptar las medidas apropiadas, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, a efecto de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, y privilegiar la posibilidad de que los propios integrantes de la comunidad logren llegar a acuerdos que solucionen las diferencias, entre otros procedimientos, a través de la mediación.

Lo anterior supone que ante posibles conflictos al interior de las comunidades indígenas se debe privilegiar la solución de los mismos por las autoridades de la comunidad que sean competentes, y conforme a las normas de derecho interno aplicables, sin embargo, en caso de que se solicite por la comunidad o alguno de sus integrantes el Estado podrá intervenir a fin de buscar la mejor solución, respetando las normas propias de la comunidad y armonizándolas con el derecho positivo que resulte aplicable, siempre observando los principios antes señalados.

Ello también es acorde con lo previsto por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 40, que señala que los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.

Todo lo anterior, implica, **ante la existencia de un conflicto respecto de las normas y prácticas aplicables en la comunidad**, privilegiar en todo momento el respeto a su sistema normativo interno, lo cual representa garantizar su derecho a la autodeterminación y autogobierno.

En ese sentido, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, ha destacado la importancia del derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones, lo que tiene un impacto directo sobre el goce efectivo de otros derechos humanos fundamentales.

En específico el Relator Especial de Naciones Unidas ha señalado que el derecho a la participación de los integrantes de las comunidades indígenas a la adopción de decisiones es un derecho fundamental que admite ser considerado en dos dimensiones, externa e interna.

Respecto de la dimensión interna del derecho a la participación, el Relator Especial precisa que la misma pasa por el ejercicio de la autonomía y el autogobierno por parte de los pueblos indígenas, y el mantenimiento de sus propios sistemas jurídicos y de justicia, lo que implica que los Estados deben permitir que los pueblos indígenas adopten sus propias decisiones sobre sus asuntos internos, y que las mismas se respeten.

Adicionalmente, se ha destacado que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la autonomía y autogobierno, se requiere el fortalecimiento de las instituciones y estructuras de gobierno de los pueblos indígenas, a fin de que realmente puedan tomar el control de sus propios asuntos en todos los aspectos de sus vidas, y garantizar que los asuntos que les afectan se ajusten a sus propias pautas culturales, valores, costumbres y visiones del mundo.[[16]](#footnote-16)

En similar sentido se pronunció esta Sala Superior al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-11/2007, en el que, ante la existencia de un conflicto intracomunitario, se ordenó que se dispusieran las medidas necesarias, suficientes y que resultaran razonables para que, de acuerdo a una conciliación pertinente, consultas requeridas directamente con la ciudadanía y resoluciones correspondientes, se considere la posibilidad de realizar elecciones de concejales en el municipio de Tanetze de Zaragoza, lo que se deberá materializar en un acuerdo que dicte dentro del término concedido.

A manera orientadora, vale la pena destacar el criterio que ha sostenido la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T-129/2011 respecto a los procesos de consulta previa, al señalar que son un derecho fundamental a efecto de buscar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades y pueblos indígenas a efecto de encontrar la alternativa menos lesiva en casos que impliquen un alto impacto social o culturan para los integrantes de la comunidad, pues constituye un diálogo entre iguales en medio de las diferencias.

En ese sentido, prácticas similares respecto de soluciones alternativas de controversia se han adoptado en países con población indígena como Colombia, Ecuador y Perú, en donde se plantea la importancia de reflexionar acerca del posible relacionamiento y utilización de mecanismos o institutos jurídicos modernos alternativos, de resolución de conflictos, como el de la mediación en ámbitos comunitarios indígenas.[[17]](#footnote-17)

De ahí que, en el presente caso, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1, 2, apartado A, fracciones III y VII y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 255, párrafos 2 y 6, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, así como, 2, apartado B, fracción IX, párrafo 1, 4, 5, inciso c); 6, párrafo 1, inciso a), y 8 del Convenio 169, así como 13, párrafo 2, y 38, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, esta Sala Superior considera que previo a cualquier determinación que adopten las autoridades administrativas o jurisdiccionales respecto de la elección de agente de policía de la comunidad de la colonia Costa Rica, del municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, se debe privilegiar la solución pacífica del conflicto intracomunitario, de conformidad, al menos, con los siguientes lineamientos:

* En ejercicio de su derecho a la autodeterminación y a elegir a sus propias autoridades, así como respetando la autonomía de la comunidad, sus integrantes deberán buscar solucionar el conflicto intracomunitario de manera pacífica, a efecto de decidir quién deberá ocupar el cargo de agente de policía municipal durante dos mil trece, o el periodo que estimen conveniente, y definir las normas y procedimientos que deben aplicarse en este tipo de procedimientos.
* A efecto de privilegiar la adopción de una solución adecuada al conflicto, en tanto se resuelve el mismo, la autoridad municipal, deberá tomar las medidas necesarias para garantizar, en la medida de la posible, las condiciones necesarias que permitan la solución de la controversia y la gobernabilidad en la comunidad.
* Lo anterior, lo podrán realizar por medio de la mediación y/o la consulta a los integrantes de la comunidad, a través de las autoridades representativas, como es la asamblea comunitaria, previamente a una amplia convocatoria.
* En el caso de la mediación, los integrantes de la comunidad podrán designar a un mediador, ya sea de entre ellos mismos, o alguna autoridad de la comunidad o del municipio que en su concepto pueda fungir de manera que se logre un acuerdo intracomunitario que solucione la controversia, o mediante el apoyo de las autoridades gubernamentales estatales o las propias autoridades electorales.
* En el caso de la consulta, se deberá definir el procedimiento a seguir, en especial, de manera que se ponderen los intereses en juego y se sometan los derechos y alternativas propuestas a consideración de los integrantes de la comunidad.
* En ambos casos, se deberá buscar el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, de manera que se adopte la medida que resulte menos lesiva a las partes, garantizando el los derechos humanos y libertades de los integrantes de la comunidad, en los términos del artículo 2 de la Constitución federal y de los instrumentos internacionales aplicables.
* El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en ejercicio de sus facultades deberá coadyuvar a llevar a cabo la mediación o, en su caso, la realización de la consulta, a efecto de logar una solución al conflicto.
* En caso de que no se logre una solución bajo los términos planteados, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, quien garantizando el más amplio derecho de audiencia de las partes en conflicto, resuelva lo que en Derecho corresponda, para lo cual podrá requerir a las autoridades la información pertinente, así como, en su caso, solicitar los informes o peritajes que estime necesarios.

En **conclusión**,lo procedente es revocar la resolución impugnada y dejar sin efecto tanto la asamblea celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil doce, como la realizada el veintisiete de enero de dos mil trece, respecto del cargo de agente de policía para el periodo dos mil trece, a efecto de que el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, lleve a cabo las medidas necesarias para la solución de la controversia, bajo los criterios y consideraciones expuestas en el presente fallo.

En virtud de que la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado tiene entre sus funciones la de coadyuvar y asesorar en la conciliación y resolución de conflictos políticos y electorales de los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 43, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y el Presidente Municipal quien expide los nombramientos de agente de policía, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, deberán coadyuvar a efecto de llevar a cabo los actos señalados en la presente sentencia.

Asimismo, a fin de contribuir a la consecución de una solución al conflicto, garantizando que las partes dentro del mismo contribuyan a resolver a través de medios alternativos de solución, como los señalados, el Ayuntamiento del municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, quien en caso de remoción de un agente de policía designa a los sustitutos en términos de lo establecido en el artículos 78, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, deberá tomar las medidas necesarias a efecto de designar, a alguien distinto de los involucrados, para que ocupe de manera provisional la agencia de policía de la comunidad de la colonia Costa Rica, hasta en tanto se tome una determinación definitiva que ponga fin al conflicto, en los términos y plazos previstos por esta ejecutoria.

En consecuencia, ante lo avanzado del presente año, y en virtud de que el cargo a ocupar tiene vigencia únicamente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, todo lo anterior, se deberá realizar en un plazo de treinta días a partir de la notificación del presente fallo, dentro del cual, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a fin de propiciar un ambiente propicio para la solución de la controversia y la definición de las normas y procedimientos que deben seguirse en la elección de que se trata, en el entendido de que corresponde también a los miembros de la propia comunidad contribuir a esa finalidad, para lo cual deben esforzarse por fortalecer los vínculos comunitarios y participar efectivamente en las decisiones que correspondan en un espíritu de cooperación y asociación con las autoridades estatales, municipales y comunitarias.

Por lo expuesto y fundado, se

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se **revoca** la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, en los autos del expediente JDCI/09/2013, relativo a la elección de Mario Canseco Silva como agente de policía de la mencionada comunidad indígena.

**SEGUNDO. Se dejan sin efecto,** tanto la asamblea celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil doce, como la realizada el veintisiete de enero de dos mil trece, respecto del cargo de agente de policía para el periodo dos mil trece,

**TERCERO.** Se **ordena** al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar una pronta solución a la controversia planteada con la cooperación y colaboración de las autoridades estatales, municipales y comunitarias que estime pertinentes, en los términos precisados en el apartado 6 del considerando cuarto de esta ejecutoria.

**CUARTO.** El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca deberáinformar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento de la presente sentencia y sobre las medidas adoptadas para la resolución del conflicto, en un plazo de cuarenta y ocho horas después de su emisión.

**QUINTO.** Se vincula para el cumplimiento de esta ejecutoria a la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca, así como al Presidente Municipal del San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, a efecto de que coadyuve en la solución a la controversia planteada en los términos señalados en el cuerpo de la sentencia.

**NOTIFÍQUESE** a las partes y los interesados, como corresponda.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por **UNANIMIDAD** de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del Magistrado Manuel González Oropeza, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

|  |  |
| --- | --- |
| **MAGISTRADO PRESIDENTE**  **JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS** | |
| **MAGISTRADA**  **MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA** | **MAGISTRADO**  **CONSTANCIO**  **CARRASCO DAZA** |
| **MAGISTRADO**  **FLAVIO**  **GALVÁN RIVERA** | **MAGISTRADO**  **SALVADOR OLIMPO**  **NAVA GOMAR** |
| **MAGISTRADO**  **PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ** | |
| **SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS**  **FELIPE DE LA MATA PIZAÑA** | |

### **SENTENCIA** [**SUP-JDC-1097/2013**](http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01097-2013.htm)

**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO**

**EXPEDIENTE: SUP-JDC-1097/2013**

**ACTORES: GUDELIA ARAGÓN HERNÁNDEZ Y OTROS**

**TERCERO INTERESADO: VICENTE MARTINES Y OTROS**

**AUTORIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**

**MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR**

**SECRETARIOS: JAVIER MIGUEL ORTIZ FLORES Y JORGE MEDELLÍN PINO**

México, Distrito Federal, a doce de diciembre de dos mil trece.

**VISTOS,** para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Gudelia Aragón Hernández, Valente de Jesús Hernández y Quirino Martínez, quienes se ostentan —los primeros dos— como integrantes de la Comisión Representativa de la cabecera municipal y —el tercero— como “representante municipal” de la ranchería de San Bartolo Lapaguia, así como indígenas de la etnia zapoteca de la Sierra Sur, perteneciente al Municipio de San Juan Ozolotepec, Miahuatlán, Oaxaca, en contra del procedimiento y los resultados de la *consulta ciudadana* realizada por la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos (en adelante “Dirección Ejecutiva”) del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (en adelante “Instituto”), en el aludido Municipio el pasado cinco de octubre, así como el cómputo efectuado el ocho de octubre, ambos de dos mil trece, a fin de acordar los procedimientos para renovar a las autoridades municipales para el trienio dos mil catorce-dos mil dieciséis, y

**R E S U L T A N D O**

**I.** De los hechos narrados por las ciudadanas y ciudadanos actores, en su escrito inicial de demanda, así como de las constancias de autos del presente expediente, se advierte lo siguiente:

**a) Acuerdo del Consejo General local.** Mediante acuerdo CG-SNI-1/2012, de diecisiete de noviembre de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó el Catálogo General de los Municipios que elegirán a sus Autoridades mediante el Régimen de Sistemas Normativos Internos. En dicho catálogo se encuentra incluido el Municipio de San Juan Ozolotepec, con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

**b) Primer juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.** El dieciséis de noviembre de dos mil doce, Donato Sánchez Hernández y Darío Cruz Sánchez, ostentándose como ciudadanos del Municipio de San Juan Ozolotepec, Miahuatlán, Oaxaca presentaron escrito de demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, por el cual controvertían supuestas omisiones atribuidas al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos de esa autoridad administrativa local, el Presidente Municipal y el Cabildo de San Juan Ozolotepec, Miahuatlán, Oaxaca, vinculadas con la consulta ciudadana para decidir el régimen de elección que se adoptará para renovar a sus autoridades municipales.

**c) Sentencia del primer juicio ciudadano.** El veintinueve de diciembre de dos mil doce, esta Sala Superior resolvió el expediente identificado con la clave SUP-JDC-3188/2012, en el sentido, entre otros aspectos, de que no se actualizó la omisión imputada a la autoridad responsable, al advertir que ésta sí llevó a cabo las gestiones necesarias, ordenadas por la ley, a fin de elaborar el Catalogo General de los Municipios que habrían de elegir a sus autoridades bajo sistemas normativos internos.

Sin embargo, este órgano jurisdiccional electoral federal a efecto de dar certeza y seguridad jurídica a la población sobre el régimen adoptado para elegir a sus autoridades municipales, exhortó a las Autoridades Municipales del Ayuntamiento de San Juan Ozolotepec, Miahuatlán, Oaxaca, para que en ejercicio de sus atribuciones, realizaran todas las acciones tendientes a que en el trienio dos mil catorce–dos mil dieciséis, se respeten los derechos político-electorales de todos los ciudadanos pertenecientes a dicha comunidad.

**d) Reunión de trabajo.** Previa comunicación entre la Dirección Ejecutiva del Instituto y el Presidente Municipal de San Juan Ozolotepec, así como entre las comunidades de Santa Catarina Xanaguia y San Andrés Lovene, el diez de septiembre de dos mil trece, se realizó reunión de trabajo y derivado del dialogo entre las partes se acordó nombrar una comisión de representantes a fin que estuvieran presentes en las mesas de trabajo del proceso electoral.

**e) Acta de comparecencia.** El diecisiete de septiembre de dos mil trece, se levantó acta en la Dirección Ejecutiva, respecto de la comparecencia realizada por la Ranchería de San Bartolo Lapaguia, así como de la Agencia de San Andrés Lovene y ciudadanos de la cabecera municipal, a fin de dar cuenta con la inasistencia del Presidente Municipal, acordando una nueva reunión para el veinticuatro de septiembre siguiente.

**f) Reunión de trabajo.** El veinticuatro de septiembre de dos mil trece, se llevó a cabo reunión de trabajo entre la Dirección Ejecutiva, la autoridad municipal de San Juan Ozolotepec, así como ciudadanos comisionados por dicho Municipio, la Agencia de Santa Catarina Xananguia y sus ciudadanos comisionados, la Agencia de San Andrés Lovene, y ciudadanos de San Bartolo Lapaguia, acordando, entre otras cosas, llevar a cabo la consulta de las propuestas para el cinco de octubre del año en curso, ésta tendría verificativo en cada una de las cabeceras municipales.

**g) Consulta.** El cinco de octubre de dos mil trece se realizó la consulta ciudadana a efecto de definir los métodos y procedimientos que se adoptarán para renovar a las autoridades municipales, mediante la instalación de una mesa receptora de votos en cada comunidad, conforme a lo acordado en la minuta levantada el veinticuatro de septiembre de dos mil trece.

**h) Cómputo de la consulta.** El ocho de octubre de dos mil trece, tuvo verificativo el cómputo de la consulta mencionada.

**II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.** El once de octubre de dos mil trece, inconformes con el procedimiento y resultado de la consulta realizada por la Dirección Ejecutiva del Instituto, la parte actora promovió *per saltum* el presente juicio protector.

**III. Trámite, sustanciación y cierre de instrucción.** El pasado diecisiete de octubre del año en curso, el Instituto remitió a este órgano jurisdiccional electoral federal el escrito de demanda, informe circunstanciado y demás documentación que estimó atinente. Una vez ordenada la integración del expediente por el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, habiéndose turnado el expediente a la ponencia del Magistrado ponente y concluida la sustanciación, se declaró cerrada la instrucción, quedando el asunto en estado de dictar sentencia, y

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. *Competencia.*** Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio impugnativo, conforme a lo previsto en los artículos 99, párrafos segundo y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 79, párrafo 1; 80, párrafo 1, inciso f) y 83, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano, promovido por diversas ciudadanas y ciudadanos, quienes se ostentan como integrantes indígenas del Municipio de San Juan Ozolotepec, Miahuatlán, Oaxaca, en contra del procedimiento y resultados de la *consulta ciudadana* realizada por la Dirección Ejecutiva del Instituto, en el aludido Municipio el pasado cinco de octubre, así como el cómputo efectuado el ocho de octubre, ambos de dos mil trece, **a fin de acordar los procedimientos para renovar a las autoridades municipales para el trienio dos mil catorce-dos mil dieciséis**, cuestión que, al no estar expresamente prevista para las salas regionales de este Tribunal Electoral, es competencia de esta Sala Superior.

**SEGUNDO. *Procedencia.* Presupuestos procesales, requisitos de forma y de procedencia del medio impugnativo.** El presente medio impugnativo reúne los requisitos de forma, de procedencia y los presupuestos procesales previstos en los artículos 7º; 8º, párrafo 1; 9º, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b); 79, párrafo 1 y 80 párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, incluido el principio de definitividad, al operar una excepción al mismo,como se explica a continuación.

**Procedibilidad *per saltum.*** Los ciudadanos actores aducen que promueven *per saltum* el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado, por considerar que, de agotarse la cadena impugnativa, se verían afectados sus derechos político-electorales, toda vez que el proceso electoral por el sistema de partidos políticos debió de realizarse entre los meses de agosto y septiembre, y a la fecha en que promovieron no se ha llevado a cabo la asamblea de elección, tomando en consideración que la fecha para la toma de posesión es el primero de enero de dos mil catorce, de conformidad con el artículo 267, párrafo 1, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca.[[18]](#footnote-18)

De la lectura de la demanda se advierte que la controversia de este asunto versa sobre la validez del procedimiento y la consulta realizada respecto de la elección de concejales en el Ayuntamiento de San Juan Ozolotepec, Oaxaca, para el trienio 2014-2016 (dos mil catorce-dos mil dieciséis).

En ese contexto, conforme a lo previsto en el artículo 138, párrafo 1, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, el procedimiento electoral ordinario para tal elección, debe iniciar a más tardar en la segunda semana del mes de noviembre, razón por la cual se considera procedente la impugnación directa, *per saltum*, ante esta instancia jurisdiccional.

Así, toda vez que si bien es cierto que el sistema de medios de impugnación en materia electoral local en Oaxaca prevé el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, también lo es que el agotamiento de tal instancia podría implicar una merma en el derecho político-electoral que las y los demandantes aducen vulnerado con la consulta ciudadana relativa a la renovación de autoridades municipales en el Ayuntamiento de San Juan Ozolotepec, Miahuatlán, Oaxaca, de ahí que se acoja la pretensión de los actores consistente en acudir *per saltum* a este órgano jurisdiccional.

Al respecto, esta Sala Superior ha sostenido que los promoventes quedan exonerados de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral, en los casos en que el agotamiento de los medios de impugnación se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo.

En efecto, la razón que constituye la base lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de recurrir a los medios ordinarios, antes de acceder a la justicia constitucional federal, radica en la explicación de sentido común de que tales medios de impugnación no son meras exigencias formales para retardar la impartición de la justicia, sino instrumentos aptos y suficientes para reparar oportunamente las violaciones que se hayan cometido con el acto o resolución que se combata; y, al ser así las cosas, se deduce que, cuando ese propósito o finalidad no se puede satisfacer, ya sea por las peculiaridades del asunto, por la forma en que se encuentren regulados los procesos impugnativos comunes o por las actitudes de la propia autoridad responsable, entonces se puede ocurrir directamente a la vía constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos impugnativos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 9/2001 sustentada por esta Sala Superior,[[19]](#footnote-19) cuyo rubro es: DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO.[[20]](#footnote-20)

**a) Forma.** Esta Sala superior considera que ha lugar a tener por satisfechos los requisitos previstos en el artículo 9º, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que, la demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable, haciéndose constar el nombre de los actores, y su firma autógrafa, el domicilio para oír y recibir notificaciones y la persona autorizada para tales efectos; se identifica el acto impugnado, así como las autoridades responsables; se mencionaron los hechos en que se basa la impugnación y los agravios que consideran, les genera ese acto.

**b) Oportunidad.** La demanda del presente juicio fue promovida de manera oportuna, ya que se interpuso dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que se llevó a cabo el cómputo de la consulta impugnada, lo anterior, de conformidad con lo previsto por los artículos 7º, párrafo primero, y 8º de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, según las constancias de autos, se advierte que el cómputo de la consulta impugnada se llevó a cabo el ocho de octubre del presente año, por lo que el plazo para la promoción del medio impugnativo transcurrió del nueve al doce de octubre de dos mil trece; de ahí que, si la demanda se presentó el once de octubre de este año, como consta en el sello de recepción, la misma se presentó dentro del plazo estipulado para ello.

Sobre el particular, esta Sala Superior considera preciso señalar que se ha identificado como acto preponderantemente impugnado el cómputo de la consulta controvertida, en el entendido de que, de una lectura íntegra del escrito inicial de demanda, conforme a la tesis 4/99, de rubro:MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR,se advierte que si bien es cierto que las ciudadanas y los ciudadanos impugnantes controvierten el proceso de consulta y la consulta misma, también es verdad que, en su concepto, consideran que la afectación de sus derechos humanos de participación política se concretó en el resultado del cómputo como consecuencia directa e inmediata de las irregularidades que, según aducen, se cometieron en el procedimiento de consulta.

Lo anterior, con arreglo al principio *pro actione* derivado del principio *pro persona*, de conformidad con una interpretación sistemática y, por ende, armónica de lo dispuesto en los artículos 1º, párrafo segundo, 2º, aparatado A, fracción VIII, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**c) Legitimación.** Se tiene por acreditada la legitimación de la parte actora, pues el presente juicio es promovido por ciudadanas y ciudadanos que se identifican a sí mismos como integrantes de la Ranchería de San Bartolo Lapaguia y de la Cabecera Municipal, del Municipio de San Juan Ozolotepec, Miahuatlán, Oaxaca, y en forma individual, con el propósito de controvertir el procedimiento y resultados de la *consulta ciudadana* realizada por la Dirección Ejecutiva del Instituto, en el aludido Municipio el pasado cinco de octubre, lo cual, aducen, les causa perjuicio.

En ese sentido, cabe precisar que, en el informe circunstanciado rendido por la Directora Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto, se les reconoce esa calidad a los ahora promoventes del presente juicio.

Asimismo, también se tiene por acreditada la calidad de indígenas de las ciudadanas y ciudadanos actores, dado que se autoadscriben a la etnia zapoteca. Lo anterior encuentra respaldo argumentativo en la tesis jurisprudencial 4/2012, de rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. LA CONCIENCIA DE IDENTIDAD ES SUFICIENTE PARA LEGITIMAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.[[21]](#footnote-21)

**d) Interés jurídico.** Las ciudadanos y ciudadanos promoventes cuentan con interés jurídico para reclamar los actos que aducen, en atención a que, la lectura integral de su escrito inicial de demanda, permite advertir que aducen la violación a sus derechos humanos de votar y ser votados y, a la vez, hacen ver que la intervención de este órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante el dictado de una sentencia que garantice la realización de una nueva consulta en la que se cumplan con todos los requisitos normativos necesarios, restituyendo así a la parte demandante en el goce de los derechos que aducen violados.

Lo anterior, acorde con la tesis jurisprudencial 7/2002, de rubro: INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO[[22]](#footnote-22).

**e) Definitividad**. En el caso concreto, como se explicó, se justifica la impugnación directa, *per saltum*, ante esta Sala Superior, razón por la cual se actualiza una excepción al principio de definitividad.

**TERCERO. *Cuestiones previas para resolver el presente asunto.*** De manera previa, este órgano jurisdiccional federal estima pertinente señalar que existe un precedente directamente aplicable al presente caso, a saber: el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-3188/2012[[23]](#footnote-23) y, por lo tanto, orienta la resolución del presente asunto, como se explica a continuación:

- **Acto impugnado.** En este asunto, diversos ciudadanos del municipio de San Juan Ozolotepec, Oaxaca controvirtieron la supuesta omisión del Consejo General del Instituto, de la Dirección Ejecutiva de esa autoridad administrativa local, del Presidente Municipal y del Cabildo de San Juan Ozolotepec, Oaxaca, de realizar la consulta ciudadana para decidir el régimen de elección que se adoptará para renovar a las autoridades municipales, para el trienio 2014-2016.

- **Resolución.** La Sala Superior resolvió que no quedó acreditada omisión alguna respecto de las autoridades responsables, pues hasta el día anterior a la fecha en la que se presentó la demanda de juicio ciudadano, no existía ninguna solicitud ante las instancias municipales competentes para que se determinara un cambio en el régimen electoral que tradicionalmente se había venido siguiendo para la elección de autoridades municipales, así como tampoco que se hubiera dejado de atender de manera injustificada alguna solicitud de los actores para que se realizara la consulta respecto de la preferencia ciudadana del régimen a seguir para dicha elección.

Asimismo, se determinó que no existía tal omisión por parte de las autoridades responsables, pues de la normativa local no se advierte que la autoridad administrativa electoral se encuentre facultada para realizar de oficio una consulta a la comunidad indígena sobre la continuidad o cambio de régimen electoral.

- **Parámetros para solicitar la consulta.** Al respecto, este órgano jurisdiccional estableció, en el precedente invocado, que de una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en el derecho interno mexicano, así como de los tratados internacionales, se puede advertir que la petición o solicitud para la realización de una consulta para determinar la continuidad o un cambio de régimen electoral para elegir a las autoridades municipales, ya sea del sistema normativo interno o de “usos y costumbres” o del sistema de partidos políticos, debe solicitarse bajo los parámetros siguientes:

* **Oportunidad**. La consulta debe solicitarse con oportunidad, es decir, toda petición para la realización de una consulta encaminada a definir la continuidad o el cambio del régimen electoral en una comunidad indígena debe presentarse dentro de un plazo razonable para que la autoridad municipal y, en su caso, la autoridad administrativa electoral estén en aptitud de efectuar todos los trámites necesarios para su realización.

Esto es, la petición debe formularse con anticipación al inicio del proceso electoral por el régimen de partidos políticos en el Estado [segunda semana de noviembre del año anterior a la elección (artículo 138 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca)] y durante la etapa en la cual el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la referida entidad federativa a través de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos recaba y sistematiza la información relacionada con la continuidad de los sistemas normativos internos o de usos y costumbres para la elaboración y actualización del Catálogo General de los municipios que eligen a sus ayuntamientos mediante sus sistemas normativos internos, esto es desde el mes de enero del año previo a la elección ordinaria del régimen de partidos políticos (artículos 41, fracciones I y II, así como 259, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca).

Ello obedece a los plazos y términos que prevé la normativa aplicable, pues, para garantizar los principios de equidad y certeza en los procesos comiciales, es necesario que la autoridad electoral local cuente con la información necesaria sobre el régimen electoral de cada uno de los municipios del Estado para estar en aptitud de llevar a cabo todos los actos tendentes a la preparación y desarrollo de las elecciones por el régimen de partidos políticos, así como para coadyuvar, en caso de que le sea solicitado, en la preparación y desarrollo de las elecciones regidas por sistemas normativos internos o de "usos y costumbres".

Además, se precisó que la realización de la consulta para definir el régimen electoral para elegir a las autoridades municipales debe efectuarse por la autoridad municipal en ejercicio del derecho de autodeterminación de la comunidad y, en su caso, con la coadyuvancia de las autoridades electorales del Estado, para lo cual pueden realizarse **reuniones de trabajo con los miembros de la comunidad en donde se encuentren representados todos los sectores ciudadanos, con el objeto de que se fijen los términos bajo los cuales se llevará a cabo la consulta y con ello garantizar la participación de toda la comunidad** (artículos 26, fracción XLIV y 41, fracciones VI, VII, X, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca).

* **Forma**. Las peticiones formuladas para la realización de una consulta para determinar la continuidad o el cambio del régimen electoral para elegir autoridades municipales, pueden formularse ante la autoridad municipal, o bien ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, mismo que, a través de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, debe dar el trámite correspondiente a fin de garantizar el derecho de autodeterminación de las comunidades indígenas, actuando como mediador en caso de ser necesario.

Dichas peticiones se pueden presentar en forma oral o por escrito, siempre y cuando se expresen las razones y elementos probatorios, al menos indiciarios, para acreditar que la situación del municipio ha cambiado o deba cambiar y que esta conste en alguna forma.

**- Preservar principios de equidad y certeza.** Asimismo, en la sentencia invocada, la Sala Superior razonó que, con el objeto de preservar los principios de equidad y certeza, la petición formulada por los actores debió presentarse en forma oportuna, de tal forma que hubiesen elementos y tiempo suficiente para que, en su caso, se tramitara y efectuara la consulta solicitada.

- **Respeto a los derechos humanos.** En los comicios que se lleven a cabo por usos, costumbres o derecho consuetudinario, si bien no resultan exactamente aplicables los principios rectores de corte constitucional que rigen a toda elección, para que se les reconozca validez a los procedimientos o prácticas que se sigan, éstos **no deben ser incompatibles con los derechos fundamentales establecido en la Constitución General ni con los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano**, así como tampoco tener como consecuencia impedir a las personas que conformen los pueblos y comunidades indígenas ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

* **Providencias.** En el precedente invocado, esta Sala Superior, a fin de mantener debidamente el orden constitucional, proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos pertenecientes a la comunidad de San Juan Ozolotepec, Miahuatlán, Oaxaca y velar por la observancia de los preceptos democráticos de toda elección, emitió las providencias siguientes:
  1. Aun cuando las convocatorias para renovar a las autoridades municipales del referido Municipio están dirigidas a las y los integrantes de la citada comunidad, es claro que existe cierta desigualdad en la participación política de mujeres en relación con los hombres de la comunidad, por lo que esta Sala Superior advirtió que, efectivamente, como lo informaron las autoridades municipales, dichas convocatorias deberían:
     + Realizarse en el ámbito geográfico que corresponde al ayuntamiento y difundirse, tanto por medio de carteles que se coloquen en lugares visibles en el ayuntamiento y perifoneo, así como aquellas otras que decida la autoridad comunitaria correspondiente, siempre que se asegure su adecuada y amplia difusión en la cabecera y agencias municipales, así como toda concentración poblacional que comprenda el municipio, y
     + Dirigirse a todos los integrantes de la comunidad (tanto mujeres como hombres) de la cabecera municipal y agencias que, según el derecho indígena de la comunidad, tengan derecho a participar.
  2. Exhortar a las autoridades municipales del Ayuntamiento de San Juan Ozolotepec, Miahuatlán, Oaxaca, para que, en ejercicio de las atribuciones que tiene legalmente conferidas, realice todas las acciones tendientes a que en el proceso electoral para la elección de autoridades para el trienio 2014-2016, se respeten los derechos político-electorales constitucionales de todos los ciudadanos pertenecientes a dicha comunidad, en los siguientes términos:
     + Se permita la participación a todos los ciudadanos hombres y mujeres mayores de dieciocho años, vecinos con residencia de por lo menos dos años en el referido municipio, en términos de la Constitución Federal, Constitución local y leyes de la materia, en las elecciones a celebrarse para elegir autoridades municipales para el trienio 2014-2016.
     + En todo momento se respeten los usos y costumbres de la comunidad, privilegiando la participación de todos los ciudadanos, hombres y mujeres en igualdad de circunstancias.
     + En uso de sus atribuciones, podrá solicitar la intervención de las autoridades municipales o estatales, con la finalidad de salvaguardar el orden y la paz social en San Juan Ozolotepec Miahuatlán, Oaxaca.
  3. En la sentencia se vinculó al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para que en uso de sus atribuciones coadyuvara de forma imparcial con el Presidente Municipal de San Juan Ozolotepec Miahuatlán, Oaxaca a la consecución de las obligaciones señaladas.

**CUARTO. *Motivos de impugnación.*** En el presente apartado esta Sala Superior identifica la siguiente pretensión, causa de pedir y los agravios hechos valer:

Ante todo, es preciso señalar que esta Sala Superior, tomando en cuenta que el estudio de fondo en el presente asunto implica aspectos estrechamente relacionados con el derecho de los miembros de una comunidad indígena a definir sus propias normas y procedimientos internos con base en su derecho a la autodeterminación constitucionalmente reconocido considera procedente, a fin de salvaguardar plenamente el derecho de acceso a la justicia, suplir la deficiencia de los agravios, incluso ante la ausencia total de los mismos, en lo que resulte aplicable, de acuerdo con la jurisprudencia, de rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES,**[[24]](#footnote-24)** en el sentido de que, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por integrantes de comunidades o pueblos indígenas, en el que se plantee el menoscabo de su autonomía política o de los derechos de sus integrantes para elegir sus autoridades o representantes, conforme a sus propias normas, procedimientos y prácticas tradicionales, la autoridad jurisdiccional electoral debe no sólo suplir la deficiencia de los motivos de agravio, sino también su ausencia total y precisar el acto que realmente les afecta, sin más limitaciones que las derivadas de los principios de congruencia y contradicción, inherentes a todo proceso jurisdiccional, porque tal suplencia es consecuente con las normas constitucionales que reconocen los derechos de estos pueblos o comunidades y sus integrantes.

La **pretensión** de los actores consiste en que se declare la invalidez de la consulta realizada el pasado cinco de octubre de dos mil trece, en el Municipio de San Juan Ozolotepec, así como los resultados consignados en el acta de cómputo respectiva de ocho de octubre del mismo año y, en su lugar, se realiza otra en la que se cumplan con todos los requisitos de validez exigibles conforme a derecho.

La **causa de pedir** la hacen consistir en que en la consulta impugnada se cometieron diversas irregularidades invalidantes.

Al efecto, aducen, a manera de agravios, en síntesis, los siguientes argumentos:

**1.** **Invalidez de la consulta y sus resultados**. Las ciudadanas y los ciudadanos actores se duelen del proceso de preparación de la consulta, de la consulta misma y de sus resultados, ya que, en su concepto, se viola lo dispuesto en los artículos 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 19 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como los criterios emitidos por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y otros comités de la OIT y los *Lineamientos y metodología para el proceso de mediación de casos de controversias respecto a las normas o procesos de elección en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos* (en adelante “Lineamientos”).[[25]](#footnote-25)

Así, por lo siguiente:

De conformidad con los citados lineamientos, la consulta se desarrollará según un programa de trabajo y un calendario que será consensado por las partes. En el caso, el veinticuatro de septiembre de dos mil trece se determinó resolver la consulta el cinco de octubre siguiente, sin que se citara a las ciudadanas y ciudadanos actores para acordar el plan de trabajo y el calendario respectivo de actividades y, mucho menos, participar en la selección o diseño de las preguntas de la consulta, las cuales fueron redactadas exclusivamente por personal del Instituto, sin que intervinieran en su redacción. Tampoco se cumplieron con las etapas de identificación precisa de las modificaciones de las normas, instituciones y procedimientos de los sistemas normativos internos objeto de la consulta, siendo que la cabecera municipal presentó una propuesta de convocatoria, la cual no se ha dado a conocer a las comunidades ni ha sido discutida.

No hubo información previa a los pueblos y comunidades indígenas sobre el tema que se sometería a consulta y/o sobre las propuestas de modificación o innovación a los sistemas normativos internos, así como los posibles impactos de las mismas, para que a partir de esos instrumentos de información se generase un proceso de auto-reflexión comunitaria sobre las controversias, sus causas y alternativas de solución. No hubo foros donde se les acercaran todos los elementos para valorar, lo que significaba el cambio y tampoco se les dio tiempo para deliberar según sus procedimientos y cultura.

Particularmente, en la Agencia de Santiago Lapaguia nadie participó en la consulta y su ranchería no fue consultada.

No se escuchó la opinión de los órganos de consulta de las comunidades, tales como los comisariados, el Consejo Consultivo de la Cabecera Municipal y ciudadanos caracterizados de las agencias. Al respecto, invocan lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku.

No existió tampoco una convocatoria como tal a la consulta, sino que únicamente se acordó, en la reunión del día veinticinco de septiembre, que la misma se realizaría el cinco de octubre siguiente, de tal modo que los **ciudadanos que participaron** en la consulta se enteraron por los avisos que los representantes hicieron mediante altavoz, pero nunca se les proporcionó, con exactitud, lugar, fecha y hora de la realización de la misma y, por ende, no tuvieron pleno conocimiento del tema o asunto que sería sometido, ni del carácter de la consulta.

En relación con las consultas, las mismas debieron realizarse mediante el método usado y aprobado por las comunidades para tomar decisiones, es decir, mediante asamblea comunitaria. No obstante, la Dirección Ejecutiva determinó realizarla mediante boletas impresas en lengua castellana, sin considerar en ningún momento los métodos acostumbrados en la toma de decisiones, “la lengua” (*sic*) y los índices de analfabetismo del Municipio. Asimismo, al instalar mesas receptoras a cargo del Instituto, en ninguna de las comunidades se instalaron las asambleas que estuvieran presididas y conducidas por las autoridades comunitarias respectivas.

Las ciudadanas y ciudadanos actores estiman que las preguntas planteadas por la Dirección Ejecutiva van encaminadas a modificar de manera sustantiva el sistema de elección de autoridades y ponen en riesgo su continuidad como pueblo indígena, puesto que al considerarse en el interrogatorio la posibilidad de realizar la elección del presidente municipal y demás integrantes del cabildo mediante planillas, utilizando urnas y boletas, los asimila al régimen de partidos políticos, extinguiendo de esa forma los servicios, la escala de cargos, cooperaciones, mayordomías, tequios y demás, elementos que se toman en cuenta para valorar el comportamiento de cada ciudadano para ser elegido y el proceso deliberativo que se sigue en cada asamblea; mientras que al existir planillas invariablemente se entra en un sistema de competencias y rivalidad por el cargo, en cuanto que en su sistema de nombramiento no existe esa competencia, sino que, es al momento de la asamblea electiva, cuando surgen las propuestas y ahí mismo se elige a la persona que se ha distinguido por su servicio a la comunidad.

En lo referente a las urnas y boletas, los impugnantes sostienen que los pueblos indígenas se caracterizan por sus asambleas, que constituyen el máximo órgano de gobierno, por encima del ayuntamiento. En dichas asambleas se delibera y se toman las decisiones de mayor trascendencia para los pueblos, votando a mano alzada o pintando el voto en un pizarrón y demás; ninguno de los cuatro pueblos vota mediante boletas, no existen planillas, ni urnas en la toma de decisiones, ni para elegir a las autoridades municipales y tradicionales.

En relación con los resultados de la consulta, los citados lineamientos señalan que se levantaran actas de asamblea, en las que se consignarán los resultados de la misma y que serán los propios órganos comunitarios quienes las elaborarán y que, en su caso, la Dirección Ejecutiva coadyuvará en la elaboración de las mismas. En el caso, al no haberse realizado asambleas, no se elaboró acta alguna sino que, hasta el ocho de octubre de dos mil trece, en las instalaciones del Instituto, el personal del mismo realizó el cómputo de la consulta, levantando al efecto el acta respectiva.

Así, al decir de las ciudadanas y ciudadanos actores, no sólo no se cumplió con una sola de las etapas previstas en los citados lineamientos sino que tampoco se siguieron los principios que deben observarse en las consultas a los pueblos indígenas que esta Sala Superior determinó, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-9167/2011 (*Caso consulta comunidad indígena de Cherán*), por lo siguiente:

* Si bien los pueblos solicitaron la consulta, no fueron tomados en cuenta para la planeación de la misma;
* No participaron en las fases del desarrollo de la consulta;
* No hubo condiciones de diálogo ni consensos;
* Puesto que no existió información relativa a la consulta, ni contacto con las comunidades, ni asambleas previas, el Instituto tampoco cuenta con información de los sistemas normativos de cada uno de los pueblos; a pesar de que el Presidente Municipal solicitó al Instituto que se realizara un dictamen o diagnóstico sobre los sistemas normativos internos de las comunidades integrantes del Municipio de San Juan Ozolotepec, conforme con la tesis, de rubro: USOS Y COSTUMBRES. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE VERIFICAR Y DETERMINAR LA EXISTENCIA HISTÓRICA DE DICHO SISTEMA EN UNA COMUNIDAD;
* No existió una amplia difusión de la celebración de la consulta, lo que generó que una de las agencias y su ranchería no participaran, razón por la cual el resultado no puede ser válido bajo ninguna circunstancia;
* La consulta no fue equitativa, ya que el sistema utilizado para la realización de la misma fue mediante un método diverso al que se utiliza en los cuatro pueblos que integran el Municipio, como es la asamblea, además de que no hubo traductores de las lenguas que se hablan en el municipio;
* Las preguntas planteadas en la consulta atentan contra la libre determinación de los pueblos, toda vez que son tendenciosas, pues van encaminadas a asimilarlos al régimen de partidos políticos, y
* La consulta se realizó al margen de las asambleas y métodos comunitarios.

Tampoco se observó el criterio contenido en la tesis que lleva como rubro: USOS Y COSTUMBRES. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS CONSULTAS EN COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS, PARA CELEBRAR ELECCIONES.

En suma, según la parte actora, los resultados de la consulta no pueden ser válidos, ya que, de conformidad con el artículo 34, fracción IV, de los citados Lineamientos, cuando se trate de modificaciones sustantivas o que puedan poner en riesgo la comunidad como pueblo indígena, como ocurre en el presente caso, al tratar de asimilar nuestro sistema de elección al de partidos políticos, las decisiones debe privilegiar el consenso y la aprobación por las dos terceras partes de la ciudadanía comunitaria o de los integrantes de la institución comunitaria competente para decidir, porcentaje que en la consulta que ahora se impugna no se alcanza.

**2.** **Desacato de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos**. El Consejo General del Instituto, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, incurre en desacato a lo determinado por esta Sala Superior, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-3188/2012, en el que, entre otros aspectos, se vinculó a dicho consejo a coadyuvar en todo momento con las autoridades municipales del Ayuntamiento de San Juan Ozolotepec Miahautlán, Oaxaca, en los términos precisados en la ejecutoria.

De igual forma, la referida Dirección Ejecutiva dejó de atender su propia normativa, los sistemas normativos internos de los actores, el derecho a la diversidad cultural y lingüística de cada uno de los pueblos y comunidades dentro del Municipio de San Juan Ozolotepec, vulnerando su dignidad, identidad como pueblos, desapareciendo el sistema normativo interno de elección de autoridades y su misma existencia como pueblo indígena, pues sostienen que, con esa determinación administrativa, los asimilan al sistema electoral dominante por urnas y planillas, lo que ocurrió en la elección extraordinaria pasada para elegir a las autoridades municipales del período que concluye, lo que evidencia una política asimilacionista y, por ende, “etnocida”.

**3.** **Petición de pronunciamiento sobre propuesta de convocatoria**. Los actores solicitan expresamente a esta Sala Superior que se pronuncie sobre la propuesta de convocatoria que la Asamblea Comunitaria de la Cabecera Municipal aprobó en cumplimiento al “exhorto” de esta Sala Superior y determine si es de aplicarse en la elección, o bien emita las **providencias suficientes**.

**QUINTO. *Estudio de fondo.*** En elpresente apartado se desarrollan las razones jurídicas que sustentan la decisión.

Por razones de método, los agravios antes reseñados, dada su estrecha relación, se analizarán en forma conjunta, en una sola consideración, en aras de obtener una mejor argumentación de la presente resolución.[[26]](#footnote-26)

Esta Sala Superior estima que los motivos de impugnación hechos valer por los quejosos son **infundados**, por las razones siguientes:

Los agravios de la parte actora se dirigen fundamentalmente a mostrar que se cometieron diversas irregularidades invalidantes en la consulta comunitaria verificada en el Municipio de San Juan Ozolotepec el cinco de octubre de dos mil trece, desde la fase de preparación de la consulta hasta la sesión de cómputo de la misma realizada el ocho de octubre siguiente, pasando por el diseño y la aplicación del cuestionario usado en la consulta. En concreto, el procedimiento de consulta —en concepto de los impugnantes— se llevó a cabo en violación del marco jurídico aplicable y en contravención de sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, además de que, añade, pasa por alto los precedentes aplicables resueltos por esta Sala Superior, razón por la cual los resultados de la consulta no pueden ser válidos.

Por consiguiente, la litis del presente asunto estriba en determinar si la consulta impugnada y sus resultados son válidos, o bien si, por el contrario, como aduce la parte actora, se cometieron irregularidades invalidantes.

**Tesis central de la resolución**

Este órgano jurisdiccional electoral considera que, en forma opuesta a lo sostenido por la parte actora, no se cometieron irregularidades invalidantes en el procedimiento de consulta impugnado, sino que el mismo se desarrolló con regularidad, de conformidad con los parámetros controlantes aplicables, en particular el principio de universalidad. En efecto, de las constancias de autos esta Sala Superior advierte que el procedimiento de consulta se desarrolló con un criterio incluyente, en un ambiente de libertad y en ausencia de hechos de coerción o violentos u otros actos que pudieran llevar a la conclusión opuesta, particularmente que se haya impedido participar a las ciudadanas o ciudadanos del Municipio o a alguna de pueblos o comunidades, o se hayan vulnerado en cualquier forma los derechos humanos de participación política

La argumentación de esta Sala Superior en favor de la tesis enunciada se desarrolla conforme al siguiente temario:

**Temario**

1. Precisión conceptual.
2. Principios constitucionales aplicables.
3. Régimen de sistemas normativos internos.
4. Contexto de la controversia.
5. ¿Cómo se llevó a cabo la consulta?
6. Resultados de la consulta.
7. Examen de las irregularidades hechas valer.
8. Conclusión.
   * + 1. **Precisión conceptual**

**Sistemas normativos internos:** son los principios generales, las normas orales o escritas, instituciones y procedimientos que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y vigentes, y aplican en el desarrollo de su autogobierno, en particular en la definición de sus cargos y servicios, la elección y nombramiento de las autoridades comunitarias del gobierno municipal, la resolución de sus conflictos internos cuya determinación no sea competencia del Congreso; la participación en los asuntos que son susceptibles de afectarles y la protección de sus principios, valores y culturas políticas propias en el ámbito municipal, como expresión del derecho de la libre determinación y autonomía reconocidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y la Constitución Estatal (artículo 255, párrafo 4, del código electoral local).

* + - 1. **Principios constitucionales aplicables**

El acápite del apartado A del artículo 2º constitucional establece que la propia Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, en lo que interesa:

* Aplicar sus propios **sistemas normativos** en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, **la dignidad e integridad de las mujeres**. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes (fracción II).
* Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus **formas propias de** **gobierno interno**, **garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones**, en un marco que respete el pacto federal y la ***“soberanía de los estados”*** (fracción III).
* **Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos** (fracción VII).
* Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas (fracción VII).
* **Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado**. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando la preceptiva constitucional. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura (fracción VIII).
  + - 1. **Régimen de sistemas normativos internos**

En primer término, cabe advertir que, en el caso, no está sujeta a controversia la definición del régimen electoral para elegir a las autoridades municipales en el Municipio de San Juan Olozotepec, vale decir, mediante el régimen de partidos políticos, o bien el régimen de sistemas normativos internos, toda vez que en dicho municipio, **se encuentra vigente el régimen de sistemas normativos internos y, por lo tanto, es el aplicable en el presente proceso electoral de renovación de autoridades municipales**, en atención a las siguientes consideraciones:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 255 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas del Estado de Oaxaca a la libre determinación expresada en su autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización política, así como para elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres, en un marco que respete la Constitución Federal, la Constitución estatal y la soberanía del Estado.

De la misma forma el invocado precepto establece lo que se entiende por “sistemas normativos internos”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en los municipios que se rigen bajo sistemas normativos internos si no hubiese petición de cambio de régimen, se entenderá vigente el sistema inmediato anterior, con el fin de preservar y fortalecer tanto el régimen de partidos políticos como el régimen de sistemas normativos internos y garantizar la diversidad cultural y la pluralidad política en el Estado.

En la especie, dado que no existió petición expresa de cambio de régimen en el Municipio de San Juan Olozotepec, debe entenderse vigente el régimen de sistemas normativos internos. Lo anterior, de conformidad con el *Catalogo general de municipios que elegirán a sus autoridades bajo el régimen de sistemas normativos internos* aprobado por el Consejo general del Instituto mediante acuerdo CG-SN-1/2012 de diecisiete de noviembre de dos mil doce.

* + - 1. **Contexto de la controversia**

Como lo ha hecho esta Sala Superior en otras ocasiones,[[27]](#footnote-27) es preciso considerar el contexto en que se inscribe la controversia que da origen al presente medio impugnativo.

De acuerdo con las constancias de autos, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente caso subyace un conflicto intracomunitario marcado por diferencias graves, entre otros aspectos, respecto de los métodos y procedimientos que deben observarse para la elección de las autoridades municipales para el trienio dos mil catorce-dos mil dieciséis y cuya toma de posesión es el primero de enero de dos mil catorce.

Particularmente, esta Sala Superior identifica, al menos, que existen discrepancias sobre tales aspectos entre la cabecera municipal y las diferentes agencias que conforman el municipio: a saber: Santa Catarina Xanaguia, San Andrés Lovene y Santiago Lapaguia, así como la ranchería de San Bartolo Lapaguia.

Al respecto, es preciso señalar que, dada la situación de conflictividad, la elección se ha ido postergando, cuando tradicionalmente la misma se realiza el quince de agosto del año correspondiente.

De autos se advierte que las autoridades de la cabecera municipal emitieron una convocatoria para la realización de la asamblea. Sin embargo, las agencias municipales de San Andrés Lovene y de Santa Catarina Xanaguia, así como la ranchería de San Bartolo Lapaguia manifestaron abiertamente su rechazo a dicha convocatoria, por no haberlos tomado en cuenta en su elaboración.

Posteriormente, para no atrasar más el proceso electivo, el presidente municipal de San Juan Ozolotepec solicitó expresamente a la Dirección Ejecutiva del Instituto la realización de una consulta a los ciudadanos del municipio para definir el proceso de elección de las autoridades municipales, consulta ahora impugnada.

De igual forma, cabe señalar que esta Sala Superior conoció y resolvió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-637/2011 y acumulado,[[28]](#footnote-28) en el que, entre otros aspectos, determinó confirmar la resolución impugnada relacionada con la elección extraordinaria (celebrada el seis de marzo de dos mil once) por “usos y costumbres” de la elección de concejales del Ayuntamiento de San Juan Ozolotepec, al haberse decretado la nulidad de la elección ordinaria.

Ante el escenario conflictivo descrito, no resulta procedente sostener una perspectiva rígida o reduccionista de la controversia, limitándola al cumplimiento irrestricto de ciertos requisitos formales, sino a la necesidad de contribuir a la solución de un conflicto intracomunitario que incide en la definición de las reglas y procedimientos que resulten válidos para la elección de autoridades comunitarias regidas por sistemas internos propios de la comunidad.

Desde esta perspectiva, tal como lo determinó esta Sala Superior, al resolver el juicio protector SUP-JDC-1011/2013 y acumulado, ante la existencia de un escenario de conflicto intracomunitario caracterizado, entre otras cosas, por la falta de definición clara respecto de las reglas y procedimientos vigentes para la elección de autoridades comunitarias o ante la diferencia grave entre las posiciones de los integrantes y representantes de la comunidad, respecto a las mismas, las autoridades estatales, tanto federales como locales, deben procurar la adopción de aquellas medidas necesarias que propicien el diálogo intracomunitario y la solución pacíficas de las controversias internas como parte del reconocimiento pleno del derecho de acceso a la justicia, garantizando no sólo el derecho de audiencia y defensa de las partes implicadas, sino también propiciando la construcción de consensos y acuerdos que sean necesarios, evitando la imposición o la valoración unilateral de determinados hechos, máxime cuando no se ha tomado en consideración al conjunto de los actores relevantes de la propia comunidad.

De esta forma, esta Sala Superior considera que, cuando de los planteamientos de las partes se advierta la existencia de un conflicto social o político grave, o que incida seriamente en la armonía social o gobernabilidad de una comunidad indígena y en consecuencia trascienda los planteamientos de las partes, las autoridades jurisdiccionales deben salvaguardar no sólo las garantías propias del debido proceso de las partes y, en su caso, de aquellos integrantes de la comunidad que pudieran verse afectados por la decisión que se emita, sino también, tomar las medidas necesarias a fin de propiciar condiciones razonables para encontrar una solución pacífica, a efecto de que sean los propios integrantes de la comunidad quienes, a través inclusive de medios alternos de solución de controversias (como son la conciliación, la mediación y la consulta) lleguen a un acuerdo que resuelva el conflicto, y sólo ante la imposibilidad real de que ello suceda, sea la autoridad estatal quien determine las reglas y procedimientos sobre la base de los planteamientos y elementos probatorios que obren en el expediente o que recabe la autoridad competente, entre ellas, de ser necesario el peritaje antropológico o cultural, procurando analizar los planteamientos de las partes desde una **perspectiva intercultural,** atendiendo no sólo los valores de la comunidad, sino también los principios o valores constitucionales y convencionales que resulten aplicables, así como las particularidades del caso.

En concordancia con lo anterior, resulta ilustrativo lo señalado en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que garantizar la vigencia de derechos de los pueblos indígenas implica para los juzgadores, *modificar de manera importante ciertas concepciones del Derecho y ampliar la mirada sobre las instituciones de justicia y su papel en la sociedad*.[[29]](#footnote-29)

* + - 1. **¿Cómo se llevó a cabo el proceso de consulta impugnado?**

Para dar respuesta a la pregunta anterior, a continuación se señala la información relevante obrante en autos del presente expediente:

a) Reunión de trabajo de veinticuatro de septiembre de dos mil trece. En esa fecha, se llevó a cabo una sesión de trabajo entre el personal de la Dirección Ejecutiva y la autoridad municipal de San Juan Ozolotepec, ciudadanos comisionados por el propio Municipio, ciudadanos comisionados y autoridad de la Agencia de Santa Catarina Xanaguia, la Agencia de San Andrés Lovene y ciudadanos de San Bartolo Lapaguia, de la cual, se afirma, se llegaron a los siguientes acuerdos:

***“…ACUERDOS:***

***PRIMERO: Llevar a consulta las propuestas para el sábado 5 de octubre del año en curso, mismas que se realizaran en La Cabecera Municipal, Santa Catarina Xanaguia, San Andrés Lovene, Santiago Lapaguia y San Bartolo Lapaguia.***

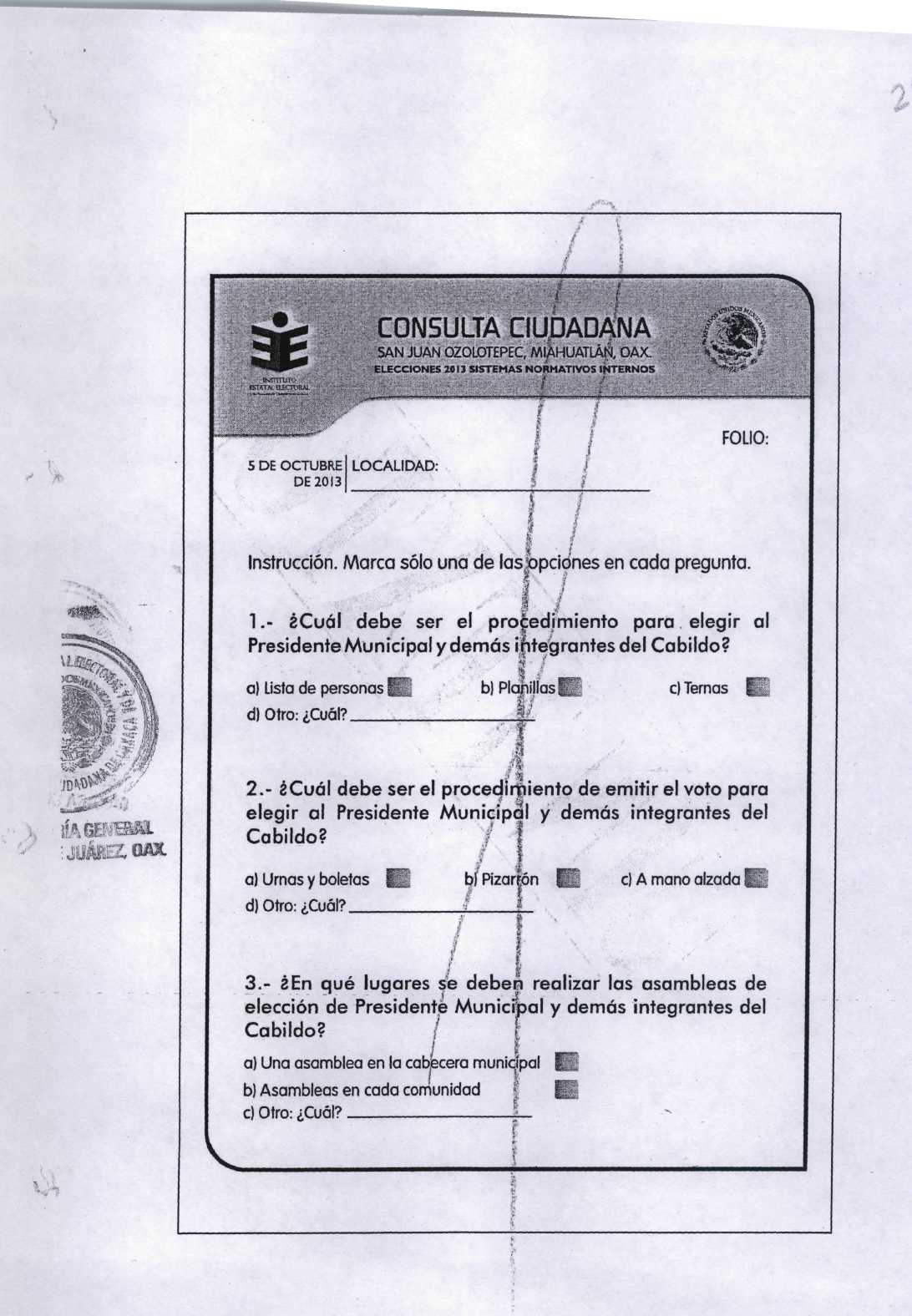
***SEGUNDO: Acuerdan reunirse el día 8 de octubre en las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos a las 12:00 pm. Quedando debidamente notificados los presentes.***

***TERCERO: Para efectos de consulta se utilizara la lista nominal.***

***CUARTO: El personal del Instituto llevara* [sic] *a cabo la consulta…”***

b) Cuestionario de la *consulta ciudadana*

A continuación se inserta una imagen del cuestionario de la consulta impugnada:



Como podrá advertirse, el cuestionario está integrado por tres preguntas, las cuales versan en torno al procedimiento para elegir al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo de San Juan Ozolotepec, Miahuatlan, Oaxaca (pregunta 1); el procedimiento para emitir el voto respectivo (pregunta 2) y los lugares en que se deben realizar las asambleas electivas (pregunta 3).

Para cada una de las preguntas se plantean diversas opciones o alternativas a fin de que la persona consultada marcara una sola, de acuerdo con la instrucción de la consulta, en la inteligencia de que el cuestionario no es cerrado, sino que, en cada una de las tres preguntas formuladas, hay una opción adicional para que la ciudadana o ciudadano pueda especificar alguna otra alternativa distinta de las enunciadas y al efecto hay un espacio en blanco para llenarlo.

c) Desarrollo de la consulta ciudadana

El cinco de octubre de dos mil trece, se llevaron a cabo cuatro asambleas comunitarias, a saber: en la Cabecera Municipal de San Juan Ozolotepec y en las agencias municipales de Santa Catarina Xanaguia, Santiago Lapaguia y San Andrés Lovene.

De acuerdo con las respectivas actas de consulta, cuya copia certificada obra en autos, documentales públicas a las que se le confiere valor probatorio pleno, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierten los siguientes datos:

1. Cabecera Municipal de San Juan Ozolotepec

La instalación de la mesa de consulta se realizó a las diez horas del día cinco de octubre de dos mil trece y la consulta se cerró a las quince horas y veinte minutos del mismo día.

En el acta de consulta se consignan los siguientes datos, los cuales no están controvertidos:

|  |  |
| --- | --- |
| CIUDADANOS INSCRITOS EN LA LISTA NOMINAL | 461 |
| TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS | 474 |
| TOTAL DE BOLETAS SOBRANTES | 96 |
| TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON | 378 |

1. Agencia Municipal de Santa Catarina Xanaguia

La instalación de la mesa de consulta se realizó a las diez horas del día de la fecha de la consulta y se cerró a las catorce horas y quince minutos del mismo día.

En el acta de consulta se consignan los siguientes datos, los cuales no están cuestionados:

|  |  |
| --- | --- |
| CIUDADANOS INSCRITOS EN LA LISTA NOMINAL | 459 |
| TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS | 492 |
| TOTAL DE BOLETAS SOBRANTES | 174 |
| TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON | 318 |

1. Agencia Municipal de Santiago Lapaguia

La instalación de la mesa de consulta se realizó a las diez horas del día del día de la fecha de la consulta y se cerró a las quince horas del mismo día.

En el acta de consulta se consignan los siguientes datos, los cuales tampoco están controvertidos:

|  |  |
| --- | --- |
| CIUDADANOS INSCRITOS EN LA LISTA NOMINAL | 345 |
| TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS | 355 |
| TOTAL DE BOLETAS SOBRANTES | 355 |
| TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON | 0 |

1. Agencia Municipal de San Andrés Lovene

La instalación de la mesa de consulta se realizó a las doce horas y treinta minutos del día de la fecha de la consulta y se cerró a las dieciséis cuarenta horas del mismo día.

En el acta de consulta se consignan los siguientes datos, los cuales tampoco están controvertidos:

|  |  |
| --- | --- |
| CIUDADANOS INSCRITOS EN LA LISTA NOMINAL | 495 |
| TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS | 508 |
| TOTAL DE BOLETAS SOBRANTES | 367 |
| TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON | 141 |

* + - 1. **Resultados de la consulta**

De acuerdo con el acta de cómputo respectiva, los resultados alcanzados fueron los siguientes:

1. Respecto a la pregunta número 1: ¿Cuál debe ser el procedimiento para elegir al Presidente Municipal y demás integrantes del Cabildo? Con un total de 418 votos, se aprobó la propuesta ***“b) Planillas”***.
2. Respecto a la pregunta número 2: ¿Cuál debe ser el procedimiento de emitir el voto para elegir al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo? Con un total de 418 votos, se aprobó la propuesta ***“a) urnas y boletas”***.
3. Respecto a la pregunta número 3: ¿En qué lugares se deben realizar las asambleas de elección de Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo? Con un total de 427 votos, se aprobó la propuesta ***“b) Asambleas en cada comunidad”***.

En suma, la consulta impugnada arrojó como resultado que la elección de las autoridades municipales de San Juan Ozolotepec se realizaría bajo los siguientes métodos y modalidades: mediante planillas, utilizando urnas y boletas, así como la celebración de asambleas comunitarias en cada una de las localidades que conforman el Municipio (cuatro en total), esto es, la Cabecera Municipal de San Juan Ozolotepec y en las agencias municipales de Santa Catarina Xanaguia, Santiago Lapaguia y San Andrés Lovene.

* + - 1. **Examen de las irregularidades hechas valer**

*Evaluación general del proceso de consulta*

En primer término, esta Sala Superior considera preciso advertir que el establecimiento de una carga probatoria para los integrantes de una comunidad indígena, a efecto de que acrediten los extremos fácticos de sus afirmaciones (la realización de un procedimiento de consulta en condiciones irregulares) está justificada, ya que pretenden la invalidación de una consulta realizada a integrantes de una comunidad indígena, respecto de la cual existe una **presunción de validez** que debe ser desvirtuada.

Lo anterior encuentra respaldo argumentativo en las razones que sustentan la tesis jurisprudencial 9/98, de rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.

Asimismo, dado que tal procedimiento democrático implica el ejercicio de derechos humanos por sus pares (indígenas zapotecas), particularmente el derecho humano a la participación política, existe un plano de igualdad procesal, máxime que esa exigencia no es desproporcionada ni irrazonable, no obstante que se trate de una carga procesal que obliga a integrantes de una comunidad indígena a actuar en beneficio de su propio interés procesal (artículo 2º, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal).

En segundo término, es preciso señalar que la evaluación del potencial invalidatorio de las irregularidades procedimentales en una consulta debe procurar equilibrar dos principios distintos:[[30]](#footnote-30) por un lado, un principio que podría denominarse de economía procesal, que apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas procedimentales, cuando ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad expresada y, por lo tanto, a la necesidad de no otorgar efecto invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto y, por otro, un principio de equidad en la deliberación, que apunta, por el contrario, a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales que se produzcan en un proceso de consulta que produce un resultado que respeta los principios o valores constitucionales y las previsiones legales aplicables.

En tercer término, esta Sala Superior estima necesario hacer explícita una consideración en el sentido de que, en ocasiones, en la argumentación de los tribunales constitucionales o tribunales límite, como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cuanto tribunal del orden constitucional o total, es pertinente invocar razones jurídicas finalistas que pueden apoyar a una decisión jurisdiccional que previsiblemente contribuirá a un fin valioso.[[31]](#footnote-31)

En esa línea, en casos como el presente, en donde como se explicó, subyace un serio conflicto en el interior del municipio, es preciso no sólo resolver conflictos sino también evitarlos, a fin de que se realicen los procesos de consulta y las asambleas electivas de renovación de las autoridades municipales en condiciones que preserven el tejido social comunitario y el orden constitucional.

Acorde con lo anterior, este órgano jurisdiccional electoral considera que, en forma opuesta a lo sostenido por la parte actora, no se cometieron irregularidades invalidantes en el procedimiento de consulta impugnado, sino que el mismo se desarrolló con regularidad, de conformidad con los parámetros controlantes aplicables, en particular el principio de universalidad.

Específicamente, de las constancias de autos esta Sala Superior advierte que el procedimiento de consulta se desarrolló con un criterio incluyente, en un ambiente de libertad y en ausencia de hechos de coerción o violentos u otros actos que pudieran llevar a la conclusión opuesta, particularmente que se haya impedido participar a las ciudadanas o ciudadanos del Municipio o a alguna de pueblos o comunidades, o se hayan vulnerado en cualquier forma los derechos humanos de participación política, como se expondrá a continuación.

En efecto, en el marco de lo establecido por esta Sala Superior en el mencionado juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-3188/2012, en las reuniones de trabajo llevadas a cabo por la Dirección Ejecutiva del Instituto estuvieron representadas todas las comunidades que conforman el Municipio de San Juan Ozolotepec, con el objeto de que se fijaran los términos y condiciones bajo los cuales se llevaría a cabo la consulta y con ello garantizar la participación de toda la comunidad.

Al respecto, es preciso señalar que en las reuniones de trabajo convocadas por la autoridad responsable participaron representantes de la Cabecera Municipal y de las agencias municipales de Santa Catarina Xanaguia y de Santa Cruz Lovene e, inclusive, representantes de la Ranchería de San Bartolo Lapaguia, perteneciente a la Agencia Municipal de Santiago Lapaguia.

Opuestamente a lo afirmado por la parte actora en el sentido de que el Instituto incurre en “desacato” a lo determinado por esta Sala Superior, al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-3188/2012, en el que, entre otros aspectos, se vinculó a dicha autoridad a coadyuvar, en todo momento, con las autoridades municipales del Ayuntamiento de San Juan Ozolotepec Miahautlán, Oaxaca, este órgano jurisdiccional advierte que la autoridad administrativa electoral sí llevó a cabo diversos actos en ese sentido, en acatamiento de las providencias establecidas en dicha ejecutoria. Fue así que particularmente, a petición expresa del Presidente Municipal de San Juan Ozolotepec y con el acuerdo de las diversas localidades, intervino en el conflicto para instrumentar una *consulta ciudadana*.

En efecto, entre tales providencias decretadas por esta Sala Superior, como se recordará, se vinculó al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para que, en uso de sus atribuciones, coadyuvara de forma imparcial con el Presidente Municipal, para llevar a cabo el proceso electoral para la elección de autoridades para el trienio 2014-2016, a fin de mantener debidamente el **orden constitucional**, proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos pertenecientes a la comunidad de San Juan Ozolotepec, Miahuatlán, Oaxaca, y velar por la observancia de los preceptos democráticos de toda elección.

En el caso, en autos consta que la autoridad administrativa electoral local llevó a cabo diversos actos relacionados con la elección de concejales para el trienio 2014-2016, esto es así, pues, como se precisó en esta ejecutoria, los días diez, diecisiete y veinticuatro de septiembre del año en curso, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Electoral local celebró diversas reuniones de trabajo a efecto de analizar cuestiones relacionadas con la elección de concejales para el trienio 2014-2016.

Al respecto, destaca, como se relató, la sesión de trabajo de veinticuatro de septiembre de dos mil trece, entre el personal de la Dirección Ejecutiva y la autoridad municipal de San Juan Ozolotepec, ciudadanos comisionados por el propio Municipio, ciudadanos comisionados y autoridad de la Agencia de Santa Catarina Xanaguia, la Agencia de San Andrés Lovene y ciudadanos de San Bartolo Lapaguia, en la que se acordó, entre otros aspectos, que la consulta la realizaría la Dirección Ejecutiva, mediante la instalación de una mesa receptora de votos en cada comunidad.

En lo tocante a los agravios en relación con el cuestionario empleado en la consulta, a juicio de esta Sala Superior, las preguntas, en el contexto de la consulta, son razonablemente claras y precisas; no son ambiguas y resultan pertinentes en relación con las principales cuestiones debatidas respecto a la renovación de las autoridades municipales en Municipio de San Juan Ozolotepec.

En ese sentido, se estima que, opuestamente a lo aducido por la parte actora, las preguntas formuladas en la consulta no son tendenciosas, ya que no están cargadas en favor de una determinada opción, concretamente por el régimen de partidos políticos, habida cuenta que no presuponen que el escoger alguna opción, por ejemplo, urnas y casillas, signifique o entrañe la adopción de dicho régimen.

Al respecto, si bien en las preguntas 1 y 2 aparecen las opciones de planillas, así como de urnas y boletas, respectivamente, frente a otras opciones, como las listas de personas (pregunta 1) o de pizarrón o a mano alzada (pregunta 2), lo cierto es que tales modalidades de elección y de emisión del voto no son necesariamente incompatibles con el régimen de sistemas normativos internos.

Así, por ejemplo, en la pasada elección extraordinaria de autoridades municipales del Municipio de San Juan Ozolotepec, las elecciones se llevaron a cabo mediante planillas y se usaron urnas y boletas, siendo que se celebraron bajo el régimen de sistemas normativos internos.

En todo caso, se considera que las alternativas planteadas en la consulta forman parte de los términos de las cuestiones debatidas en el referido Municipio, según se aprecia de autos.

Lo anterior es así, toda vez que, como se ha narrado, las principales diferencias en el municipio se refieren a los procedimientos electivos, la utilización de urnas o boletas, pizarrón o el voto a mano alzada, así como los lugares en que se deben realizar las asambleas electivas, como se desprende del rechazo de la propuesta de convocatoria emitida por el Presidente Municipal.

En tal virtud, contrariamente a lo sostenido por la parte actora, las preguntas planteadas en la consulta no atentan contra la libre determinación de los pueblos, puesto que, como se ha señalado, la consulta se circunscribió a definir los procedimientos para elegir al presidente municipal y demás integrantes del cabildo, los procedimientos para emitir el voto y los lugares para realizar las asambleas electivas respectivas, sin que ello implique una modificación del régimen vigente de sistemas normativos internos, en el entendido de que el régimen puede ser cambiado por determinación de los pueblos y comunidades indígenas que conforman el Municipio de San Juan Ozolotepec, en ejercicio de su autodeterminación reconocida constitucionalmente, mediante los procedimientos y con la oportunidad que establece el código electoral local.

Por lo tanto, no puede estimarse que la consulta y sus resultados haya sido impuesta a la comunidad indígena del Municipio de San Juan Ozolotepec, sino que derivó de un procedimiento regular y un acuerdo mayoritario expresado por las ciudadanas y ciudadanos del municipio, es decir, son las reglas convenidas con la comunidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2°, apartado A, fracción III, de la Constitución federal; 3°, 4° y 5° de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, así como 5° y 8°, párrafo 2, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes.

Esta Sala Superior advierte que los indígenas y sus pueblos no deben sufrir una asimilación forzada o la destrucción de su cultura, ni deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados. En consecuencia, se han establecido mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos o personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica, así como para la salvaguarda de la persona, instituciones, bienes, trabajo, cultura y medio ambiente, sin que dichas medidas sean contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados [artículos 8°, párrafos 1 y 2, inciso a), de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, así como 3°, párrafo 2, y 4°, párrafos 1 y 2, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y tribales en Países Independientes].

Acorde con lo anterior, no resultante procedente acordar la petición de la parte actora en el sentido de que esta Sala Superior se pronuncie sobre la propuesta de convocatoria que la Asamblea Comunitaria de la Cabecera Municipal aprobó sobre los procedimientos y los lugares para realizar las asambleas electivas de las autoridades municipales, ya que son los temas objeto de la consulta impugnada.

En cuanto al agravio relativo a que la consulta se realizó mediante boletas impresas en español, sin considerar la lengua y los índices de analfabetismo del municipio, este órgano jurisdiccional federal considera que no asiste razón a la parte actora, por lo siguiente.

En primer término, en lo tocante a que la consulta se realizó mediante boletas impresas en español, es preciso señalar que en el Municipio de San Juan Ozolotepec, si bien, de la población de tres años y más, 2024 habitantes hablan lengua indígena y 1877 habitantes habla español, la mayoría habla lengua indígena y español, pues sólo 35 habitantes no hablan español, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.[[32]](#footnote-32) De forma que si bien lo óptimo es que la consulta debiera realizarse también en lengua indígena, la falta de una traducción o interpretación, por sí misma, no es suficiente para invalidar la consulta.

**Lo anterior, en el entendido de que —esta Sala Superior estima preciso señalar— el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca deberá tomar todas las providencias necesarias para que en las asambleas electivas que se celebren para la renovación de las autoridades municipales, para maximizar el efecto de la información previa y el conocimiento de la ciudadanía comunitaria, los datos y la información respectiva, incluida la convocatoria, se difundirán en español y en la o las lenguas indígenas que se hablen en el municipio o comunidad de que se trate.**

De igual forma, hay que señalar que en el mismo municipio, la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años en 2010 fue de 93.2%; en las mujeres fue de 92.6% y en los hombres fue de 93.9%, según el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.[[33]](#footnote-33)

En lo concerniente al agravio relativo a que la Dirección Ejecutiva responsable no se apegó a los Lineamientos, esta Sala Superior estima que no asiste razón a la parte actora, por lo siguiente:

Los agravios hechos valer se dirigen a mostrar, fundamentalmente, que la Dirección Ejecutiva no observó los Lineamientos en relación con los siguientes aspectos: definición del tipo de consulta (artículo 28); etapas de la consulta (artículo 30); programa de la consulta (artículo 31); información previa (artículo 32); convocatoria (artículo 33); realización de la consulta (artículo 34) y resultados (artículo 36).

Al respecto, en primer término, esta Sala Superior estima preciso señalar que los invocados Lineamientos tienen un estatus normativo reglamentario al tener su fuente inmediata de validez en el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca (artículo 264, párrafo 3) y tienen el carácter de orden público (artículo 1.1).

En segundo término, dichos Lineamientos tienen un carácter instrumental, para evitar y resolver conflictos, según se advierte de lo dispuesto en los artículos 1.2 y 27.2 de los invocados Lineamientos.

En tercer término, si bien la autoridad administrativa no siguió, en efecto, puntualmente los Lineamientos, lo cierto es que, como se indicó, primero, la autoridad responsable ciñó su actuación en el marco de lo determinado por esta Sala Superior al resolver la ejecutoria recaída al expediente SUP-JDC-3188/2012; al efecto conviene tener presente que en la misma se determinó, entre otros aspectos, lo siguiente (énfasis añadido):

En consecuencia, se exhorta a las autoridades municipales del Ayuntamiento de San Juan Ozolotepec Miahuatlán, Oaxaca para que, en ejercicio de las atribuciones que tiene legalmente conferidas, realice todas las acciones tendientes a que en el proceso electoral para la elección de autoridades para el trienio dos mil catorce-dos mil dieciséis, se respeten los derechos político-electorales constitucionales de todos los ciudadanos pertenecientes a dicha comunidad, en los siguientes términos:

Se permita la participación a todos los ciudadanos hombres y mujeres mayores de dieciocho años, vecinos con residencia de por lo menos dos años en el referido Municipio, en términos de la Constitución Federal, Constitución local y leyes de la materia, en las elecciones a celebrarse para elegir autoridades municipales para el trienio dos mil catorce-dos mil dieciséis.

En todo momento se deberán respetar los usos y costumbres de la comunidad, privilegiando la participación de todos los ciudadanos, hombres y mujeres en igualdad de circunstancias.

En uso de sus atribuciones, podrá solicitar la intervención de las autoridades municipales o estatales, con la finalidad de salvaguardar el orden y la paz social en San Juan Ozolotepec Miahuatlán, Oaxaca.

Por lo que, respecta al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se le vincula para que en uso de sus atribuciones coadyuve de forma imparcial con el Presidente Municipal de San Juan Ozolotepec Miahuatlán, Oaxaca a la consecución de las obligaciones aquí señaladas.

En ese sentido —en el contexto apuntado de conflictividad y falta de acuerdos en el interior del Municipio que da origen al presente medio impugnativo—, si bien no se siguieron rigurosamente todas las etapas procedimentales establecidas en el artículo 30 de los Lineamientos, ello no es suficiente, por sí mismo, para invalidar la consulta, toda vez que la autoridad responsable intervino, a petición expresa del Presidente Municipal de San Juan Ozolotepec,[[34]](#footnote-34) para instrumentar la consulta, no sin antes convocar y celebrar diversas reuniones de trabajo en donde no sólo estuvieron representantes de las cuatro localidades que conforman el municipio, sino que los mismos acordaron los términos y condiciones de la consulta, esto es, el objeto de la consulta, que la instrumentaría la propia autoridad, fecha y lugares de la misma, así como lugar y fecha en que se darían a conocer sus resultados. De igual forma, no está demostrado en autos que la autoridad responsable, al instrumentar la consulta, se haya conducido con parcialidad, sino que se considera que, al intervenir como mediador, elaborar el cuestionario y formular el cómputo respectivo actuó en forma imparcial, considerando que la imparcialidad consiste que, en el ejercicio de sus funciones, las autoridades electorales deben evitar irregularidades, desviaciones o proclividad partidista o hacia alguna de las partes en conflicto.[[35]](#footnote-35)

De igual forma, opuestamente a lo sostenido por la parte actora, el proceso de consulta no dejó de observar los criterios sustentados por esta Sala Superior, en particular los establecidos al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-9167/2011 (*Caso consulta comunidad indígena de Cherán*), así como los contenidos en la tesis de rubro: USOS Y COSTUMBRES. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS CONSULTAS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PARA CELEBRAR ELECCIONES.[[36]](#footnote-36)

Lo anterior es así, porque el resultado de la consulta surgió de la propia ciudadanía comunitaria para acordar los procedimientos para la elección de las autoridades municipales (principio endógeno); el desarrollo de la consulta se realizó, como se indicó, en un clima de libertad, sin actos de coerción, y sin injerencias externas (principio de libertad); durante la consulta no está acreditada la realización de actos de violencia (pacífico); las localidades, a través de sus representantes en las sesiones de trabajo convocadas por la autoridad responsable, estuvieron informadas del objeto de la consulta (principio de información); el proceso de consulta fue producto de un ejercicio con un significativo grado de participación (49.60%) en el que los resultados fueron respaldados mayoritariamente, de acuerdo con el criterio de mayoría (principio democrático); no está acreditado en autos que ciudadanas o ciudadanos de las diversas comunidades hayan sido excluidos o marginados del proceso de consulta (principio equitativo); el proceso de consulta fue a petición de parte para resolver las diferencias sobre los procedimientos por seguirse en la renovación de las autoridades municipales (socialmente responsable); y los procedimientos acordados en la consulta serán los que se utilicen en la elección mencionada (principio de autogestión).

Aunado a lo anterior, la consulta se realizó previamente a la renovación de las autoridades municipales, la cual se realizará bajo el régimen de sistemas internos; se realizó de buena fe, para propiciar consensos en la solución de los desacuerdos comunitarios sobre los procedimientos a seguir en la elección, y fue adecuada, al participar los representantes de las localidades del municipio.

Por consiguiente, el hecho de que la autoridad responsable no haya, en este caso particular, seguido los extremos de los Lineamientos no resulta suficiente para revocar el acto impugnado, puntualizando que, de haberse celebrado la consulta impugnada en condiciones diferentes, por ejemplo, en violación de principios o valores constitucionales o de los principios que debe regir toda consulta, de acuerdo con los criterios de esta Sala Superior, o bien, incumpliendo las obligaciones impuestas en la ejecutoria del juicio SUP-JDC-3188/2012, lo que no es el caso, la conclusión sería diferente.

La consulta misma constituyó un ejercicio con un grado relativamente alto de participación de los miembros del Municipio de San Juan Ozolotepec, en el entendido de que, como se indicó, la consulta se desarrolló en un ambiente de libertad y en ausencia de hechos violentos u otros actos, como impedir la participación de ciudadanos del Municipio, en la inteligencia de que si no se siguieron rigurosamente ciertas y determinadas reglas de los Lineamientos, no está acreditado que la celebración de la consulta haya trastocado principios o valores constitucionales, entre ellos, destacadamente, los derechos humanos de participación política de la parte actora.

En efecto, en las actas respectivas no se consigna incidente alguno sobre irregularidades cometidas durante el proceso de consulta.

Asimismo, en razón de que, en la consulta, según se advierte del acta de cómputo respectiva,[[37]](#footnote-37) las y los ciudadanos manifestaron su preferencia por las distintas alternativas planteadas —si bien, al final, los resultados obtenidos se establecieron en función de las alternativas con mayor número de votos—, se puede advertir que la votación fue realizada de manera libre (lo cual podría ponerse en duda, si, por ejemplo, existieran votaciones totales unánimes en favor de una sola alternativa, lo que no es el caso, porque va contra las reglas de la experiencia sobre lo que ocurre ordinariamente en los procesos democráticos).

En lo concerniente al grado de participación, si bien en la Agencia Municipal de Santiago Lapaguia ningún ciudadano acudió a la consulta, no obstante que la mesa de consulta se instaló y estuvo abierta por cinco horas (cuestión que se abordará más adelante), a juicio de esta Sala Superior, el proceso de consulta bajo escrutinio —además de ser un ejercicio inédito— registró, **en general**, una participación mayoritaria y relativamente significativa.

En efecto, el grado de participación de los ciudadanos se muestra en el cuadro siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| *Localidad* | *Grado de participación en términos relativos, a partir de la lista nominal* |
| Cabecera Municipal | 81.99% |
| Santa Catarina Xanaguia | 69.28% |
| Santiago Lapaguia | 0 (cero) |
| San Andrés Lovene | 28.48% |

En total la participación en la consulta fue de 837 ciudadanas y ciudadanos, de un universo de 1760 ciudadanas y ciudadanos conforme a la lista nominal empleada, lo que representa una participación del **49.60%**, datos que, como se anticipó, además de constar en documentales de carácter público, no están controvertidos en cuanto a su contenido, razón por la cual se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 14, párrafo 4, y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Para tener una referencia del grado de participación en la consulta ahora impugnada, cabe señalar que, en la pasada elección extraordinaria para renovación de autoridades municipales en el Municipio de San Juan Ozolotepec (cuya jornada electoral fue el seis de marzo de dos mil once), en la Cabecera Municipal votaron 325 ciudadanos, en las agencias municipales de San Andrés Lovene votaron 69, en Santiago Lapaguia 90 y en Santa Catarina Xanaguia 256.

En lo concerniente al motivo de disenso consistente en que en la consulta no se alcanzó la mayoría calificada de las dos terceras partes de la ciudadanía comunitaria, el mismo es infundado, como se razona a continuación.

Si bien es cierto que, de conformidad con el artículo 34.V de los invocados Lineamientos, cuando se trate de modificaciones sustantivas o que puedan poner en riesgo la continuidad del pueblo indígena de que se trate, las decisiones deben privilegiar el consenso y la aprobación por las dos partes de la ciudadanía comunitaria o de los integrantes de la institución comunitaria que sea competente para decidir, también es verdad que, en el caso, primero, el alcance de la consulta no implicó modificaciones sustantivas al sistema normativo interno del Municipio de San Juan Ozolotepec, en cuanto que se mantiene vigente dicho sistema para la renovación de las autoridades municipales en el presente proceso electoral, sino que se circunscribió a los aspectos instrumentales o procedimentales para llevar a cabo las asambleas electivas respectivas y, en tal virtud, los resultados de la consulta complementan o implementan el sistema normativo interno vigente, razón por la cual no es exigible una mayoría calificada como lo pretende la parte actora, y segundo, aunque ciertamente debe procurarse el consenso legítimo —y no el simplemente fáctico— en la toma de decisiones comunitarias, la consulta alcanzó un significativo grado de participación de la ciudadanía comunitaria y, por tanto, de **legitimidad** que no puede ser soslayado por este órgano jurisdiccional federal.

En efecto, más allá del grado de participación general en la consulta que fue del **49.60%**, las alternativas escogidas tuvieron el siguiente respaldo de las ciudadanas y ciudadanos consultados:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Alternativa preferida* | *Votos emitidos (sin tomar en cuenta los votos nulos)* | *Porcentaje en relación con el número de votos para cada una de las preguntas* |
| Planillas [alternativa b)] | 418 | **49.44%** |
| Urnas y boletas [alternativa a)] | 418 | **49.44%** |
| Asambleas en cada comunidad [alternativa b)] | 427 | **51.01%** |

Sobre el particular, cabe señalar que esta Sala Superior determinó, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-9167/2011, que las consultas a los pueblos indígenas en las cuestiones que les afecten debe observarse, entre otros, el principio democrático conforme con el cual en la consulta se deben establecer los mecanismos correspondiente a efecto que puedan participar el mayor número de integrantes de la comunidad; que en la adopción de las resoluciones se aplique el **criterio de mayoría** y se respeten en todo momento los derechos humanos.

Por lo tanto, como se apuntó, la exigencia de que en la consulta se obtenga una mayoría calificada de las dos terceras partes, para ser válida, resulta, en el caso, injustificada; de ahí lo infundado del agravio.

En lo referente al planteamiento de la parte actora en el sentido de que no existió una amplia difusión de la celebración de la consulta, lo que generó que la Agencia Municipal de Santiago Lapaguia y su Ranchería San Bartolo Lapaguia no participaran, razón por la cual sostiene que el resultado no puede ser válido bajo ninguna circunstancia, el argumento, a juicio de este órgano jurisdiccional, es infundado.

En efecto, en autos existen elementos probatorios de los que se obtiene que la parte actora, que incluye a un ciudadano que se ostenta como “representante municipal” de la ranchería de San Bartolo Lapaguia, no sólo tenían conocimiento de que se estaba llevando a cabo un proceso de consulta sino que reconocen que las y los ciudadanos que participaron en la consulta se enteraron por los avisos que los representantes hicieron mediante altavoz, aunque también señalan que nunca se les proporcionó, con exactitud, lugar, fecha y hora de la realización de la consulta.

Al respecto, esta Sala Superior estima que los avisos por portavoz efectuados acerca de la consulta y la amplia participación en la misma permiten establecer que las ciudadanas y los ciudadanos de las comunidades que conforman el Municipio de San Juan Ozolotepec se enteraron del proceso de consulta y de los temas que serían sometidos a la ciudadanía comunitaria, ya que constituye una máxima de la experiencia, invocable en términos del artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que, generalmente, cuando hay una significativa participación en una consulta, se puede inferir que quienes participaron tenían conocimiento de la celebración de la misma, ya sea porque están ellos mismos atentos de los asuntos públicos de la comunidad, o bien se enteraron por alguna otra forma.

En el caso de la mesa de consulta instalada en la Agencia Municipal de Santiago Lapaguia, como se indicó, ningún ciudadano acudió a la consulta, no obstante en autos se demuestran los siguientes extremos:

* Ciudadanos de San Bartolo Lapaguia estuvieron presentes en la reunión de trabajo de veinticuatro de septiembre de dos mil trece en la que se acordaron los términos y condiciones de la consulta;
* La propia parte actora reconoce que se dio aviso por portavoz del proceso de consulta;
* La mesa de consulta se instaló y estuvo abierta por cinco horas, cerrándose al no haber “electores”, según se advierte del acta consulta respectiva, cuya copia certificada obra en autos[[38]](#footnote-38) y a la que se le da valor probatorio pleno, en razón de ser un documento público.
* Acerca de dicha mesa de consulta, es preciso señalar que lo ordinario es que se instalen en lugares visibles o públicos, como escuelas u oficinas públicas, similarmente a como ocurre tratándose de las mesas directivas de casilla (por ejemplo, así lo dispone el artículo 241, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales[[39]](#footnote-39), así como el artículo 178 del código electoral local[[40]](#footnote-40)). El acta de consulta de la localidad no permite advertir el lugar exacto en que se instaló, aunque no se consigna ningún incidente sobre su ubicación o sobre cualquier otra cuestión, siendo que estuvo presente durante todo el proceso de consulta el ciudadano Antero Martínez quien figura como Agente Municipal de Santiago Lapaguia. Consecuentemente, dado que no hay contraindicios o elementos probatorios en contra, puede presumirse válidamente que la mesa de consulta se instaló en un sitio públicamente visible y no en un lugar clandestino, lo que refuerza el carácter abierto y, por lo tanto, democrático de la consulta.

Finalmente, sobre el hecho de que no haya participado nadie en la mesa de consulta instalada en la Agencia de Santiago Lapaguia, ni aun el referido ciudadano Antero Martínez, quien actuó como autoridad auxiliar de la consulta, ello no supone, por sí mismo, una irregularidad sino que, como se ha mostrado, en cuanto a la calidad democrática de la consulta, la misma se desarrolló con regularidad constitucional, en un ambiente de libertad, es decir, sin coerción o hechos violentos, y con la información previa y acuerdo de las distintas comunidades que conforman el municipio, así como la difusión de la fecha, lugar y objeto de la consulta. En el aspecto cuantitativo, se advierte que esa situación de no participación representa, en términos relativos, que no participó el **19.60%** de los posibles consultantes, suponiendo que hubiera participado la totalidad de la ciudadanía incluida en la lista nominal, tomando como universo el número total de los ciudadanos que integran la lista nominal respectiva.

En las condiciones relatadas, tomando en cuenta que la consulta debe ser un mecanismo realizado de **buena fe** y **corresponsabilidad**, pues corresponde también a la ciudadanía comunitaria participar en la definición de los procedimientos que deben seguirse en la renovación de las autoridades municipales para el trienio 2014-2016, así como de manera voluntaria y sin coerción de ningún tipo, la abstención de la ciudadanía de la Agencia Municipal no puede invalidar la consulta y sus resultados.

En congruencia con lo anterior, la renovación de las autoridades municipales para el trienio 2014-2016 en el Municipio de San Juan Ozolotepec deberá realizarse conforme a los resultados de la consulta que ahora se confirma y bajo el régimen de sistemas normativos internos, **así como estar también a lo resuelto por esta Sala Superior en la referida ejecutoria recaída en el expediente SUP-JDC-3188/2012, particularmente todas y cada una de las providencias decretadas**, entre otras, las siguientes:

Aun cuando las convocatorias para renovar a las autoridades municipales del referido Municipio están dirigidas a las y los integrantes de la citada comunidad, es claro que existe cierta desigualdad en la participación política de mujeres en relación con los hombres de la comunidad, por lo que esta Sala Superior advirtió que, efectivamente, como lo informaron las autoridades municipales, dichas convocatorias deberán:

* + - Realizarse en el ámbito geográfico que corresponde al ayuntamiento y difundirse, tanto por medio de carteles que se coloquen en lugares visibles en el ayuntamiento y perifoneo, así como aquellas otras que decida la autoridad comunitaria correspondiente, siempre que se asegure su adecuada y amplia difusión en la cabecera y agencias municipales, así como toda concentración poblacional que comprenda el municipio, y
    - Dirigirse a todos los integrantes de la comunidad (tanto mujeres como hombres) de la cabecera municipal y agencias que, según el derecho indígena de la comunidad, tengan derecho a participar.

Con la aclaración, como también se estableció en la invocada ejecutoria, que deberán observarse los derechos humanos reconocidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de igualdad, el principio de universalidad del sufragio y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres, conforme al artículo 2º, apartado A, fracciones II y III, de la invocada Constitución Federal.

1. **Conclusión**

Ante lo infundado de los motivos de impugnación, procede confirmar la consulta verificada el cinco de octubre de dos mil trece en el Municipio de San Juan Ozolotepec, Miahuatlán, Oaxaca, así como el acta de cómputo de la misma de ocho de octubre del mismo año.

Por lo expuesto y fundado, se

**R E S U E L V E**

**ÚNICO**. Se **confirma**, en la materia de la impugnación, la consulta controvertida y sus resultados consignados en el acta de cómputo respectiva.

**NOTIFÍQUESE;** por **correo certificado** a la parte actora y a los terceros interesados, en el domicilio que para tal efecto señalaron en autos; **por oficio**, al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por conducto de su Presidente; a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del citado Instituto, y al Presidente Municipal de San Juan Ozolotepec, Miahuatlán, Oaxaca; y **por estrados** a los demás interesados; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, párrafos 1 y 3; 5, párrafo 1, 27, 28, 29 y 84, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 102, 103 y 106, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Devuélvanse los documentos que correspondan, previa razón que de ello se asiente en los autos del presente juicio y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por **unanimidad** de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

|  |  |
| --- | --- |
| **MAGISTRADO PRESIDENTE**  **JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS** | |
| **MAGISTRADA**  **MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA** | **MAGISTRADO**  **CONSTANCIO CARRASCO**  **DAZA** |
| **MAGISTRADO**  **FLAVIO GALVÁN RIVERA** | **MAGISTRADO**  **MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA** |
| **MAGISTRADO**  **SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR** | **MAGISTRADO**  **PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ** |
| **SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS**  **FELIPE DE LA MATA PIZAÑA** | |

### [**SENTENCIA SUP-JDC-1181/2013**](http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01181-2013.htm)

**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.**

**EXPEDIENTE:** SUP-JDC-1181/2013.

**ACTORES:** JOSÉ ARAGÓN JIMÉNEZ Y OTROS.

**AUTORIDAD RESPONSABLE:** TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE OAXACA.

**MAGISTRADO PONENTE:** PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ.

**SECRETARIA:** AURORA ROJAS BONILLA.

México, Distrito Federal, a veinticuatro de diciembre de dos mil terce.

**VISTOS** para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por José Aragón Jiménez Héctor Martínez Contreras, Juan Manuel Ibarra y Enrique Martínez, en su carácter de integrantes del comité representativo para tratar asuntos relacionados con el proceso electoral para el periodo 2014-2016, de la comunidad indígena de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, reconocidos en la asamblea extraordinaria de veintiuno de octubre último, para controvertir la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil trece, emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca[[41]](#footnote-41), *en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos*, tramitado con el número de expediente JDCI/104/2013, y

**R E S U L T A N D O**

**I. Antecedentes.** De la narración de hechos que los actores hacen en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierten los siguientes antecedentes:

**a) Acuerdo del Consejo General local.** Mediante acuerdo CG-SNI-1/2012, de diecisiete de noviembre de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca[[42]](#footnote-42) aprobó el Catálogo General de los Municipios que elegirán a sus autoridades mediante el Régimen de Sistemas Normativos Internos. En dicho catálogo se encuentra incluido el Municipio de San Pablo Coatlán, con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, debido a que no hubo solicitud de cambio de régimen.

**b) Primera reunión de trabajo.** El treinta y uno de octubre de dos mil trece se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que estuvieron presentes, el Presidente Municipal, el Regidor de Seguridad, el Síndico y el Secretario Municipal, además de autoridades de las Agencias Municipales y el Coordinador de la mesa de diálogo de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca[[43]](#footnote-43).

En dicha reunión uno de los comisionados del municipio de San Pablo Coatlán (ahora actor) destacó que apenas se estaban poniendo de acuerdo de la manera de hacer las elecciones en el municipio, en tanto que algunas agencias se estaban organizando por planillas, lo que desde su punto de vista violentaba los usos y costumbres, a lo que el Regidor de Seguridad contestó que todo dependía del voto, para la planilla que le favoreciera.

**c) Resultados de la Asamblea Municipal.** Previa a la convocatoria respectiva realizada por el Presidente Municipal de la referida localidad, para determinar el procedimiento de elección para los concejales de la municipalidad en mención, el diecisiete de noviembre de dos mil trece, se llevó a cabo la Asamblea respectiva, en la que conforme al consenso de los ciudadanos asistentes, la elección se realizaría por usos y costumbres, debido a que ciento cuarenta y seis ciudadanos se pronunciaron en favor de ese sistema, en tanto que cuarenta y dos, por el de planillas.

**d) Reunión de trabajo.** El diecinueve de noviembre de dos mil trece, se llevó a cabo una reunión de trabajo en las oficinas que ocupan el Palacio Municipal de San Pablo Coatlán, con la coordinación de la Dirección Ejecutiva, el Presidente Municipal, los Comisionados de las Agencias Municipales y ciudadanos representantes de la cabecera municipal, en la cual la referida Dirección Ejecutiva, acordó lo siguiente:

**1.- Acuerdos escritos de la reunión.** *“El grupo de ciudadanos de la cabecera elaborará por escrito su forma de cómo se eligen a sus autoridades municipales y propondrán la participación de las agencias en ese método. Las agencias municipales elaborarán su propuesta de cómo participar en la elección de autoridades municipales y de cómo se incorpora a los de la cabecera municipal”*.

**2.- Acuerdo verbal de la reunión.** Los actores refieren que la Dirección Ejecutiva citada, reiteró sin plasmarlo en los acuerdos que; la cabecera municipal propondrá una propuesta de cómo darle oportunidad a las agencias de participar, y que las agencias llevaran otra propuesta de su planilla y como integrarán a la cabecera en la planilla. Asimismo que la coordinación de la Dirección Ejecutiva, como mediadora, valoraría las dos propuestas señaladas y mediaría sobre la elección.

No obstante, los actores aducen que no se ha consumando la asamblea electiva de los concejales, y señalan que ignoran el porqué el Presidente Municipal no ha convocado a asamblea general comunitaria para llevar a cabo la elección, cuando afirman, debió realizarse en el mes de septiembre, que por costumbre se ha hecho.

**e) Juicio local.** Elveintitrés de noviembre de dos mil trece, José Aragón Jiménez, Héctor Martínez Contreras, Juan Manuel Ibarra y Enrique Martínez promovieron juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano en el régimen de sistemas normativos internos del estado de Oaxaca.

En dicha demanda, entre otras cuestiones, impugnaron los referidos acuerdos tomados el diecinueve de noviembre último, relacionados con la elección de la autoridad municipal de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca.

**f) Resolución impugnada.** El veintisiete de noviembre siguiente, el Tribunal Electoral de Oaxaca determinó la improcedencia del juicio y ordenó remitir la demanda al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de esa entidad, para que llevara a cabo una consulta a la asamblea comunitaria de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca a fin de que se determinen los procedimientos a seguir en la elección municipal.

El veintinueve de noviembre, se notificó a los actores la sentencia de forma personal.

**II. Juicio de revisión constitucional electoral.** El tres de diciembre siguiente,los actores promovieron juicio de revisión constitucional electoral en contra de la citada resolución del Tribunal local.

Dicho juicio fue recibido en la Sala Regional Xalapa el nueve de diciembre siguiente y de él derivo la integración del expediente SX-JRC-346/2013.

**III. Cambio de vía.** El doce de diciembre de este año, la Sala Regional determinó reencauzar la demanda a juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

**IV. Acuerdo de incompetencia de la Sala Regional**. El dieciséis de diciembre del presente año, la citada Sala Regional mediante acuerdo de sala declaró su incompetencia para conocer del juicio ciudadano promovido por José Aragón Jiménez y otros, por lo que remitió los autos del asunto a esta Sala Superior, a fin de determinar lo que en derecho proceda.

**V. Integración y turno del expediente.** Mediante acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil trece, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior ordenó la integración del juicio ciudadano que se resuelve, así como que dicho expediente fuera turnado a la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López, para los efectos previstos por el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

**VI. Radicación**. En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó el medio de impugnación al rubro indicado, para efecto de acordar lo conducente.

**VII.** **Acuerdo de competencia.** Mediante acuerdo plenario de esta misma fecha, esta Sala Superior asumió competencia para conocer y resolver el presente medio de impugnación.

**VIII. Información del Presidente Municipal.** Por oficio recibido ante la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el veinte de diciembre último, el Presidente Municipal de San Pablo Coatlán informó que en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal electoral local, el ocho de diciembre anterior se llevó a cabo la consulta a la Asamblea comunitaria a fin de determinar el procedimiento para llevar a cabo la elección de concejales, la cual se realizó por planillas el día quince siguiente.

**IX. Admisión y cierre.** En su oportunidad, el Magistrado Instructor admitió la demanda, por considerar satisfechos todos los requisitos de procedencia y, al no existir trámite pendiente que desahogar, declaró cerrada la instrucción, dejando el asunto en estad de resolución; y

**C O N S I D E R A N D O S:**

**PRIMERO. *Competencia.*** Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio impugnativo, conforme a lo previsto en los artículos 99, párrafos segundo y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 79, párrafo 1; 80, párrafo 1, inciso f) y 83, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano, promovido por diversos ciudadanos, en su carácter de integrantes del comité representativo (para tratar asuntos relacionados con el proceso electoral para el periodo 2014-2016), de la comunidad indígena de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, toda vez que la controversia planteada involucra los procedimientos para determinar las bases para elegir a los integrantes del referido ayuntamiento, así como la realización de una consulta al interior de la comunidad, cuya materia no está expresamente prevista para el conocimiento de alguna de las Salas Regionales de este Tribunal Electoral, es competencia de esta Sala Superior.

**SEGUNDO. *Causa de improcedencia.*** Por oficio recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el veinte de diciembre del presente año, el Presidente Municipal de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, Lorenzo Espinoza Martínez (autoridad vinculada, en su caso, a los efectos de la presente ejecutoria) solicitó que se desechara la demanda en virtud de que el presente juicio había quedado sin materia.

Lo anterior, porque conforme a las constancias de autos que anexó a su oficio, informó que en cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Electoral local en el expediente JDCI/104/2013, el ocho de diciembre de este año, se llevó a cabo la consulta de las seis comunidades que conforman el municipio, en la que se obtuvo como resultado que 892 ciudadanos de la lista nominal votaron a favor de que en la elección de concejales participaran todos los ciudadanos del municipio.

Asimismo informó y remitió copia certificada del acta de asamblea general de quince de diciembre de los corrientes en la que consta que se llevó a cabo la elección con la participación de dos planillas (la planilla blanca y la planilla roja). De manera que al resultar ganadora la planilla roja los ciudadanos de la comunidad de San Pablo Coatlán, eligieron a los concejales del ayuntamiento para el periodo 2014-2016 del referido municipio.

Se desestima la causa de improcedencia señalada porque en el caso se considera que el juicio no ha quedado sin materia, contrariamente a lo señalado por el Presidente Municipal indicado.

Por principio es necesario resaltar que no obstante que la citada autoridad no es la señalada como responsable en este juicio, sí está involucrada en el cumplimiento de dicha sentencia reclamada, porque al estar relacionado el asunto con el procedimiento para una elección por el sistemas normativos internos, es claro que interviene la autoridad administrativa electoral conjuntamente con las autoridades municipales actuales, razón por la que se estima necesario dar respuesta a su petición de improcedencia del juicio.

Ahora bien, conforme a la sentencia reclamada en el presente juicio, el Tribunal Electoral local estimó improcedente el juicio ciudadano local, promovido en contra de acuerdos en las que se da intervención a las agencias municipales en el procedimiento para llevar la elección de concejales, sobre la base fundamental de que los ciudadanos actores no agotaron la instancia de la consulta a la Asamblea Comunitaria, por lo que ordenó su reenvío al Instituto Electoral local para que se llevara a cabo dicha consulta.

En tal orden de cosas, la pretensión de los actores en el presente juicio es que no se dé intervención a las agencias municipales y, por ende, que no se lleve a cabo la consulta.

Como se ve, en el asunto que se analiza, la pretensión de los actores de no consultar a la Asamblea Comunitaria subsiste, por lo que si en el caso ya se llevó a cabo dicha consulta e incluso la elección de concejales, al continuar la citada pretensión es claro que no se ha extinguido la materia del presente juicio, por lo que se hace necesario el estudio de fondo, para decidir si la determinación de la autoridad responsable sobre la improcedencia del juicio y su remisión para que se realizara la consulta comunitaria es legal o no, lo cual no puede abordarse en el momento del estudio de la procedencia del presente juicio.

De ahí que, la causa de improcedencia hecha valer por el Presidente Municipal debe ser desestimada.

**TERCERO. *Requisitos de procedencia.*** El presente medio impugnativo reúne los requisitos de forma, de procedencia y los presupuestos procesales previstos en los artículos 7º; 8º, párrafo 1; 9º, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b); 79, párrafo 1 y 80 párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se explica a continuación.

**a) Forma.** Esta Sala superior considera que ha lugar a tener por satisfechos los requisitos previstos en el artículo 9º, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que, la demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable, haciéndose constar el nombre de los actores, y su firma autógrafa, el domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para tales efectos; se identifica el acto impugnado, así como la autoridad responsable; se mencionaron los hechos en que se basa la impugnación y los agravios que consideran, les genera ese acto.

**b) Oportunidad.** Se cumple con el requisito que establece el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la sentencia reclamada se notificó el veintinueve de noviembre de dos mil trece, y la demanda se presentó el tres de diciembre siguiente, es decir, dentro del plazo legal de cuatro días.

**c) Legitimación.** Se tiene por acreditada la legitimación de la parte actora, pues el presente juicio es promovido por ciudadanos que se identifican a sí mismos como integrantes del comité representativo para tratar asuntos relacionados con el proceso electoral para el periodo 2014-2016, de la comunidad indígena de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, reconocidos en la asamblea extraordinaria de veintiuno de octubre último, y en forma individual, con el propósito de controvertir la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil trece, emitida por el Tribunal local, *en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos*, lo cual, aducen, les causa perjuicio.

Asimismo, también se tiene por acreditada la calidad de indígenas de los ciudadanos actores, dado que se autoadscriben de la comunidad indígena de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca. Lo anterior encuentra respaldo argumentativo en la tesis jurisprudencial 4/2012, de rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. LA CONCIENCIA DE IDENTIDAD ES SUFICIENTE PARA LEGITIMAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.[[44]](#footnote-44)

**d) Interés jurídico.** Los ciudadanos promoventes cuentan con interés jurídico para reclamar los actos que aducen, en atención a que, la lectura integral de su escrito inicial de demanda, permite advertir que aducen la violación a sus derechos humanos de votar y ser votados y, a la vez, hacen ver que la intervención de este órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante el dictado de una sentencia que garantice el desarrollo de las elecciones mediante el régimen de los sistemas normativos internos, restituyendo así a la parte demandante en el goce de los derechos que aducen violados.

Lo anterior, acorde con la tesis jurisprudencial 7/2002, de rubro: INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO[[45]](#footnote-45).

**e) Definitividad**. La sentencia reclamada es definitiva y firme, toda vez que no existe medio de impugnación alguno que deba ser agotado antes de acudir a esta instancia jurisdiccional federal.

En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de procedencia del presente juicio, y al advertir que no se actualiza ninguna causal de improcedencia, se procede al estudio del fondo de la controversia planteada.

**CUARTO. *Sentencia reclamada.*** En la sentencia reclamada se consideró lo siguiente:

**“…**

**SEGUNDO. Improcedencia del medio de impugnación.** Ahora bien, cabe precisar, que, de conformidad con el artículo 98 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos, es procedente cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, o a través de su representante legal, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones en los municipios y comunidades que se rigen bajo Sistemas Normativos Internos.

Por su parte, el numeral 99, apartado 1 de la citada ley adjetiva electoral, establece que el juicio sólo será procedente cuando el actor haya realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos de los Sistemas Normativos Internos, o en su caso, los que las leyes respectivas establezcan para tal efecto.

En ese orden de ideas, conforme a lo previsto en el artículo 10, sección 1, inciso c) en relación con el numeral 83, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, y el diverso 264, sección 1, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, se advierte que el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos, será procedente siempre y cuando se hayan agotado todas las instancias previas, esto es, se cumpla con el principio de definitividad.

Al respecto, este Tribunal Estatal Electoral considera que el principio de definitividad se cumple cuando se agotan previamente las instancias previas, que reúnan las dos características siguientes: a) sean las idóneas para impugnar el acto o resolución electoral de que se trate; y, b) conforme a los propios ordenamientos sean aptas para modificar, revocar o anular a éstos.

Bajo esta premisa, la exigencia de agotar las instancias previas tiene como presupuesto que éstas sean idóneas, aptas, suficientes y eficaces para alcanzar las pretensiones de los justiciables en el pleno uso y goce del derecho presuntamente violado, pues sólo de esta manera se da cumplimiento a la máxima constitucional de justicia pronta, completa y expedita, además de otorgar racionalidad a la cadena impugnativa, en tanto que, para estar en aptitud de acudir a un órgano de jurisdicción excepcional y extraordinaria, los justiciables debieron acudir previamente a medios de defensa e impugnación viables.

En concepto de este órgano jurisdiccional, el medio idóneo para controvertir los actos relativos al procedimiento para la preparación de las autoridades municipales de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, es precisamente el mecanismo interno comunitario, supervisado por la autoridad administrativa electoral local.

Por tanto, en atención a lo establecido en el artículo 10, sección 1, inciso c), en relación con el numeral 83, ambos de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, así como el artículo 264, sección 1, del código comicial local, previo a la instauración del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos, las partes deben agotar los mecanismos alternos de manejo y resolución de conflictos al interior de la comunidad, como pudiera ser el caso de la consulta directa a la asamblea general, lo anterior, como una medida de promoción, respeto y garantía de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas a decidir sobre sus normas, principios, procedimientos y prácticas tradicionales para la solución de sus conflictos, así como a elegir a sus propias autoridades.

Ahora bien, de conformidad con el principio de definitividad rector de la materia electoral, el mencionado juicio electoral sólo será procedente siempre y cuando se hayan agotado todas las instancias previas, esto es, la instancia de consulta a la asamblea general comunitaria, mediación o conciliación desarrollada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

Por lo tanto, al no ser los acuerdos de preparación para llevar a cabo la elección de autoridad municipal en San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, actos definitivos ni firmes, este Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, **declara improcedente** el presente Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos, por las razones ya expuestas en el presente considerando.

En ese sentido, al no haberse agotado la instancia administrativa a cargo del instituto electoral local, se estima procedente remitir la demanda y sus anexos a dicha instancia para que proceda a instaurar una consulta general a la colectividad respecto del procedimiento de renovación de las autoridades municipales en San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca.

**TERCERO. Envío.** Una vez precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que la pretensión sustancial de los actores, son los acuerdos celebrados el diecinueve de noviembre del año en curso, por la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en coordinación con el Presidente Municipal y Comisionados de las Agencias Municipales de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, en los que se incluye a las agencias municipales de dicho ayuntamiento, participar en la elección de las autoridades municipales.

En efecto, ya que los demandantes exponen que el día diecisiete de noviembre del año en curso, el Presidente Municipal de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, convocó a asamblea general para determinar el procedimiento de la elección de las autoridades de la cabecera municipal de dicho ayuntamiento, en el que el resultado de la consulta fue que ciento cuarenta y seis (146) ciudadanos se pronunciaron a favor del respeto de los usos y costumbres para la elección, y cuarenta y dos (42) ciudadanos a favor de la elección por planillas.

Posteriormente a ello, los inconformes manifiestan que el diecinueve de noviembre siguiente, que en una reunión de trabajo llevada a cabo por el personal de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en coordinación con el Presidente Municipal y Comisionados de las Agencias Municipales de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, acordaron, que *"un grupo: de ciudadanos de la cabecera elaborará por escrito su forma de cómo se eligen a sus autoridades municipales y propondrán la participación de las agencias en ese método"*. Así mismo, que *"las agencias municipales elaborarán su propuesta de cómo participar en la elección de autoridades municipales y de cómo se incorpora a los de la cabecera municipal"*.

Asimismo, de acuerdo con lo anterior y de las constancias que obran en autos, este Órgano Colegiado advierte que, en esencia los actores hacen valer los siguientes agravios:

1. El impedimento de votar y ser votados, así como el incumplimiento de sus procedimientos internos de elección, faltando el respeto a sus tradiciones y normas consuetudinarias para la elección de sus autoridades municipales.

2. Violación a la autodeterminación y autonomía comunitaria, en razón de que los cambios de procedimientos electorales deberán consensarse en la asamblea general comunitaria como máximo órgano de consulta.

3. La inobservancia por parte de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, de buen desarrollo y cumplimiento de la elección en dicho municipio.

4. La falta de convocatoria por parte del Presidente Municipal de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, para elegir a la autoridad municipal para el próximo periodo, así como el incumplimiento de los procedimientos internos de elección.

5. Que no es competencia de los representantes de las agencias municipales, quienes determinen los procedimientos de elección, sino la asamblea a través de la consulta.

6. Finalmente refieren que la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, no está garantizando la salvaguarda y la garantía de las prácticas democráticas del Municipio de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, regido bajo los sistemas normativos internos.

Bajo ese contexto, previo al análisis integral del escrito de demanda, se estima que el acto impugnado crea un escenario que involucra no sólo la titularidad del Municipio de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, sino también, a la comunidad respecto de las normas de derecho interno que deben seguirse para la elección del ciudadano quien deberá de fungir como presidente municipal, síndico y regidores del citado ayuntamiento; ante esta situación, se debe salvaguardar el derecho a la autodeterminación de dicha comunidad.

Por tanto, se considera que deben priorizarse mecanismos alternos de manejo y resolución de conflictos, como la mediación comunitaria a partir de la instrumentación de medidas efectivas para garantizar la eficacia de tal procedimiento, a través, de ser necesaria, de la consulta directa y la posibilidad de generar consensos en la propia comunidad, como una medida de promoción, respeto y garantía de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas a decidir sobre sus normas, principios, procedimientos y prácticas tradicionales que los rigen como parte de la solución de los conflictos intracomunitarios de conocimiento de los órganos del Estado.

Así las cosas, en el caso concreto, es al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a través de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, a quien le corresponde conocer sobre los casos de controversias que surjan respecto a la renovación o integración de los órganos de gobierno que se rigen bajo los sistemas normativos internos, órgano administrativo electoral que deberá buscar una solución al conflicto, a través de una consulta a la colectividad, para que ésta sea informada del proceso de renovación de sus autoridades, y de esta forma privilegiar la posibilidad de que los propios integrantes de la comunidad logren llegar a acuerdos que solucionen las diferencias.

Debiendo proporcionar a los integrantes de la comunidad indígena toda la información necesaria respecto de la realización del nombramiento de autoridades a efecto de que puedan adoptar la mejor decisión. A su vez, la comunidad debe proporcionar a la autoridad la información relativa a los sistemas normativos internos y prácticas tradicionales, para que en un ejercicio de retroalimentación se lleve a cabo la consulta correspondiente.

El efecto, se considera que el diálogo, la información y comunicación son mecanismos de solución de controversias que el Estado debe adoptar y privilegiar a efecto de preservar la identidad e integridad étnica, cultural, social, política y económica de las comunidades y pueblos indígenas.

Lo anterior, tiene sustento en lo previsto en el artículo 41, fracción VII del Código de la materia, que establece que la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos tiene facultades para implementar mecanismos de solución de conflictos, como la realización de la consulta a la asamblea general comunitaria, cuando se presenten controversias respecto de las normas electorales internas o en los procesos de elección de autoridades municipales, a fin de lograr una solución pacífica y democrática

Por lo tanto, resulta importante que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a través de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, actúe como un facilitador de la comunicación de las partes en conflicto incluyendo a los integrantes de la comunidad, pues de autos se advierte que la colectividad en dicho municipio no ha sido informada ni consultada respecto de la controversia que existe en el procedimiento de incluir a las agencias municipales para nombrar a sus autoridades municipales, pues si bien, en otras circunstancias pudieron ser los órganos internos quienes hicieran los actos preparativos para llegar a asamblea general electoral de los concejales al ayuntamiento, esto no es así, puesto que para esta elección se ha presentado un conflicto que deriva a dichos preparativos, en el que los aquí actores integrantes del comité representativo para tratar asuntos relacionados con el proceso electoral para el periodo dos mil catorce-dos mil dieciséis (2014-2016), de la comunidad indígena de referencia, se han inconformado con las decisiones tomadas en forma unilateral por el presidente municipal y agentes de la comunidades, sin tomar en cuenta a los ciudadanos que como asegura el actor, no se acostumbra en las elecciones de concejales, por ello es que, ante un conflicto, lo aceptable es que se consulte a la asamblea general como máxima autoridad de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, para que en su caso, confirme el método de elección ya implementado o lo modifique.

De este modo, la consulta es un mecanismo de diálogo e información, que debe ser agotado, privilegiando siempre las garantías propias del debido proceso de las partes, incluyendo a los integrantes de la comunidad que pudieran verse afectados por la decisión que se emita, para tal efecto, se deben tomar las medidas necesarias a fin de propiciar condiciones razonables para encontrar una solución pacífica, a efecto de que sean los propios integrantes de la comunidad quienes, en su caso, determinen la forma y términos que deba llevarse a cabo la asamblea general electiva, pues es notorio que las comunidades que conforman el municipio requieren ejercer sus derechos políticos electorales, lo que corresponde a la propia asamblea general conformada por los ciudadanos y ciudadanas del municipio, implementar los mecanismos para la elección de los concejales al ayuntamiento en cuestión y así lleguen a un acuerdo que resuelva el conflicto.

Es importante mencionar que **la asamblea general comunitaria se encuentra reconocida en el Código electoral, como el principal órgano de consulta, designación de cargos y elección de autoridades municipales**, así como para otras formas de consulta y designación validadas por la propia comunidad.

La asamblea general comunitaria, es la reunión de todas aquellas personas nativas de una comunidad, así como por aquellas otras que sin serlo, asumen ser parte de ella por aceptación propia y reconocimiento expreso de la comunidad según sus costumbres y tradiciones. Su principal atributo es su carácter deliberativo y de gestión, rasgo que le dota de una fuerza definitoria a sus decisiones que gozan de un amplio consenso. Constituye entonces, una verdadera instancia organizativa conformada por hombres y mujeres que residen en la comunidad y que no sólo tienen entre su ámbito de potestades las determinaciones relacionadas con el desarrollo comunitario sino que destacadamente, se erigieron como fundamentales en la elección de sus representantes.

De lo anterior, se advierte que una comunidad indígena goza de la posibilidad de adoptar sus propios mecanismos que determinen su condición política, es decir, nada impide que las comunidades a través de la asamblea general comunitaria establezcan mecanismos propios para la solución del conflicto.

En ese sentido, resulta necesario considerar y maximizar en la mayor medida posible, el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, y, en consecuencia a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación de los conflictos internos, previsto en los artículos 2 de la Constitución General de la República; 5 y 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como en los artículos 3, 4 y 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En conjunto, se reconoce que el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas implica que gozan de autonomía para:

- Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

- Aplicar sus propios sistemas normativos internos en la regulación y solución de conflictos internos.

- Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.

Por su parte, la legislación del Estado, en los artículos 25, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 255, párrafos 2 y 6, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación al decidir sus formas internas de convivencia y organización política, y señala al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, como garante de dicho derecho.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento que expresa un amplio consenso de la comunidad internacional y sirve de parámetro, para orientador y definir los derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos, tanto, en el derecho constitucional, como internacional, contempla en su artículo 4, el derecho al autogobierno de los pueblos indígenas, y en el 5, expresamente establece el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

De esta forma, las autoridades electorales se encuentran obligadas a garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir a sus propias autoridades bajo sus propias normas, procedimientos y prácticas, de manera previa a cualquier determinación que adopte la autoridad electoral, respecto de la elección de autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, siendo necesario asegurarse de haber agotado los medios que garanticen el derecho al autogobierno.

A fin de garantizar el pleno respeto a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, así como al derecho que tienen sus integrantes a elegir a sus propias autoridades, y por ende a autogobernarse, bajo este tenor, se considera que cuando existan escenarios de conflicto intracomunitario, previo a la emisión de una resolución por parte de la autoridad administrativa o jurisdiccional, se deben privilegiar medidas pacíficas de solución de conflictos, al interior de la comunidad mediante los procedimientos e instituciones, que se consideren adecuados y válidos comunitariamente.

Ello, toda vez que los medios alternativos de solución de controversias, son medidas de protección que el Estado debe adoptar y privilegiar, a efecto de preservar la identidad e integridad étnica, cultural, social, política y económica de las comunidades y pueblos indígenas, como lo prevé la propia legislación estatal.

Bajo ese contexto, el derecho a la consulta se traduce en la participación efectiva de las comunidades y pueblos indígenas en relación con cualquier decisión que pueda afectar a sus intereses y que son tomadas por las instituciones estatales.

Tal derecho implica una cuestión básica: la necesidad de que las comunidades y pueblos indígenas, así como sus integrantes participen de manera efectiva en todas las decisiones que le afecten; lo cual constituye el reconocimiento de la necesidad de involucrar de manera directa e inmediata a dichas comunidades y pueblos en las políticas y acciones estatales que afecten sus intereses y tiene por objetivo evitar tanto la imposición arbitraria de medidas, como la exigencia de tomar en cuenta las necesidades y prioridades de las poblaciones indígenas interesadas o afectadas.

En cuanto a la consulta, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-JDC-1740/2012, estableció lo siguiente:

*‘En ese orden de ideas, y en aplicación directa de los instrumentos internacionales correspondientes, la ejecutoria cuya inejecución se aduce determina como obligación de las autoridades, que todas las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia se desarrollen y realicen bajo el amparo del derecho a la consulta, es decir, se exige a todas las autoridades involucradas en el cumplimiento de la sentencia (electorales, legislativa y administrativas) que las acciones y decisiones que se adopten sean debidamente consultadas con la comunidad involucrada.*

*La existencia normativa de este derecho dentro del corpus*

*jurídico correspondiente a las comunidades indígenas trae consigo las consecuencias siguientes:*

***a) Obligación estadual****: el Estado debe en todo momento y para todos los efectos, consultar de manera previa con las autoridades políticas de los pueblos y comunidades indígenas, respecto de todas aquellas decisiones que involucren su interés, ya sea en sus aspectos políticos, sociales, económicos y culturales, para lo cual deberá desarrollar mecanismos de consulta que garanticen la participación directa y activa de todos los miembros de dichas colectividades.*

*Al respecto, el artículo 6, del convenio referido requiere que los gobiernos establezcan los medios que permitan a los pueblos interesados participar en la toma de decisiones a todos los niveles cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.*

***b) Mecanismos de consulta efectivos****: la consulta a dichos pueblos implica la utilización tanto de procedimientos adecuados como de sus instituciones representativas a efecto de conocer, en forma efectiva y directa, la opinión de los afectados, con lo cual se busca evitar la práctica de la simulación en el ejercicio de ese derecho.*

*Por ello, se exige que las consultas llevadas a cabo en aplicación del Convenio deban efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.*

*Asimismo, se exige que los mecanismos consultivos observen una serie de principios reconocidos a nivel internacional y cumplan determinados requisitos esenciales, para considerar que la consulta en cuestión sea eficaz y cumpla su cometido’.*

Sustento que, para que una consulta a una comunidad o pueblo indígena sea válida y cumpla con los estándares internacionales correspondientes, los principios o criterios mínimos que debe cumplir, con base en lo establecido en el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes como en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, son los siguientes:

**1. Endógeno:** el resultado de dichas consultas debe surgir de los propios pueblos y comunidad indígenas para hacer frente a necesidades de la colectividad.

**2. Libre:** el desarrollo de la consulta debe realizarse con el consentimiento libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas, que deben participar en todas las fases del desarrollo.

**3. Pacífico:** se debe privilegiar las medidas conducentes y adecuadas, para que se establezcan todas las condiciones de diálogo y consenso que sean necesarias para evitar la generación de violencia o la comisión de cualquier tipo de desórdenes sociales al seno de la comunidad.

**4. Informado:** se debe proporcionar a los pueblos y comunidades indígenas todos los datos y la información necesaria respecto de la realización, contenidos y resultados de la consulta a efecto de que puedan adoptar la mejor decisión. A su vez dichos pueblos y comunidades deben proporcionar a la autoridad la información relativa a los usos, costumbres y prácticas tradicionales, para que en un ejercicio constante de retroalimentación se lleve a cabo la consulta correspondiente.

**5. Democrático:** en la consulta se deben establecer los mecanismos correspondientes a efecto que puedan participar el mayor número de integrantes de la comunidad; que en la adopción de las resoluciones se aplique el criterio de mayoría y se respeten en todo momento los derechos humanos.

**6. Equitativo:** debe beneficiar por igual a todos los miembros, sin discriminación y contribuir a reducir las desigualdades.

**7. Socialmente responsable:** debe responder a las necesidades identificadas por los propios pueblos y comunidades indígenas; y reforzar sus propias iniciativas de desarrollo, deben promover el empoderamiento de los pueblos indígenas y especialmente de las mujeres indígenas.

**8. Autogestionado:** las medidas que se adopten a partir de la consulta deben ser manejados por los propios interesados a través de formas propias de organización y participación.

De igual manera, en la sentencia indicada se consideró que la consulta, debe cumplir con los siguientes requisitos:

*‘Establecido lo anterior, lo cierto es que toda consulta, sin importar las formas y términos específicos en que se desarrolló debe observar los principios ya señalados, así como cumplir una serie de requisitos esenciales establecidos en el artículo 6 del propio convenio, para que la realización de la consulta pueda estimarse válida:*

*1. La consulta debe realizarse con carácter previo: es necesario que la consulta se realice con anterioridad a la adopción de la medida; lo que implica que las comunidades afectadas deben ser involucradas lo antes posible en el proceso y consultadas previamente en todas las fases del proceso de producción normativa, de tal forma que las consultas no deben ser restringidas a propuestas iniciales sino sobre todo a toda propuesta que tengan relación con las ideas matrices de la medida en cuestión.*

*2. La consulta no se agota con la mera información: la realización de una consulta implica necesariamente al establecimiento de un diálogo entre las partes signadas de comunicación y entendimiento, mutuo respeto y buena fe y con el deseo de llegar a un acuerdo común, por lo que no se trata simplemente de informar a las comunidades y pueblos el contenido de la medida legislativa o administrativa que se pretende adoptar, sino permitirles de forma genuina y objetiva su participación en la construcción de la misma.*

*3. La consulta debe ser libre: la consulta debe realizarse libre de injerencias externas, sin que en ella puedan caber medidas coercitivas, intimidatorias o de manipulación a efecto de obtener o conseguir determinado resultado, situación que debe respetarse tanto a nivel colectivo como individual.*

*4. La consulta debe ser de buena fe, dentro de un proceso que genere confianza entre las partes: si la consulta es un instrumento de participación que debe responder al objetivo último de establecer un diálogo entre las partes basados en principios de confianza y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas; dentro de ese contexto la buena fe debe guiar en todo momento y durante todas sus etapas a la consulta.*

*Esta situación obliga tanto a las autoridades del estado como a los propios pueblos indígenas, pues deben estar dispuestos no sólo a dialogar, sino a construir un verdadero proceso de retroalimentación que permita conocer las necesidades de las comunidades y las posibilidades reales de la autoridad, en un esfuerzo conjunto que genere un clima de confianza y respeto mutuos en el que la consulta se lleve a cabo de buena fe y, eso requiere que exista un cierto nivel de aceptación mutua por las partes acerca del mismo procedimiento de consulta, con independencia de cuales puedan ser las posiciones sustantivas dentro del procedimiento.*

*De ahí que la consulta se transforme en una oportunidad para abrir el diálogo normativo en torno a las demandas legítimas de los pueblos indígenas, a la luz de los derechos internacionalmente reconocidos, para acercar posturas divergentes y para propiciar una mayor participación e inclusión de los pueblos indígenas en las estructuras institucionales del Estado.*

*5. La consulta debe ser adecuada y a través de las instituciones representativas indígenas: el Estado tiene la obligación de consultar con los pueblos indígenas según sus costumbres y tradiciones, tomando en cuenta los métodos tradicionales del pueblo para la toma de decisiones; lo que depende en gran medida del ámbito o alcance de la medida específica que es objeto de la consulta y de la finalidad de la misma: por lo que, en cuanto al propio proceso de consulta, se deberá tomar en cuenta la opinión de los diferentes pueblos que participan en la consulta sobre el procedimiento a utilizarse para intercambiar, de manera que el procedimiento utilizado sea considerado apropiado por todas las partes.*

*Por su parte, el criterio de representatividad debe entenderse de forma flexible, pues la diversidad de los pueblos indígenas se traduce necesariamente en la existencia de diversos modelos de institución, representativa, pero siempre lo importante es que tal institución tenga su origen en un proceso propio e interno de los pueblos; de tal forma que en la realización de la consulta, más que a criterios preestablecidos, se debe atender a los principios de proporcionalidad y no discriminación, con la inclusión de las distintas formas de organización indígena -siempre que respondan a procesos internos de los pueblos-, todo lo cual debe responder a una pluralidad de perspectivas de identificación, geográficas y de género.*

*La consulta debe ser accesible; lo que implica la ausencia de mecanismos institucionales específicos y se deben buscar los procedimientos que permitan la participación de un mayor número de pueblos y comunidades indígenas, teniendo en cuenta las limitaciones materiales, institucionales y temporales; turnado a que, se debe considerar la diversidad lingüística de los pueblos indígenas, particularmente en aquellas áreas donde la lengua oficial no sea hablada mayoritariamente por la población indígena.*

*Por último, el carácter adecuado de las consultas tiene una dimensión temporal, que de nuevo depende de las circunstancias precisas de la medida propuesta, teniendo en cuenta el respeto a las formas indígenas de decisión; por lo cual se deben prever los tiempos necesarios para que los pueblos indígenas puedan llevar a cabo sus procesos de toma de decisiones y participar efectivamente en las decisiones tomadas de una manera que se adapte a sus modelos culturales y sociales; si ello no se toma en cuenta será imposible cumplir con los requisitos esenciales de la consulta previa y la participación.*

*6. La consulta debe ser sistemática y transparente: si bien la consulta no debe guiarse por mecanismos preestablecidos o específicos, lo cierto es que el desarrollo de la consulta debe responder a mecanismos o procedimientos sistemáticos y transparentes.*

*Lo anterior, implica que el establecimiento del mecanismo de consulta tampoco puede ser una imposición externa a las comunidades y pueblos indígenas, sino que también en tal situación se debe atender a sus necesidades y demandas, de tal forma que el establecimiento del mecanismo en cuestión sea producto del consenso entre las partes involucradas.*

*Sin embargo, el desarrollo de este diálogo para establecer el mecanismo de consulta debe tener como resultado el establecimiento de un procedimiento sistemático y transparente, pues sólo de esa forma se responde a la necesidad de dotar de seguridad jurídica a todo acto del estado, así como a los objetivos de adecuación y representatividad de las consultas a los pueblos indígenas, evitando arbitrariedades y conflictos innecesarios; ante eso, dichos procedimientos deberán ser en sí mismo un proceso consensuado, con la participación activa de los pueblos indígenas; lo que se traduce en la conveniencia de determinar con mayor precisión los criterios utilizados para determinar la representatividad, forma de participación y metodología utilizada’.*

Tales requisitos se encuentran, contenidos en la Tesis Xll/2013 de rubro USOS Y COSTUMBRES. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS CONSULTAS EN COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS, PARA CELEBRAR ELECCIONES.

En tales términos, es importante resaltar que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a través de la Dirección Ejecutiva debe reconocer el derecho de autodeterminación del municipio de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, y darle la importancia y reconocimiento a la asamblea general comunitaria, **garantizando el derecho a la información y diálogo a los integrantes de la comunidad, a través de una consulta, en la cual se emitan opiniones, para obtener su consentimiento o para alcanzar algún acuerdo, y éstos se encuentren en aptitudes reales de tomar decisiones libres, informadas, sin coerción y de buena fe**, de manera que se adopten las medidas que resulten menos lesivas a las partes, garantizando los derechos humanos y libertades de los integrantes de la comunidad, en los términos del artículo 2 de la Constitución Federal y de los instrumentos internacionales aplicables.

Sustenta lo anterior, la Tesis XI1/2013 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro **COMUNIDADES INDÍGENAS. LA AUTORIDAD ELECTORAL DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ELECCIONES POR USOS Y COSTUMBRES (LEGISLACIÓN DE OAXACA).**

En ese orden de ideas, es procedente señalar los siguientes lineamientos para llevar a cabo la consulta a la asamblea general comunitaria, máximo órgano de gobierno en el municipio de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca:

1. La autoridad administrativa electoral no deberá imponer reglas o soluciones que beneficie a alguna de las partes.

2. Se deben implementar mecanismos de diálogo, comunicación e información entre las partes, teniendo en cuenta que la asamblea general comunitaria es parte también del conflicto.

3. Mediante asamblea general comunitaria deberá llevarse a cabo una consulta, previa amplia convocatoria de la misma.

4. En dicha consulta, se deberá buscar el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, para que mediante el consenso, se definan las normas, procedimientos, duración en el cargo y fecha de la asamblea de elección, de manera que se adopte la medida que resulte menos lesiva a las partes, garantizando los derechos humanos y libertades de los integrantes de la comunidad.

La Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Partición Ciudadana de Oaxaca, es la indicada y quien deberá designar a un especialista en la materia, a fin de facilitar el diálogo y la comunicación e instar a las partes para participar y dar fin a la controversia. Por lo cual, podrá solicitar apoyo al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, como lo prevé el artículo 265 del código electoral. En todo momento, será obligación de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, garantizar el derecho a la información a los integrantes de la comunidad.

Ello, tomando en consideración que los efectos de la función jurisdiccional, únicamente tienden a confirmar, modificar o revocar el acto impugnado, por lo cual, es evidente que no puede sustituir la función administrativa que atañe al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

En tales circunstancias, y toda vez que en el caso debe agotarse una instancia previa resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el inciso c), del artículo 10 de la ley de la materia.

Sin embargo, atendiendo a que este tribunal debe suplir la deficiencia de la queja en forma total, tratándose de los medios de impugnación de naturaleza como el que nos ocupa, de conformidad con el numeral 83, sección 4, de la ley electoral procesal en comento, a efecto de garantizar y maximizar los derechos de las comunidades indígenas, este órgano colegiado considera que ante la falta de previo agotamiento de la instancia administrativa electoral, resulta conducente el envío de la demanda y anexos, al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

En consecuencia, previa copia certificada y las anotaciones que correspondan, remítase al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el escrito de demanda con sus anexos, para que de forma inmediata en el ámbito de sus facultades lleve a cabo la consulta en la comunidad en cuestión, en los términos antes anotados, derivado del conflicto suscitado con la preparación y desarrollo de la elección de los concejales al ayuntamiento de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, con la advertencia que la consulta ordenada, deberá tener como objetivo la toma de acuerdos necesarios para establecer las bases correspondientes, tendientes a la preparación y desarrollo de las elecciones de los concejales al Ayuntamiento de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca.

Es importante destacar que, con el envío del escrito de demanda al Consejo General del referido instituto, además de dar pleno reconocimiento y eficacia al sistema integral de justicia electoral, en el que se incluyen los mecanismos de diálogo, comunicación e información para la solución de controversias electorales, se fortalece el sistema de justicia estatal, pues se da a las comunidades de los pueblos originarios la **oportunidad de resolver sus conflictos electorales, potencializando así, su derecho a la libre autodeterminación**.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, e integrantes del comité representativo para tratar asuntos relacionados con el proceso electoral para el periodo dos mil catorce-dos mil dieciséis (2014-2016), de la comunidad indígena de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, deberán informar a este Tribunal con las constancias atinentes, sobre el cumplimiento de la presente resolución, dentro de las **veinticuatro horas siguientes** a que ello ocurra”.

**QUINTO. *Agravios.*** Los actores plantean como agravios los siguientes:

**“AGRAVIOS**

Por la violación e inexacta aplicación e inobservancia en el artículo 1o, ya que la finalidad del juicio de los derechos políticos electorales, consiste en restituir a los ciudadanos el uso y goce de sus derechos, a través de la protección legal y constitucional de los mismos. La inexacta aplicación del artículo 2o que no garantiza el derecho a la libre determinación y autonomía.

LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO COATLÁN, EN NINGÚN MOMENTO HA VIOLADO DERECHOS INDIVIDUALES, NI COLECTIVOS, ya que el Presidente Municipal, así como los agentes municipales de todo el municipio, se reunieron previamente en la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos para ponerse de acuerdo, en el procedimiento de elección, siendo nuestra intervención como representantes de la cabecera municipal, mucho tiempo después que ellos. Violando de antemano el artículo 9o Constitucional, por lo que respecta al derecho de asociación o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; porque la CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO COATLÁN, MIAHUATLÁN; EN NINGÚN MOMENTO HEMOS REALIZADO ASAMBLEA DE ELECCIÓN, COMO TAMPOCO HEMOS NEGADO LA PARTICIPACIÓN DE ALGÚN CIUDADANO, ya que NO HEMOS SIDO CONVOCADOS por el Presidente Municipal a asamblea de elección para la renovación de concejales de la cabecera municipal; lo que sí ha hecho, es desconocer e ignorar a la asamblea, así como el derecho a la consulta, para tomar cualquier determinación de manera unilateral, ya que rindió ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana un informe sin presentar las firmas respectivas de la consulta; violando dicho principio Constitucional. La cabecera municipal de SAN PABLO COATLÁN, hemos sido respetuosos de la autonomía y de sus costumbres de cada una de las agencias de SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA, Agencia de policía de COMITLÁN, Ranchería EL TAMARINDO; del que **TODOS YA EFECTUARON SU ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA POR USOS Y COSTUMBRES según sus procedimientos internos, PARA ELEGIR A SUS CONCEJALES;** excepto SAN ANTONIO LALANA, que aún no lleva a cabo su asamblea; así como la cabecera municipal de SAN PABLO COATLÁN.

La inexacta aplicación del artículo 35 Constitucional, fracciones I, II, y III, por el derecho de votar en las elecciones populares, así como ser votado para todos los cargos de elección popular, asociarnos libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos.

La inexacta aplicación de los artículos 41 fracción VI; 99 fracción IV; 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, apartado A; 3, párrafo 2, y 4, párrafo 2, del Código de. Instituciones Políticos Electorales para el Estado de Oaxaca; por cuanto que deberán sujetarse a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

No se garantiza la protección en la conciencia de la identidad indígena, que deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Como integrantes del pueblo indígena de la cabecera municipal de San Pablo Coatlán, ya que formamos una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

Lo anterior nos perjudica, ya que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Toda vez que la colectividad está integrada por individuales, con derecho de asociación, por lo que cada uno o en su conjunto tienen derecho a acudir juicio a través de una representación, siendo imposible que cada uno realice el mismo juicio de los derechos políticos electorales, sobre el mismo caso concreto y contra la misma autoridad.

EXIGIMOS LA REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA EFECTUAR LA ELECCIÓN A CONCEJALES, DEL CUAL TODOS LOS CIUDADANOS INTERESADOS DEL MUNICIPIO PODRÁN PARTICIPAR, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD, según los artículos 113 de la Constitución Local; 257 y 258 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca; ya que los actos realizados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como del Presidente Municipal, han sido ilegales, careciendo de toda certeza, sin la realización de éste acto que se ha omitido; llevando a cabo mediación de un hecho que aún no se ha consumado.

**PRIMER AGRAVIO**

**FUENTE DE AGRAVIO.-** La resolución de fecha veintisiete de noviembre del dos mil trece, del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, derivado del JUICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA EN EL RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS. Según expediente **JDCI/104/2013.**

**SEGUNDO AGRAVIO**

**FUENTE DE AGRAVIO.-** El resolutivo SEGUNDO donde se declara IMPROCEDENTE EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES en el Régimen de Sistemas Normativos Internos.

Por lo que consideramos que el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, no realizó un estudio de fondo en relación al JUICIO INTERPUESTO, como tampoco se allegó de información respecto a los antecedentes que dieron origen a las mesas de diálogo y mediación, no realizó el estudio correspondiente respecto al catálogo de usos y costumbres reconocido en 1995, como tampoco del informe presentado por el Presidente Municipal C. LORENZO ESPINOSA MARTÍNEZ, que debió reunir toda la legalidad y veracidad correspondiente, así como tampoco corroboró si existe respaldo de la asamblea general comunitaria, para efectuar cambios a los procedimientos electorales internos.

Lo anterior nos perjudica al no garantizar la seguridad jurídica del orden supremo de la democracia, ni del ordenamiento legal constitucional.

**ARTÍCULOS LEGALES VIOLADOS.**

Artículos 1°; 2°; 35; 41; 99, fracción IV; 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4, numeral (sic), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; por lo que considerados han sido violados por su inobservancia.

**CONCEPTO DE AGRAVIO.**

La falta de certeza y legalidad en el estudio de fondo, realizado por el Tribunal que resolvió el recurso de JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA EN EL RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS, motivo de la resolución que se impugna; por lo siguiente:

De acuerdo a los considerandos SEGUNDO Y TERCERO, que violan los principios legales de todo procedimiento electoral, el derecho a la consulta, y de asociación, así como el de votar y ser votado.

POR LO QUE ES NOTORIA LA VIOLACIÓN A LAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONALES, EL DERECHO DE ASOCIACIÓN, A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA; Y A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD, en los actos relativos y que motivaron los agravios en el presente recurso, fundando lo anterior en los artículos 1°; 2°; 9°; 35; 99, fracción IV, y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

**SEXTO. *Motivos de impugnación.*** En el presente apartado esta Sala Superior identifica los siguientes agravios hechos valer por los actores, su pretensión y causa de pedir:

Ante todo, es preciso señalar que esta Sala Superior, considera que el estudio de fondo en el presente asunto implica aspectos estrechamente relacionados con el derecho de los miembros de una comunidad indígena a definir sus propias normas y procedimientos internos con base en su derecho a la autodeterminación constitucionalmente reconocido.

Por ello se estima procedente, a fin de salvaguardar plenamente el derecho de acceso a la justicia, suplir la deficiencia de los agravios, incluso ante la ausencia total de los mismos, en lo que resulte aplicable, de acuerdo con la jurisprudencia, de rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES,**[[46]](#footnote-46)** en el sentido de que, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por integrantes de comunidades o pueblos indígenas, en el que se plantee el menoscabo de su autonomía política o de los derechos de sus integrantes para elegir sus autoridades o representantes, conforme a sus propias normas, procedimientos y prácticas tradicionales, la autoridad jurisdiccional electoral debe, no sólo suplir la deficiencia de los motivos de agravio, sino también su ausencia total y precisar el acto que realmente les afecta, sin más limitaciones que las derivadas de los principios de congruencia y contradicción, inherentes a todo proceso jurisdiccional, porque tal suplencia es consecuente con las normas constitucionales que reconocen los derechos de estos pueblos o comunidades y sus integrantes.

Precisado lo anterior cabe destacar que los actores se inconforman con la decisión del tribunal electoral local, de estimar improcedente el juicio promovido en contra de diversos acuerdos tomados para determinar el procedimiento relativo a la elección de concejales en el municipio de que se trata, así como de ordenar que se lleve a cabo la consulta a la comunidad para establecer los mecanismos de esa elección.

Al efecto, exponen en síntesis, los siguientes argumentos:

La sentencia reclamada es ilegal por violación e inexacta aplicación e inobservancia en los artículos 1° y 2° Constitucionales, ya que no garantiza la restitución a los ciudadanos el uso y goce de sus derechos a la libre determinación y autonomía.

Aducen que el acto reclamado produce violación del artículo 9o Constitucional, por lo que respecta al derecho de asociación o reunión porque en la cabecera municipal de San Pablo Coatlán, Miahuatlán no se ha realizado asamblea de elección ya que sus integrantes no han sido convocados por el Presidente Municipal para la renovación de concejales de la cabecera municipal y sí ha tomado determinaciones en coordinación de las agencias municipales, desconociendo a la asamblea y el derecho a la consulta.

Además, sostienen que las agencias municipales y rancherías ya efectuaron su asamblea general comunitaria por usos y costumbres según sus procedimientos internos, para elegir a sus concejales; pero falta la cabecera municipal de San Pablo Coatlán, que integran los actores.

Señalan que la responsable hace una inexacta aplicación del artículo 35 Constitucional, fracciones I, II, y III, por el derecho de votar en las elecciones populares, así como ser votado para todos los cargos de elección popular, asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos.

Agregan que igualmente el tribunal local hace una inexacta aplicación de los artículos 41, fracción VI; 99 fracción IV; 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, apartado A; 3, párrafo 2, y 4, párrafo 2, del Código de. Instituciones Políticos Electorales para el Estado de Oaxaca; por cuanto que deberán sujetarse a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Sostienen que con la sentencia reclamada, la responsable no garantiza la protección en la conciencia de la identidad indígena, que deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, lo que les perjudica, ya que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Por ello, piden la realización de la asamblea general comunitaria de la cabecera municipal, para efectuar la elección a concejales, en la cual todos los ciudadanos interesados del municipio podrán participar, cumpliendo los requisitos de elegibilidad,

En **cuanto a la** declaración de improcedencia del juicio primigenio afirman que el Tribunal Estatal Electoral no realizó un estudio de fondo ni se allegó de información respecto a los antecedentes que dieron origen a las mesas de diálogo y mediación, no realizó el estudio correspondiente respecto al catálogo de usos y costumbres reconocido ni del informe presentado por el Presidente Municipal, así como tampoco corroboró si existe respaldo de la asamblea general comunitaria, para efectuar cambios a los procedimientos electorales internos.

Conforme a lo anterior se advierte que la pretensión de los actores consiste en que se dejen sin efecto los acuerdos previos para establecer el procedimiento de elección de San Pablo Coatlán, a fin de que las agencias municipales no tengan intervención en la elección de la cabecera municipal y se lleve a cabo una asamblea comunitaria en la que se elijan a los concejales.

La **causa de pedir** la sustentan en que no es competencia de los representantes de las comunidades determinar los procedimientos, porque esa facultad corresponde a la asamblea.

Conforme a lo anterior, la litis se constriñe a analizar si es legal la declaración de improcedencia del juicio primigenio y, por ende, si fue correcta la determinación del tribunal responsable de reenviarlo a la instancia de consulta ciudadana, ante la autoridad administrativa electoral local.

**SÉPTIMO. *Estudio de fondo.*** En elpresente apartado se desarrollan las razones jurídicas que sustentan la decisión, para lo que se agrupan los argumentos expuestos por los actores en los siguientes temas:

**A.** Argumentos relacionados con la improcedencia del juicio primigenio.

**B.** Alegaciones sobre que la responsable no garantiza la protección en la conciencia de la identidad indígena.

**C.** Afirmaciones respecto a que conforme a los usos y costumbres del municipio, en la elección de concejales no deben intervenir las agencias municipales.

**D.** Petición sobre la realización de la asamblea general comunitaria de la cabecera municipal, en la que se efectúe la elección a concejales de San Pablo Coatlán.

En seguida se dará respuesta a los motivos de inconformidad de los actores en el orden propuesto, por razones de método.

**A.** Argumentos relacionados con la improcedencia del juicio primigenio.

En la demanda del presente juicio ciudadano, los actores hacen un apartado al que denominan *Segundo Agravio,* en el que aducen que es fuente de agravio el resolutivo segundo donde se declara improcedente el juicio primigenio.

Aunque en realidad no formulan argumentos para controvertir la improcedencia decretada por la autoridad responsable, esta Sala Superior estima necesario analizar la legalidad de esa determinación de improcedencia del juicio local, a fin de establecer, si fue correcto que el tribunal local estimara que los actores debieron agotar la instancia de consulta ciudadana, en contra de los acuerdos tendentes a establecer el procedimiento para la elección de San Pablo Coatlán y hacer la remisión correspondiente.

Lo anterior porque como ya se precisó, el estudio de fondo en el presente asunto implica aspectos estrechamente relacionados con el derecho de los miembros de una comunidad indígena a definir sus propias normas y procedimientos internos con base en su derecho a la autodeterminación, constitucionalmente reconocido.

Por ello, a fin de salvaguardar plenamente el derecho de acceso a la justicia, cabe suplir la deficiencia de los agravios, incluso ante la ausencia total de los mismos, conforme a la jurisprudencia ya citada.

**Análisis de la legalidad de la improcedencia del juicio declarada en la sentencia reclamada.**

Esta Sala Superior considera que fue conforme a derecho la determinación de improcedencia decretada en el juicio primigenio, sobre la base de que los actores debieron agotar la instancia de consulta comunitaria, antes de acudir a la vía jurisdiccional local.

Previamente a su análisis se considera necesario tener presente la precisión conceptual de **los sistemas normativos internos,** a los que hace referencia la legislación electoral del Estado de Oaxaca; los principios constitucionales aplicables al caso, y el régimen de sistemas normativos internos.

* + - 1. **Precisión conceptual**

**Sistemas normativos internos:** son los principios generales, las normas orales o escritas, instituciones y procedimientos que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y vigentes, y aplican en el desarrollo de su autogobierno, en particular en la definición de sus cargos y servicios, la elección y nombramiento de las autoridades comunitarias del gobierno municipal, la resolución de sus conflictos internos cuya determinación no sea competencia del Congreso; la participación en los asuntos que son susceptibles de afectarles y la protección de sus principios, valores y culturas políticas propias en el ámbito municipal, como expresión del derecho de la libre determinación y autonomía reconocidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y la Constitución Estatal (artículo 255, párrafo 4, del código electoral local).

**2. Principios constitucionales aplicables**

El acápite del apartado A del artículo 2º constitucional establece que la propia Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, en lo que interesa:

* Aplicar sus propios **sistemas normativos** en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, **la dignidad e integridad de las mujeres**. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes (fracción II).
* Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus **formas propias de** **gobierno interno**, **garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones**, en un marco que respete el pacto federal y la ***“soberanía de los estados”*** (fracción III).
* **Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos** (fracción VII).
* Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas (fracción VII).
* **Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado**. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando la preceptiva constitucional. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura (fracción VIII).

**3. Régimen de sistemas normativos internos**

En primer término, cabe advertir que, en el caso, no está sujeta a controversia la definición del régimen electoral para elegir a las autoridades municipales en el Municipio de San Pablo, Coatlán, toda vez que en dicho municipio, **se encuentra vigente el régimen de sistemas normativos internos y, por lo tanto, es el aplicable en el presente proceso electoral de renovación de autoridades municipales**, en atención a las siguientes consideraciones:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 255 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas del Estado de Oaxaca a la libre determinación expresada en su autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización política, así como para elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres, en un marco que respete la Constitución Federal, la Constitución estatal y la soberanía del Estado.

De la misma forma el invocado precepto, en su párrafo 4, establece lo que se entiende por “sistemas normativos internos”, en los siguientes términos:

*“4. En este Código se entiende por sistemas normativos internos, los principios generales, las normas orales o escritas, instituciones y procedimientos que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y vigentes, y aplican en el desarrollo de su autogobierno, en particular en la definición de sus cargos y servicios, la elección y nombramiento de las autoridades comunitarias del gobierno municipal, la resolución de sus conflictos internos cuya determinación no sea competencia del Congreso; la participación en los asuntos que son susceptibles de afectarles y la protección de sus principios, valores y culturas políticas propias en el ámbito municipal, como expresión del derecho de la libre determinación y autonomía reconocidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y la Constitución Estatal”.*

De conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en los municipios que se rigen bajo sistemas normativos internos si no hubiese petición de cambio de régimen, se entenderá vigente el sistema inmediato anterior, con el fin de preservar y fortalecer tanto el régimen de partidos políticos como el régimen de sistemas normativos internos y garantizar la diversidad cultural y la pluralidad política en el Estado.

En la especie, dado que no existió petición expresa de cambio de régimen en el Municipio de San Pablo Coatlán, debe entenderse vigente el régimen de sistemas normativos internos. Lo anterior, de conformidad con el *Catalogo general de municipios que elegirán a sus autoridades bajo el régimen de sistemas normativos internos* aprobado por el Consejo general del Instituto mediante acuerdo CG-SN-1/2012 de diecisiete de noviembre de dos mil doce.

Ahora bien, de acuerdo con las constancias de autos, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente caso subyace un conflicto intracomunitario marcado por diferencias, entre otros aspectos, respecto de los métodos y procedimientos que deben observarse para la elección de las autoridades municipales para el trienio dos mil catorce-dos mil dieciséis.

Particularmente, esta Sala Superior identifica, al menos, que existen discrepancias sobre tales aspectos entre la cabecera municipal y las diferentes agencias que conforman el municipio: a saber: San Francisco, San Antonio Lalana, Santa María Coatlán, así como la ranchería el Tamarindo.

Al respecto, es preciso señalar que, dada la situación de conflictividad, la elección se ha ido postergando; sin embargo, ha habido reuniones de los grupos en conflicto.

De esta manera en la reunión llevada a cabo el diecinueve de noviembre de dos mil trece, con la coordinación de la Dirección Ejecutiva, el Presidente Municipal, los Comisionados de las Agencias Municipales y ciudadanos representantes de la cabecera municipal, en relación con el procedimiento para la elección de concejales de San Pablo Coatlán, la Junta Ejecutiva acordó fundamentalmente darles intervención a las agencias municipales, a fin de que propusieran sus planillas para que pudieran competir en tal elección.

Sin embargo, el grupo de ciudadanos comisionados que pertenecen a la cabecera municipal no estuvo de acuerdo con la intervención de las agencias municipales en la elección, porque según su dicho en virtud de sus usos y costumbres, los integrantes del municipio debían ser designados en asamblea, sin que debieran preceder las planillas de tales agencias.

Por esta razón, elveintitrés de noviembre de dos mil trece, José Aragón Jiménez, Héctor Martínez Contreras, Juan Manuel Ibarra y Enrique Martínez, en su carácter de comisionados de la cabecera municipal, promovieron juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano en el régimen de sistemas normativos internos del estado de Oaxaca, para controvertir tales acuerdos.

Pero, la autoridad responsable estimó la improcedencia del medio de impugnación, determinación que se considera apegada a derecho, puesto que los actores no agotaron la instancia de consulta ciudadana.

Ciertamente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 98 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos, es procedente cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, o a través de su representante legal, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones en los municipios y comunidades que se rigen bajo Sistemas Normativos Internos.

Por su parte, el numeral 99, apartado 1, de la citada ley, establece que el juicio sólo será procedente cuando el actor haya realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos de los Sistemas Normativos Internos, o en su caso, los que las leyes respectivas establezcan para tal efecto.

En ese orden de ideas, conforme a lo previsto en el artículo 10, párrafo 1, inciso c), en relación con el numeral 83 de la propia ley, se advierte que el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos, será procedente siempre y cuando se hayan agotado todas las instancias previas, esto es, se cumpla con el principio de definitividad.

Al respecto, se considera que el principio de definitividad se cumple cuando se agotan previamente las instancias previas, que reúnan las dos características siguientes: a) sean las idóneas para impugnar el acto o resolución electoral de que se trate; y, b) conforme a los propios ordenamientos sean aptas para modificar, revocar o anular a éstos.

Debe tenerse presente que en el caso, los actores impugnaron mediante el juicio ciudadano local, los acuerdos tomados por la Dirección Ejecutiva en coordinación con otras autoridades, tendentes a establecer los mecanismos o el procedimiento para llevar a cabo la elección de concejales, en el municipio de San Pablo, Coatlán.

Esto porque mientras para los actores, las agencias municipales no deben intervenir en tal elección, porque se trata de una cabecera municipal; para la autoridad administrativa electoral local, sí hay posibilidad de esa intervención.

Lo anterior evidencia que en el municipio de que se trata (regido por sistemas normativos internos), existe controversia, respecto al procedimiento a seguir para la elección de concejales.

En el artículo 264 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, se establece una instancia para impugnar actos relacionados con las elecciones por sistemas normativos internos, conforme a lo siguiente:

**“Artículo 264.**

**1. En caso de presentarse controversias, respecto a las normas o procesos de elección en los municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos, éstos agotarán los mecanismos internos de resolución** de conflictos antes de acudir a cualquier instancia estatal**.**

**2.** El Consejo General conocerá en su oportunidad los casos de controversias que surjan respecto de la renovación e integración de los órganos de gobierno locales bajo los sistemas normativos internos. **Previamente a cualquier resolución se buscará la conciliación entre las partes**.

**3.** Cuando se manifieste alguna inconformidad con las reglas del sistema normativo interno, se iniciará un proceso de mediación cuya metodología y principios generales serán regulados por los lineamientos que al efecto apruebe el Consejo General.

**4.** Cuando se promueva alguna inconformidad con el acuerdo del Consejo General, por el cual se declara la validez de la elección, se tramitará con las reglas que para el caso señale la Ley procesal de la materia”.

\*El resaltado se hace en esta ejecutoria.

Como se ve de la anterior transcripción, la ley prevé para el caso de presentarse controversias, respecto a las normas o procesos de elección en los municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos, mecanismos internos de resolución de conflictos antes de acudir a cualquier instancia estatal, que será del conocimiento del Consejo General.

Lo anterior, porque como se trata precisamente de conflictos internos de una comunidad, se busca en primer término que **previamente a cualquier resolución haya la conciliación entre las partes a través de mecanismos como el de mediación**.

Entonces, es posible afirmar que el medio idóneo para controvertir los actos relativos al procedimiento para la preparación de la elección de concejales de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, es precisamente el mecanismo interno comunitario, supervisado por la autoridad administrativa electoral local.

Esto es así, porque debe tomarse en cuenta que el artículo 41, fracción, VII, del Código local de la materia, establece que la Dirección Ejecutiva tiene facultades para implementar mecanismos de solución de conflictos cuando se presenten controversias respecto de las normas electorales internas o en los procesos de elección de autoridades municipales, a fin de lograr una solución pacífica y democrática.

Uno de esos mecanismos es la realización de la consulta a la asamblea general comunitaria, conforme a lo previsto en los artículos 27 a 36 de los Lineamientos para el Proceso de Mediación en Casos de Controversia Respecto a las Normas o Procesos de Elección en los Municipios que se Rigen por Sistemas Normativos Internos.

Sobre todo porque como se dejó destacado existe un conflicto entre los integrantes de la comunidad, puesto que mientras los ciudadanos de la cabecera municipal no aceptan la intervención en la elección de concejales de las agencias municipales, éstas pretender participar mediante planillas, por ello, ante la existencia de ese conflicto, lo aceptable es que se consulte a la asamblea general como máxima autoridad de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, para que en su caso, confirme el método de elección ya implementado o lo modifique.

Lo anterior porque los acuerdos impugnados en el juicio primigenio crean un escenario que involucra no sólo la titularidad del Municipio de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, sino también, a la comunidad respecto de las normas de derecho interno que deben seguirse para la elección de los ciudadanos quienes deberán de fungir como presidente municipal, síndico y regidores del citado ayuntamiento.

De manera que ante esta situación, se debe salvaguardar el derecho a la autodeterminación de dicha comunidad.

Por tanto, como lo consideró la responsable, deben priorizarse mecanismos alternos de manejo y resolución de conflictos, como la mediación comunitaria a partir de la instrumentación de medidas efectivas para garantizar la eficacia de tal procedimiento, a través, de ser necesaria, de la consulta directa y la posibilidad de generar consensos en la propia comunidad, como una medida de promoción, respeto y garantía de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas a decidir sobre sus normas, principios, procedimientos y prácticas tradicionales que los rigen como parte de la solución de los conflictos intracomunitarios de conocimiento de los órganos del Estado.

De manera tal que, como en el caso concreto es al Instituto Estatal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, a quien le corresponde conocer sobre los casos de controversias que surjan respecto a la renovación o integración de los órganos de gobierno que se rigen bajo los sistemas normativos internos, este órgano administrativo electoral deberá buscar una solución al conflicto, a través de una consulta a la colectividad, para que ésta sea informada del proceso de renovación de sus autoridades, y de esta forma privilegiar la posibilidad de que los propios integrantes de la comunidad logren llegar a acuerdos que solucionen las diferencias.

Al respecto se proporcionará a los integrantes de la comunidad indígena toda la información necesaria respecto de la realización del nombramiento de autoridades, a efecto de que puedan adoptar la mejor decisión. A su vez, la comunidad debe proporcionar a la autoridad la información relativa a los sistemas normativos internos y prácticas tradicionales, para que en un ejercicio de retroalimentación se lleve a cabo la consulta correspondiente.

Esto, porque se considera que el diálogo, la información y comunicación son mecanismos de solución de controversias que el Estado debe adoptar y privilegiar a efecto de preservar la identidad e integridad étnica, cultural, social, política y económica de las comunidades y pueblos indígenas.

De este modo, la consulta es un mecanismo de diálogo e información, que debe ser agotado, privilegiando siempre las garantías propias del debido proceso de las partes, incluyendo a los integrantes de la comunidad que pudieran verse afectados por la decisión que se emita, para tal efecto, se deben tomar las medidas necesarias a fin de propiciar condiciones razonables para encontrar una solución pacífica, a efecto de que sean los propios integrantes de la comunidad quienes, en su caso, determinen la forma y términos que deba llevarse a cabo la asamblea general electiva.

Por lo explicado se considera que la consulta a la comunidad referida por la autoridad responsable, cumple con los presupuesto de idoneidad, aptitud, suficiencia y eficacia para alcanzar las pretensiones de los justiciables en el pleno uso y goce del derecho presuntamente violado, sobre todo que con el agotamiento de esa medida se protege el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, previsto constitucionalmente.

Es importante mencionar que conforme a lo dispuesto en el artículo 256, fracción II, del Código electoral local, es posible desprender que **la asamblea general comunitaria se encuentra reconocida como el principal órgano de consulta, designación de cargos y elección de autoridades municipales**, así como para otras formas de consulta y designación validadas por la propia comunidad.

La asamblea general comunitaria, es la reunión de todas aquellas personas nativas de una comunidad, así como por aquellas otras que sin serlo, asumen ser parte de ella por aceptación propia y reconocimiento expreso de la comunidad según sus costumbres y tradiciones.

Su principal atributo es su carácter deliberativo y de gestión, rasgo que le dota de una fuerza definitoria a sus decisiones que gozan de un amplio consenso. Por ello, constituye una verdadera instancia organizativa conformada por hombres y mujeres que residen en la comunidad y que no sólo tienen entre su ámbito de potestades las determinaciones relacionadas con el desarrollo comunitario sino que destacadamente, se erigieron como fundamentales en la elección de sus representantes.

De lo anterior, se advierte que una comunidad indígena goza de la posibilidad de adoptar sus propios mecanismos que determinen su condición política, es decir, nada impide que las comunidades a través de la asamblea general comunitaria establezcan mecanismos propios para la solución del conflicto.

Por tanto, previo a la instauración del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos, como acertadamente señaló la responsable, las partes deben agotar los mecanismos alternos de manejo y resolución de conflictos al interior de la comunidad, como pudiera ser el caso de la consulta directa a la asamblea general.

Lo anterior, como una medida de promoción, respeto y garantía de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas a decidir sobre sus normas, principios, procedimientos y prácticas tradicionales para la solución de sus conflictos, así como a elegir a sus propias autoridades.

En conclusión, dado que los acuerdos de preparación para llevar a cabo la elección de autoridad municipal en San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, no son actos definitivos ni firmes, fue correcto que el Tribunal Estatal Electoral **declarara la improcedencia** del juicio, y estimara procedente remitir la demanda y sus anexos a dicha instancia, para que el Consejo General local proceda a instaurar una consulta general a la colectividad, respecto del procedimiento de renovación de las autoridades municipales en San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca.

**B.** Alegaciones sobre que la responsable no garantiza la protección en la conciencia de la identidad indígena.

Las afirmaciones relacionadas con que la responsable no garantiza la protección en la conciencia de la identidad indígena, con la emisión de la sentencia reclamada son infundadas.

Ya quedaron explicadas las razones por las que la autoridad responsable estimó improcedente el juicio primigenio y ordenó su renvío a la autoridad administrativa electoral local para que se resolviera el conflicto mediante consulta a la asamblea comunitaria y su legalidad.

De manera que con lo que ya se ha demostrado, es posible concluir que con la remisión del expediente para que el Instituto Electoral local conociera del asunto y previera lo conducente para llevar a cabo la consulta a la asamblea comunitaria, respecto del procedimiento para la elección de concejales en San Pablo Coatlán, contrariamente a lo sostenido por los actores sí se garantiza la protección en la conciencia de la identidad indígena de la comunidad a la que pertenecen los actores.

Ya se explicó que la asamblea general comunitaria se encuentra reconocida en el Código electoral, como el principal órgano de consulta, designación de cargos y elección de autoridades municipales, así como para otras formas de consulta y designación validadas por la propia comunidad y que su principal atributo es su carácter deliberativo y de gestión.

De lo anterior, se advierte que una comunidad indígena goza de la posibilidad de adoptar sus propios mecanismos que determinen su condición política, es decir, nada impide que las comunidades a través de la asamblea general comunitaria establezcan mecanismos propios para la solución del conflicto.

De manera que con la decisión de la responsable, de que se resuelva el conflicto a través de la consulta a la asamblea comunitaria se maximiza en la mayor medida posible, el derecho a la libre determinación de la comunidad indígena, y, en consecuencia a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación de los conflictos internos, previsto en los artículos 2 de la Constitución General de la República; 5 y 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como en los artículos 3, 4 y 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Esto porque en dichos sistemas normativos se reconoce que el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas implica que gozan de autonomía para:

- Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

- Aplicar sus propios sistemas normativos internos en la regulación y solución de conflictos internos.

- Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.

Por su parte, la legislación del Estado, en los artículos 25, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 255, párrafos 2 y 6, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación al decidir sus formas internas de convivencia y organización política, y señala al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, como garante de dicho derecho.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento que expresa un amplio consenso de la comunidad internacional y sirve de parámetro, para orientador y definir los derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos, tanto, en el derecho constitucional, como internacional, contempla en su artículo 4, el derecho al autogobierno de los pueblos indígenas, y en el 5, expresamente establece el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

De esta forma, como las autoridades electorales se encuentran obligadas a garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir a sus propias autoridades bajo sus propias normas, procedimientos y prácticas, de manera previa a cualquier determinación que adopte la autoridad electoral, respecto de la elección de autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, el tribunal electoral local debió asegurarse que se agotaron los medios que garanticen el derecho al autogobierno y al verificar que no había sido así en el presente caso, lo renvió para que se resolviera en consulta comunitaria, con lo que se apegó a la normativa indicada.

Esto es así porque, debe tomarse en cuenta que el derecho a la consulta se traduce en la participación efectiva de las comunidades y pueblos indígenas en relación con cualquier decisión que pueda afectar a sus intereses y que son tomadas por las instituciones estatales.

Sobre todo porque tal derecho implica la necesidad de que las comunidades y pueblos indígenas, así como sus integrantes participen de manera efectiva en todas las decisiones que le afecten; lo cual constituye el reconocimiento de la necesidad de involucrar de manera directa e inmediata a dichas comunidades y pueblos en las políticas y acciones estatales que afecten sus intereses y tiene por objetivo evitar tanto la imposición arbitraria de medidas, como la exigencia de tomar en cuenta las necesidades y prioridades de las poblaciones indígenas interesadas o afectadas.

Además, el tribunal responsable dio las bases de cómo debería llevarse a cabo la consulta ciudadana, tomando en cuenta los lineamientos que para ello señaló esta Sala Superior, al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-1740/2012.

Igualmente, destacó los requisitos de validez de las consultas y las obligaciones de las autoridades electorales de proveer lo necesario para lograr que se lleven a cabo elecciones por usos y costumbres en las comunidades indígenas, conforme a los criterios de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sustentados en la Tesis Xll/2013 de rubro **USOS Y COSTUMBRES. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS CONSULTAS EN COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS, PARA CELEBRAR ELECCIONES** y la Tesis XI1/2013 de rubro **COMUNIDADES INDÍGENAS. LA AUTORIDAD ELECTORAL DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ELECCIONES POR USOS Y COSTUMBRES (LEGISLACIÓN DE OAXACA).**

Por ello consideró conveniente la remisión al Consejo General local, del escrito de demanda con sus anexos, para que de forma inmediata en el ámbito de sus facultades llevara a cabo la consulta en la comunidad en cuestión, derivado del conflicto suscitado con la preparación y desarrollo de la elección de los concejales a su ayuntamiento, con la advertencia que la consulta ordenada, debería tener como objetivo la toma de acuerdos necesarios para establecer las bases correspondientes, tendientes a la preparación y desarrollo de las elecciones de los concejales al Ayuntamiento de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca.

Lo relatado pone de manifiesto que con el envío del escrito de demanda al Consejo General del referido instituto, además de dar pleno reconocimiento y eficacia al sistema integral de justicia electoral, en el que se incluyen los mecanismos de diálogo, comunicación e información para la solución de controversias electorales, se fortalece el sistema de justicia estatal, pues se da a las comunidades de los pueblos originarios la oportunidad de resolver sus conflictos electorales, potencializando así, su derecho a la libre autodeterminación.

De ahí lo infundado del planteamiento de los actores.

**C.** Afirmaciones respecto a que conforme a los usos y costumbres del municipio, en la elección de concejales no deben intervenir las agencias municipales.

**D.** Petición sobre la realización de la asamblea general comunitaria de la cabecera municipal, en la que se efectúe la elección a concejales de San Pablo Coatlán.

Los argumentos relacionados con que conforme a los usos y costumbres de la comunidad en cuestión, en la elección de concejales no deben intervenir las agencias municipales, así como la petición sobre la realización de la asamblea general comunitaria de la cabecera municipal, en la que se efectúe la elección a concejales de San Pablo Coatlán, se responderán en conjunto por cuestión de método.

Estas alegaciones son infundadas.

Contrariamente a lo sostenido por los actores no es posible considerar que para la elección de concejales de San Pablo Coatlán, Oaxaca, sólo se lleve a cabo asamblea general comunitaria de la cabecera municipal, ni que sólo participen los ciudadanos de la cabecera municipal, sin las agencias municipales.

En efecto, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 2° apartado A, fracciones I, III, VII; y 8 del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, se desprende que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Por lo que las normas relativas a esos derechos deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de ahí que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como que la Nación Mexicana al tener una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, éstos tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a la libre determinación y a conservar sus instituciones políticas, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema.

Ahora bien, sobre la base anterior, cualquier uso y costumbre no debe rebasar los límites de los derechos fundamentales de las personas. En primer lugar, porque dichas prácticas ancestrales no pueden considerarse en sí un derecho fundamental, sino solamente, en cuanto confluyen y respetan el ejercicio de los derechos fundamentales, en caso contrario, atentan en contra de los principios de igualdad y de no discriminación, entre otros.

Los usos y costumbres tienen por finalidad salvaguardar el derecho de una comunidad a su libre determinación, preservando prácticas ancestrales en las que sus miembros participan, sin embargo, si en la aplicación de usos y costumbres para la elección de cargos concejiles en un ayuntamiento, no tienen cabida todos los integrantes de la comunidad, dicho sistema no contribuye a fortalecer el principio de solidaridad y por lo tanto no es acorde con la ley.

Lo anterior fue determinado por esta Sala Superior, al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-1640/2012.

Ello es así, ya que no se encuentra a discusión si se deben respetar o no los usos y costumbres de los pueblos indígenas, así como a su libre determinación, sino el que dichas prácticas resulten contrarias a los principios en que se sustentan las demás libertades y derechos humanos, entre los que se encuentran la solidaridad, la igualdad y el derecho a sufragar.

En tales condiciones, excluir a los integrantes de la comunidad de San Pablo Coatlán, que pertenecen a las agencias municipales, de la elección de concejales, y sólo permitir la intervención de los ciudadanos de la cabecera municipal, sería un acto discriminatorio que atentaría contra los derechos humanos de los integrantes de la comunidad indígena en cuestión que no participen, lo que implicaría violación al principio de igualdad.

De ahí que los argumentos de los actores sean infundados.

En tales condiciones, al haberse desestimado los motivos de impugnación planteados por los actores, procede confirmar la sentencia impugnada.

Por lo expuesto y fundado, se

**R E S U E L V E**

**ÚNICO**. Se **confirma**, la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil trece, emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, *en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos*, tramitado con el número de expediente JDCI/104/2013, y.

**NOTIFÍQUESE;** **personalmente** a los actores, en el domicilio que para tal efecto señalaron en autos, por conducto del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca; **por correo electrónico,** a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz; **por oficio**, al Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por conducto de su Presidente; a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del citado Instituto, y al Presidente Municipal de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca; y **por estrados** a los demás interesados; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, párrafos 1 y 3; 27, 28, 29 y 84, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 102, 103 y 106, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Devuélvanse los documentos que correspondan, previa razón que de ello se asiente en los autos del presente juicio y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por **unanimidad** de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MAGISTRADO PRESIDENTE**  **JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS** | | |
| **MAGISTRADA**  **MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA** | **MAGISTRADO**  **CONSTANCIO CARRASCO DAZA** | |
| **MAGISTRADO**  **FLAVIO GALVÁN RIVERA** | **MAGISTRADO**  **MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA** | |
| **MAGISTRADO**  **SALVADOR OLIMPO**  **NAVA GOMAR** | | **MAGISTRADO**  **PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ** |
| **SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS**  **FELIPE DE LA MATA PIZAÑA** | | |

1. **Jurisprudencia 28/2011,** consultable en *Compilación 1997-2012 de jurisprudencia y tesis en materia electoral*, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomo jurisprudencia, volumen 1, pp 204 a 206. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Artículo 1.** […] Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley […] Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas./ **Artículo 2:** La Nación Mexicana es única e indivisible. […] A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: […] VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. […] B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. […] [↑](#footnote-ref-2)
3. **Artículo 4.** 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. [↑](#footnote-ref-3)
4. **Jurisprudencia 15/2010,** consultable en *Compilación 1997-2012 de jurisprudencia y tesis en materia electoral*, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomo jurisprudencia, volumen 1, pp. 206 a 208. [↑](#footnote-ref-4)
5. **Jurisprudencia 4/2012,** consultable en *Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,* Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, páginas 18 y 19. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jurisprudencia 7/2002. *Compilación 1997-2012*, Jurisprudencia, Volumen 1, pág. 372. [↑](#footnote-ref-6)
7. Jurisprudencia 7/2013, PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICCIÓN ELECTORAL, aprobada en sesión pública celebrada el veintiséis de junio de dos mil trece, por unanimidad de seis votos. Pendiente de publicación. [↑](#footnote-ref-7)
8. **Jurisprudencia 13/2008**, consultable en *Compilación 1997-2012, jurisprudencia y tesis en materia electoral*, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomo jurisprudencia, volumen 1, pp. 208 y 209. [↑](#footnote-ref-8)
9. Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, *Las Cuestiones Indígenas. Los derechos humanos y las cuestiones indígenas. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen*. Doc. E/CN.4/2004/80. 26 de enero de 2004. [↑](#footnote-ref-9)
10. El veintiocho de abril de dos mil trece, a través de notificación por estrados, dirigida a Mario Canseco Silva y los demás interesados, se la recepción del medio de impugnación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, se turno al Magistrado Narciso Abel Alvarado Vázquez, a efecto de que sustanciara el medio de impugnación y formulara el proyecto de sentencia que corresponda, dicha cédula fue retirada al día siguiente de su publicación. [↑](#footnote-ref-10)
11. **Jurisprudencia 13/2008**, consultable en *Compilación 1997-2012, jurisprudencia y tesis en materia electoral*, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomo jurisprudencia, volumen 1, pp. 206 y 208. [↑](#footnote-ref-11)
12. **Jurisprudencia 28/2011**, consultable en *Compilación 1997-2012, jurisprudencia y tesis en materia electoral*, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomo jurisprudencia, volumen 1, pp. 208 y 209. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Artículo 3.* Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

    *Artículo 4.* Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.

    *Artículo 18.* Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. [↑](#footnote-ref-13)
14. Al respecto, como lo destaca el actual Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, “con independencia de su condición jurídica, la Declaración tiene un peso normativo significativo basado en su alto grado de legitimidad. Esta legitimidad deriva, no sólo del hecho de que haya sido aprobada oficialmente por la mayoría abrumadora de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, sino también de que es el fruto de años de actividades de promoción y lucha de los pueblos indígenas”. Adicionalmente, “aunque la propia Declaración no es jurídicamente vinculante de la misma manera que un tratado, la Declaración refleja compromisos jurídicos que se relacionan con la Carta [de la Organización de Naciones Unidas], otros compromisos asumidos en virtud de tratados y el derecho internacional consuetudinario. La Declaración se basa en las obligaciones generales de derechos humanos de los Estados en virtud de la Carta, y se sustenta en principios fundamentales de derechos humanos, como la no discriminación, la libre determinación y la integridad cultural, que están incorporados en tratados de derechos humanos ampliamente ratificados, como es manifiesto en la labor de los organismos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados. Además, los principios fundamentales de la Declaración se consideran generalmente aceptados en la práctica internacional y de los Estados, y por lo tanto, en esa medida, la Declaración refleja el derecho internacional consuetudinario.” Naciones Unidas, Asamblea General. *Situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.*Informe provisional del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, presentado de conformidad con la resolución 12/13 del Consejo de Derechos Humanos. Doc. A/65/264. 9 de agosto de 2010, párrs. 60-62. [↑](#footnote-ref-14)
15. **Jurisprudencia 15/2008**, consultable en *Compilación 1997-2012, jurisprudencia y tesis en materia electoral*, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomo jurisprudencia, volumen 1, pp. 203 y 204. [↑](#footnote-ref-15)
16. Naciones Unidas, *Situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.*Doc. A/65/264, cit., párrs. 75-82. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rodrigo Sebastián Solá*, Mediaciones comunitarias en conflictos de tierras - Territorios Indígenas,* Revista Nuevamerica*,* no 119, Brasil. [↑](#footnote-ref-17)
18. “**Artículo 267**

    1. Los concejales electos tomarán posesión de sus cargos el primer día de enero del año siguiente al de la elección o, en la fecha en que determinen sus sistemas normativos internos.

    […]” [↑](#footnote-ref-18)
19. Siempre que en esta resolución se invoque una tesis, se refiere a una tesis sustentada por esta Sala Superior, a menos que se indique otra cosa. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral*, Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2012, pp. 254-256. [↑](#footnote-ref-20)
21. Consultable en le Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, pp. 18 y 19. [↑](#footnote-ref-21)
22. Consultable en la *Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral*, Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2012, pp. 372 y 373. [↑](#footnote-ref-22)
23. Resuelto por unanimidad en sesión pública de resolución de 19 de diciembre de 2012. [↑](#footnote-ref-23)
24. **Jurisprudencia 13/2008**, consultable en *Compilación 1997-2012, jurisprudencia y tesis en materia electoral*, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomo jurisprudencia, volumen 1, pp. 208 y 209. [↑](#footnote-ref-24)
25. Aprobado mediante acuerdo CG-IIIPCO-59/2013 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de participación Ciudadana de Oaxaca de 29 de junio de 2013. [↑](#footnote-ref-25)
26. Semejante análisis conjunto es admisible, ya que lo fundamental es que los agravios formulados sean estudiados en su totalidad, independientemente del método que se adopte para su examen. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por esta Sala Superior en la jurisprudencia 04/2000, cuyo rubro es: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. *Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral*, Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2011, pp. 119-120. [↑](#footnote-ref-26)
27. Así, por ejemplo, en la ejecutoria recaída en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1011/2013 y acumulado, fallados en sesión de 12 de septiembre de 2013. [↑](#footnote-ref-27)
28. En sesión pública de resolución de ocho de junio de dos mil once. [↑](#footnote-ref-28)
29. En esa línea como dice León Olivé, un adecuado enfoque pluralista, que supere posiciones absolutistas y relativistas, permite plantear una “sana base para las relaciones entre culturas, sobre un pie de igualdad en el terreno epistémico y en el terreno moral”, así como, se agrega, aun en el ámbito jurídico. Olivé León, *Multiculturalismo y pluralismo*, 2ª ed., México, UNAM, p. 48. [↑](#footnote-ref-29)
30. Este criterio es una adaptación del parámetro establecido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, entre otras, la acción de inconstitucionalidad 9/2005 y la diversa 170/2007. [↑](#footnote-ref-30)
31. Acerca de las razones finalistas, véase, entre otros: Summers, Roberts S, “Two Types of Substantive Reasons: The Core of a Theory of Common-Law Justification”, *Cornell Law Review*, núm. 63, 1978, así como Atienza Manuel, *Curso de argumentación jurídica*, Madrid, Trotta, 2013, pp. 284-285. [↑](#footnote-ref-31)
32. <http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=27781> [↑](#footnote-ref-32)
33. <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=20> [↑](#footnote-ref-33)
34. Cuaderno Accesorio Único del presente expediente. [↑](#footnote-ref-34)
35. Sirve de criterio orientador la tesis plenaria de jurisprudencia P./J. 155/2004 (con número de registro 176707) sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO”. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, año 6, número 12, 2013, pp. 37-38. [↑](#footnote-ref-36)
37. Cuaderno Accesorio Único del presente expediente. [↑](#footnote-ref-37)
38. Cuaderno Accesorio Único del presente expediente. [↑](#footnote-ref-38)
39. “**Artículo 241**

    1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes:

    a) Fácil y libre acceso para los electores;

    b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto;

    c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales, ni por candidatos registrados en la elección de que se trate;

    d) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos; y

    e) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

    2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir los requisitos señalados por los incisos a) y b) del párrafo anterior, los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.” [↑](#footnote-ref-39)
40. “**Artículo 178**

    1. Los lugares para la ubicación de las casillas deberán reunir los requisitos siguientes:

    I.- Hacer posible, cercano, libre y fácil acceso de los electores;

    II.- Permitir la emisión secreta del sufragio;

    III.- No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales, o por dirigentes de partidos políticos;

    IV.- No ser establecimientos fabriles, sindicatos, templos o locales de partidos u organizaciones políticas;

    V.- No ser casas habitadas por candidatos registrados en la elección de que se trate; y

    VI.- No ser locales destinados a la venta o consumo de bebidas embriagantes.

    2. Para la ubicación de las casillas se dará preferencia a los edificios, escuelas públicas y calles con menor circulación, cuando reúnan los requisitos indicados. Ninguna casilla se situará en la misma cuadra o manzana en la que esté ubicado el domicilio de algún local de cualquiera de los partidos, organizaciones políticas y sus candidatos. El consejo electoral que corresponda, verificará que se cumpla cabalmente con ésta*(sic)* disposición.” [↑](#footnote-ref-40)
41. En adelante Tribunal local. [↑](#footnote-ref-41)
42. En adelante Consejo General local. [↑](#footnote-ref-42)
43. En adelante Dirección Ejecutiva. [↑](#footnote-ref-43)
44. Consultable en le Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, pp. 18 y 19. [↑](#footnote-ref-44)
45. Consultable en la *Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral*, Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2012, pp. 372 y 373. [↑](#footnote-ref-45)
46. **Jurisprudencia 13/2008**, consultable en *Compilación 1997-2012, jurisprudencia y tesis en materia electoral*, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomo jurisprudencia, volumen 1, pp. 208 y 209. [↑](#footnote-ref-46)